

Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Escuela de Trabajo Social



La Protección Integral y la institucionalización de niñas, niños y
adolescentes en la Provincia de Santa Fe.
Avances y desafíos pendientes del Sistema de Promoción y Protección de
Derechos.

Alina Lázaro

Tesina de Grado

Licenciatura en Trabajo Social

Directora: Dra. Eugenia M. Ruiz Bry

Rosario, 2016

Índice

Agradecimientos	4
Introducción	5
Capítulo 1: La infancia y la adolescencia como construcción social	11
1.1. Construyendo el “sentimiento de infancia”	11
1.2. La impronta del Siglo XX en la concepción acerca de niñas, niños y adolescentes	16
1.1.2. Antecedentes de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño	16
1.2.2. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Niñas, niños y adolescentes como Sujetos de Derechos	18
Capítulo 2: Cuestión Social, paradigmas acerca de la niñez y la adolescencia y prácticas del Estado.....	21
2.1. El primer antecedente: la intervención de la Sociedad de Beneficencia	21
2.2. Inmigrantes, obreros y niños como “desestabilizadores” del orden social: bases de la Ley de Patronato	23
2.3. Peligro material o moral, los menores de la Ley de Patronato.....	28
2.4. El Estado de Bienestar, la puesta en escena de nuevas prácticas	33
2.5. Entre democracias y gobiernos de facto. Niñas, niños y adolescentes en el periodo de lucha contra el “enemigo” político	38
2.6. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, neoliberalismo y derechos de niñas, niños y adolescentes.....	44
2.7. Niñas, niños y adolescentes como Sujetos de Protección	48
2.8. A pesar de la Protección Integral... ..	52
Capítulo 3: Hacia la Protección Integral	55
3.1. Ley Nacional n° 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	56
3.2. Ley Provincial n° 12.967, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.....	57
3.2.1. El Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.....	61
3.2.2. Medidas de Protección Integrales y Excepcionales	67
3.3. Con miras a la desinstitucionalización	71
3.4. Los “otros” adolescentes	74
Capítulo 4: Gozar de un nivel de vida adecuado, un derecho... ¿para algunos?	77
Capítulo 5: La vida en la institución	82

5.1. El surgimiento de la institución.....	82
5.2. La institución en la actualidad.....	85
5.2.1. Aspectos generales	85
5.2.2. Inserción en la institución	86
5.2.3. El Hogar, niñas, niños y adolescentes y la cotidianidad	87
5.3. Algunas consideraciones a partir del trabajo de campo	92
5.4. Los Estándares de Calidad y la institución de alojamiento	95
Capítulo 6: El Trabajo Social en el campo de los derechos de niñas, niños y adolescentes	98
Capítulo 7: La caja de herramientas	102
7.1. Aprendizajes.....	105
Reflexiones finales	107
Anexos.....	113
Anexo I.....	114
Anexo II	133
Anexo III	141
Bibliografía	142

Agradecimientos

A mis abuelos, por su acompañamiento constante e incondicional durante todos los días de mi vida.

A mis hermanos Julieta y Luciano, por estar presentes en cada momento apoyándome en este recorrido.

A mi mamá y mi papá, quienes confiaron en mí y me permitieron elegir..

A Franco, mi compañero de vida, por su presencia, apoyo y contención, siempre. Por alentarme a hacer lo que me hace feliz.

A Celina, por su amistad infinita.

A Eugenia, por haber sido parte de este proceso, ofreciendo su tiempo, transmitiendo sus saberes, demostrando paciencia y dedicación.

A la universidad pública, por permitirme transitar este recorrido.

Introducción

En nuestro país a partir del año 2005 hemos comenzado a transitar modificaciones legislativas en lo que concierne a niñez y adolescencia. A nivel nacional se ha sancionado la Ley n° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, asimismo, en el año 2009 la provincia de Santa Fe adhiere a ésta a través de la Ley n° 12.967 de Promoción y Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Estas nuevas legislaciones forman parte y amplían lo que desde hace más de medio siglo conocemos como el nuevo paradigma en niñez.

Concebir los derechos de la niñez y la adolescencia de la forma en que ambas leyes pretenden hacerlo no es novedad. Ya en el año 1959 las Naciones Unidas proclama la Declaración de los Derechos del Niño y hacia 1990, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es ratificada en nuestro país por el Congreso de la Nación e incorporada a la Constitución Nacional en la reforma del año 1994.

Si bien ha existido un cambio profundo en las leyes que guían el accionar para con las niñas, niños y adolescentes, aun se hace necesario seguir impulsando diversas modificaciones a los fines de que las mismas se concreten de manera total, especialmente en aquellos aspectos que refieren a la práctica cotidiana; es decir, trascender lo plasmado en papel y llevar a cabo acciones que completamente adhieran a estas nuevas perspectivas.

Es por ello que nos interesa y se constituye como el objetivo primordial de este trabajo el poder conocer los aspectos vinculados a la cotidianidad de niñas, niños y adolescentes institucionalizados de manera transitoria en el marco de la aplicación de la Ley Provincial n° 12.967, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se dará cuenta a lo largo del trabajo de aquellos aspectos que han sido abordados a los fines de dar curso al objetivo arriba mencionado. De este modo, la exploración a diferentes fuentes bibliográficas, legislaciones, entre otros documentos consultados que han sido de gran utilidad para la construcción del estado del arte, así como también el trabajo de campo realizado en una institución que reúne las características de un espacio

de alojamiento transitorio para niñas, niños y adolescentes separados de sus grupos familiares, han dado lugar al desarrollo de esta tesina.

En este sentido, ahondaremos en aquellos aspectos que hacen al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran institucionalizados. Será, por lo tanto, tomada como referencia la derogación de la ley de Patronato y la puesta en escena de las perspectivas de la Protección Integral, enfocándonos en la cotidianidad de niñas, niños y adolescentes que se encuentran institucionalizados transitoriamente a partir de la aplicación de Medidas de Protección Excepcionales a través de las cuales se piensa la restitución y goce de sus derechos.

En el presente trabajo desarrollaremos, primeramente, las diferentes nociones que a lo largo de la historia han existido y existen, acerca de niñas, niños y adolescentes. Se procurará dar cuenta acerca de las prácticas que en las distintas épocas han sido llevadas a cabo, y continúan vigentes hoy para con ellos –ya sea para su control, vigilancia, protección, etc.– y cómo estas van adquiriendo, a través del tiempo, diferentes matices de acuerdo a las percepciones que se consolidan en cada momento histórico.

En el segundo capítulo, se pondrá énfasis en desplegar un recorrido por los momentos nodales de nuestro país en materia de “tratamiento a la niñez” primero, y las perspectivas de derechos de niñas, niños y adolescentes, después. Se realizará un análisis de la Ley Agote, la cual ha estado vigente en nuestro país por casi cien años, y la actual Ley Nacional n° 26.061 –asimismo la adhesión de nuestra provincia a ésta–, argumentadas desde el paradigma de la Protección Integral.

Posteriormente, a través del tercer capítulo, se dará lugar a una instancia de análisis de la Ley Provincial n° 12.967 en lo que respecta a los cambios que ésta plantea. Se hará referencia al modo en que se entiende que niñas, niños y adolescentes han dejado de considerarse meros objetos de tutela para ser concebidos como sujetos de derechos, se examinará el Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de Derechos, así como también se expresarán las responsabilidades, fundamentalmente del Estado, en la función de resguardar y proteger a niñas, niños y adolescentes. Asimismo daremos cuenta de cuáles son actualmente las circunstancias que llevan a que **excepcionalmente** niñas, niños y adolescentes sean separados de su centro de vida – ubicando aquí las diferencias centrales de la actual legislación respecto de la Ley de

Patronato—. De igual modo, se buscará comprender a qué se hace alusión cuando se habla de desinstitucionalización desde este nuevo paradigma.

En el cuarto capítulo expondremos lo que concebimos como la primera y principal vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, vulneración que se constituye como una de las contradicciones fundamentales del actual paradigma: la situación de pobreza estructural que diariamente atraviesan niñas, niños y adolescentes en el país, tomando datos específicos de la provincia de Santa Fe. Si bien entendemos que la actual legislación pretende poner en marcha un andamiaje desvinculado al Patronato —a través del cual la judicialización de los menores, léase “menores en situación de pobreza estructural”, y la criminalización de esa pobreza eran el común denominador de las intervenciones—, creemos fundamental la abolición por completo tanto de dichas prácticas para con la niñez y adolescencia empobrecida —que aun hoy parecieran presentes— así como también la necesidad imperiosa de que dichas condiciones de existencia de niñas, niños y adolescentes —que nada se condicen con los derechos que las legislaciones plantean— sean erradicadas.

Posteriormente será presentado todo aquello que pudo ser conocido a partir del trabajo de campo desarrollado, el cual tuvo lugar en el Hogar “María Elena Walsh”, institución de alojamiento transitorio para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales de la Provincia de Santa Fe¹. Daremos cuenta en dicha instancia de nuestro referente empírico, es decir el “complejo integrado por un espacio o serie de ámbitos (unidad de estudio) y una porción (universo o muestra) de un tipo de población determinada (unidad de análisis)” (Guber, 2005: 206), entendiendo por tal a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, alojados en la institución a partir de la aplicación de medidas de protección excepcionales. Se dará cuenta en el mismo capítulo acerca del trabajo de campo llevado a cabo y la información recabada en dicho proceso; cabe aclarar que entendemos por trabajo de campo, como sostiene Guber (2005: 47), la “presencia directa, generalmente individual y prolongada, del investigador en el lugar donde se encuentran los actores/miembros de la unidad sociocultural que se desea analizar”, es decir la presencia del investigador en la “porción de lo real que se desea conocer, el mundo natural y social en el cual se desenvuelven los grupos humanos que lo constituyen” (Guber, 2005: 47). Asimismo se hará referencia a la obtención de

¹ El nombre de la institución ha sido modificado a los efectos de resguardar la identidad de niñas, niños y adolescentes así como también a los demás sujetos que la constituyen.

información a través de la utilización de técnicas, por un lado la observación participante, la cual consiste en dos actividades principales, desarrolladas en simultáneo, como sugiere Guber (2005: 109) “observar sistemática y controladamente todo aquello que acontece en torno del investigador, se tome parte o no de las actividades en cualquier grado que sea, y participar, tomando parte en las actividades que realizan los miembros de la población en estudio o una parte de ella”; y por otro la realización de entrevista abierta realizada a profesional de la institución, mediante cual fue posible obtener respuestas a los interrogantes formulados –es decir aquellos que habían delimitado en un principio qué se deseaba conocer– como así también lograr un acercamiento a determinados aspectos que fueron introducidos por el propio informante, abriéndose juego a preguntas que no se encontraban estipuladas. A través de ello, es decir del trabajo de campo realizado, fue posible conocer parte de la historia de la institución, cómo y por qué surgió, cuáles eran sus características, sus prácticas para con los sujetos que allí se han encontrado institucionalizados y cómo se halla la misma en la actualidad luego de las modificaciones en las legislaciones respecto a la institucionalización de niñas, niños y adolescentes en espacios de alojamiento transitorio.

En el sexto capítulo será desarrollada nuestra lectura respecto al Trabajo Social como profesión interviniente en el campo de la niñez y la adolescencia, ya sea dentro de las instituciones de alojamiento transitorio de niñas, niños y adolescentes como así también en los diversos ámbitos de actuación profesional en donde se torna imprescindible que las prácticas estén en consonancia con la defensa constante de los derechos.

Seguido a ello se presentará la “caja de herramientas” de la que nos servimos a la hora de la realización del trabajo de campo. De este modo daremos cuenta de la estrategia teórico-metodológica que utilizamos, durante el tiempo que duró nuestra presencia en la institución que hemos tomado de referencia, a los fines de acercarnos al conocimiento de la cotidianidad de las niñas, niños y adolescentes que allí se encuentran alojados. Caja de herramientas que permitió tornar significativo cada uno de los aspectos conocidos al sumergirnos en esa cotidianidad.

Concluyendo, se presentarán las reflexiones finales, permitiéndonos en dicha instancia plasmar lo que la realización y el recorrido de las diversas instancias del

presente trabajo nos han permitido conocer y aprehender. Serán transmitidas de este modo las apreciaciones y consideraciones al respecto en relación a los objetivos propuestos en un inicio.

Nos resulta preciso aclarar en este momento que a lo largo del presente trabajo es posible toparnos con diferentes formas de llamar a lo que desde hace algún tiempo a la fecha nombramos como “niñas, niños y adolescentes”. Mediante el recorrido de los capítulos podremos vislumbrar que por momentos se hará referencia a la infancia, se hablará de menores, de jóvenes, así como también, y de acuerdo al actual paradigma, nos referiremos a ellos como niñas, niños y adolescentes. Todas estas denominaciones han sido formas en que se ha nombrado a las niñas, niños y adolescentes a través del tiempo, correspondiéndose cada una a un momento histórico dado así como también encontrándose presentes en la actualidad, más allá del antagonismo que creemos revisten.

Las palabras no son neutras ni carentes de sentido al contrario, se encuentran completamente habitadas de significaciones, “en todo sistema cultural, sus prácticas, patrones y códigos están sujetos a un número corto o amplio de principios que se expresan a través del lenguaje, el cual simultáneamente, ejerce coerción sobre las ideas, las prácticas y los patrones de cada cultura. Es en esta relación dialéctica como el lenguaje refleja y modela al mundo” (Rodríguez Sala-Gómezgil, 1983: 154). Tales significaciones se evidencian en las intervenciones cotidianas para con niñas, niños y adolescentes, en las políticas que se piensan en pos de ellos, etc. La forma en que nombremos al otro siempre “algo dice” y así también siempre algo otorga, permite, limita.

Fue con la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que se incorpora la noción acerca de niñas, niños y adolescentes como Sujetos de Derechos, deslegitimando aquellas concepciones que depositaban en ellos cualidades vinculadas a sus necesidades, sus carencias, su pasividad, su condición de meros objetos aptos para ser caratulados, judicializados, estigmatizados, criminalizados y tutelados... La instauración de este nuevo paradigma respecto a la niñez y la adolescencia no solo implica un cambio en la forma de nombrar-los sino que genera –o así debería ser– modificaciones en otros planos vinculados a las prácticas llevadas a cabo para con ellos.

Es por ello que la utilización de las diferentes terminologías estará dada de acuerdo al periodo histórico al que se haga referencia. A modo de ejemplo, en aquellas páginas en las cuales se haga alusión al periodo de nuestro país en el que estuvo vigente el Patronato, podrá encontrarse a niñas, niños y adolescentes nombrados como “menores”, entendiendo que de esta forma se los concebía en aquel momento. Aunque de más esté aclararlo, reafirmamos que compartimos el concepto instaurado a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, entendiendo a los mismos como **sujetos activos de derechos**, de todos modos creemos importante plasmar a lo largo del trabajo los conceptos utilizados a través del tiempo para designar a niñas, niños y adolescentes a los fines de dar cuenta qué era lo que se decía en cada momento histórico, y en consecuencia, cómo se actuaba.

Capítulo 1: La infancia y la adolescencia como construcción social

La infancia y la adolescencia no siempre han sido concebidas como actualmente lo hacemos. No es lo mismo pensar la infancia hoy que hacerlo en el contexto de los siglos XV o XVI, como así tampoco hablar de los “adultos pequeños” del Medioevo. Entendemos la infancia y la adolescencia como construcciones sociales, económicas, políticas, culturales, motivo por el cual a través de la historia han sido diversos los modos de nombrarlas así como también las prácticas que les eran destinadas.

Como fue mencionado, al hablar de infancia y adolescencia en tanto categorías sociales, hacemos referencia a construcciones sociales las cuales se caracterizan en principio por su dinamismo, su “capacidad de transformación” en el sentido de que depende de procesos históricos que se hacen eco y se corresponden con los procesos económicos, políticos y culturales de cada sociedad, otorgando significaciones, sentidos, a partir de los cuales se actúa en consecuencia. Las construcciones sociales permiten imprimir una “definición” a algo o alguien, además de ello también sirven de sustento a las prácticas que le serán correspondidas a aquello que se ha definido. Estas construcciones sociales no solo cuentan con la capacidad de nombrar y otorgar prácticas a determinado grupo (en este caso, la infancia y la adolescencia) sino que también conceden ciertos lugares sociales. Como sostiene Casas (2006: 29) “la infancia, en última instancia, es lo que cada sociedad en un momento histórico dado, concibe y dice que es la infancia”.

1.1. Construyendo el “sentimiento de infancia”

Tomando como referencia los diferentes escritos de Ariès (1986, 1987) acerca de la historia de la infancia y la adolescencia, es posible conocer cómo éstas fueron interpretadas a través del tiempo, el lugar que se les asignó y cuáles fueron las prácticas destinadas a ellas. El historiador da cuenta mediante los estudios llevados a cabo – abocándose en algunos casos a la interpretación de la iconografía de diferentes periodos

históricos— de aspectos que permiten comprender cómo se llegó al “sentimiento de infancia” del que hoy en día somos, en parte, herederos.

En un primer momento Ariès (Op. Cit.) señala que en la Antigüedad, la concepción y nacimiento de un niño no era sinónimo de la llegada de un “hijo”. Para que el recién nacido lograra “aceptación” el padre debía elevarlo, levantarlo del suelo donde había sido dejado, es decir, era el jefe de familia quien decidía tomar (aceptar) al recién nacido o abandonarlo. Aquellos que no habían sido aceptados estarían librados a la suerte de que alguien los recoja. Ariès (1986: 6) refiere “la vida le era dada dos veces: la primera cuando salía del vientre de la madre y la segunda cuando el padre lo <<elevaba>> (...) los niños <<elevados>> habrían sido favorecidos por una elección, mientras que a los otros se les abandonaba: se mataba a los hijos no deseados de los esclavos, o a los niños libres no deseados por las más diversas razones, no sólo a los hijos de la miseria y del adulterio.”

Se infiere que, independientemente de la condición de clase social en la que se encontraran los progenitores, los recién nacidos se enfrentaban a la posibilidad de ser abandonados. Los más pobres por no poder afrontar la crianza de un nuevo hijo, aquellos pertenecientes a la clase media ante la “angustia” que les generaba el no poder brindarles determinado nivel (el autor refiere que el temor de quienes pertenecían a las clases medias de ver a sus hijos “echados a perder” los hacía preferir conservar solo un determinado número de descendientes y concentrar en ellos sus esfuerzos), y por otro lado, las clases privilegiadas exponían a los recién nacidos debido a la amenaza o perturbación que éste podía significar a las disposiciones testamentarias. De esta manera, el abandono se constituía como una práctica habitual ante la llegada de un niño que no era deseado o que no se creía conveniente su conservación en la familia. Aquellos que sí eran aceptados —y pertenecientes a las clases más privilegiadas— generalmente eran confiados a las nodrizas quienes se encargarían de las tareas cotidianas de cuidado, alimentación, educación y demás hasta la llegada a la pubertad, siendo el contacto entre los hijos y sus padres, escaso. En cambio, para aquellos sectores menos favorecidos —económicamente—, la crianza y educación de los hijos provenía de la misma familia (Veyne, 1987).

Al recorrer la historia de la infancia y la adolescencia podemos advertir que tanto en el periodo mencionado recientemente como con el advenimiento de los siglos

posteriores, si bien dentro de la familia los sentimientos de amor y afecto no estaban ausentes, estos no eran significativos o esenciales para ella ya que la misma no se basaba en su función afectiva sino principalmente en la conservación de bienes y en el ejercicio común de un oficio. Es posible vislumbrar la forma en que esas “criaturas”, durante largo período visualizadas como pequeños adultos, al poco tiempo que podían valerse por sí mismos comenzaban a formar parte del mundo adulto y se los trataba como tales.

Durante el transcurso de la Edad Media, indica Ariès (Op. Cit.), se inicia un proceso, aunque lento, de modificación de aquellas formas de pensar a los hijos. Hacia los siglos X y XI se dio comienzo a un periodo en el cual el ejercicio de la sexualidad empieza a establecerse como un acto fundamental dentro del matrimonio para la fecundación, la procreación y la expansión de las familias; durante cierto tiempo comienza a tornarse un verdadero acto de riqueza, tornándose relevantes los lazos sanguíneos. Se instaura de este modo el matrimonio como sacramento religioso, promoviéndose la indisolubilidad de este y sumando a ello la noción de sexualidad casi directamente ligada a la procreación, comenzando así a tener la Iglesia mayor influencia en la conformación de las familias.

Se dará de este modo una revalorización de la fecundidad y de los niños, donde el poder de las familias residía, en parte, en el número de sus miembros. El abandono y el infanticidio serán considerados delitos, comenzando a ser tutelados por el Estado y la Iglesia, teniendo esta última gran influencia en ello en la medida en que se buscaba propulsar ciertos hábitos que pretendían erradicar los índices de infanticidio. Ariès (Op. Cit.) indica que muchas de las muertes ocurrían como accidentes domésticos, por este motivo la Iglesia, en tanto sostenía que no eran “accidentes” los hechos de muertes de niños sino que entendía a los padres como responsables de aquellos sucesos, pretendía instaurar determinadas costumbres, como ejemplo de ello el autor habla de la proposición de que los niños duerman separados de sus padres (a los fines de evitar, por ejemplo, muertes por asfixia).

De esta manera es posible conocer cómo a través del tiempo comienzan a moverse los cimientos de las concepciones acerca de las familias, la constitución de estas y especialmente el lugar que ocupaban los niños.

Por otro lado, Ariès (1987) a través del análisis de las diferentes representaciones artísticas da cuenta de una nueva forma en la que se empezaba a representar a los niños. Se inicia un período en el que se deja de exhibirlos como adultos en cuerpos pequeños, percibiéndose por el contrario mayor protagonismo y cierto grado de “ternura” que trataban de transmitirse en las imágenes. Tomando esta asociación entre niños y el nuevo atributo ligado a la ternura, es posible hacer referencia a los modos en que el autor plantea que ésta intentaba transmitirse; es en este sentido que se hace mención sobre determinados atuendos que fundamentalmente los niños pertenecientes a las clases más privilegiadas comenzarán a vestir, como ejemplo de ello refiere la utilización por parte de algunos niños varones de vestimentas que se asemejaban a indumentarias femeninas, lo que se suponía les otorgaba mayores posibilidades de generar sentimientos de ternura y debilidad.

Con el arribo del siglo XVIII comenzará a esbozarse una nueva concepción acerca de los niños. La Revolución Industrial, al tiempo que permitió y extendió la explotación al campo de la niñez y al cuerpo de los niños, empleados estos como fuerza de trabajo al igual que los adultos, conllevó paralelamente que se inicien ciertos movimientos que bregaban por la regulación del trabajo infantil –aunque no su abolición–, especialmente provenientes de la medicina, donde se ponía de manifiesto los inconvenientes que generaba el trabajo en los niños, lo contraproducente que eran las actividades en las que los empleaban, entendiendo también que las mismas conllevaban un daño tanto físico como moral. A lo largo del siglo XIX fueron sancionadas en diferentes países leyes 'protectoras de los niños trabajadores', a los fines de regular el trabajo infantil.

Durante este periodo si bien continuaban y se acentuaban los sentimientos afectivos hacia los niños, también se hacían presentes –y como condición necesaria para una “adecuada crianza”– la severidad y rigurosidad con las que debían ser tratados; la ternura y la sensibilidad eran necesarias, pero también lo era la severidad que venía dada a través de la educación. Comienzan a constituirse las escuelas como ámbitos para la infancia, como sostiene Bustelo (2012) será la escolarización la que marcará el surgimiento de la categoría infancia en el capitalismo industrial.

En lo que respecta a la adolescencia durante el periodo analizado recientemente, podríamos decir que esta se encontraba de cierto modo no definida, incluso es posible

considerarla como una etapa novedosa, la cual ha comenzado a esbozarse como tal de manera reciente. Como hemos visto, durante un largo periodo de tiempo los niños –al momento que comenzaban a valerse por sí mismos, es decir cuando superaban el periodo de mayor vulnerabilidad– formaban parte ya del mundo de los adultos. En determinados momentos y sectores sociales, llegada cierta edad los niños varones se iniciaban en oficios junto a sus padres, y las niñas por su parte comenzaban su recorrido como 'mujeres'.

Este proceso –en el cual se han ido construyendo, de-construyendo y vuelto a construir las diferentes formas de concebir la infancia, tanto desde la Edad Media hasta los últimos siglos mencionados–, estuvo siempre vinculado a las condiciones económicas, políticas, culturales, religiosas e históricas. Ningún proceso y ningún modo de entender la infancia en cada uno de estos momentos (y aun en la actualidad) pueden pensarse ajenos al contexto que le dio sustento tanto al surgimiento de dichas nociones como así también al desmantelamiento de éstas y la aparición de otras nuevas.

Poder realizar este recorrido respecto a infancia y adolescencia en tanto construcciones sociales nos permite conocer los modos en que en los diferentes periodos niñas, niños y adolescentes fueron “monopolizados” de acuerdo a los intereses del mundo adulto, esto se hace evidente en el no aceptar un hijo porque causaría una desestabilización del patrimonio, en fecundar porque de esta manera aumentaría el prestigio, en los “intercambios” de las hijas para mantener cierta reputación, etc.

No obstante es posible hacer referencia al concepto de adultocentrismo, entendiendo por tal “una relación asimétrica y tensional de poder entre los adultos y los jóvenes” (Arévalo, 1996, en UNICEF, 2013, p.18) es decir, una relación desigual y de subordinación de niños y jóvenes respecto a los adultos, a través de la cual estos últimos ejercen poder –oprimiendo, callando y manipulando–, sobre quienes se encuentran “por debajo”. Es posible observar cómo a través de la historia los adultos han decidido y actuado de acuerdo a sus prioridades, más allá de los intereses, deseos, sufrimientos y necesidades de niñas, niños y jóvenes, y esto, aun hoy, sigue siendo una práctica lamentablemente común, aunque con otros velos.

1.2. La impronta del Siglo XX en la concepción acerca de niñas, niños y adolescentes

En el mes de noviembre del año 1989 a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas se adopta la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN). Anteriormente habían sido aprobadas Declaraciones y otros tratados, pero será la CIDN la que marcará un antes y un después, no solo reunirá lo que documentos anteriores enunciaban sino también los ampliará e incorporará nuevas nociones respecto a la niñez.

1.1.2. Antecedentes de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

Pues bien, ¿cuáles fueron esos documentos anteriores que forman parte de los antecedentes de la CIDN? Identificaremos cuatro instrumentos fundamentales a la hora de hablar de enunciaciones previas a la Convención, estos son la Declaración de Ginebra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño y la proclamación del Año Internacional del Niño. Brindaremos una breve descripción de estos antecedentes a los fines de dar cuenta de qué trata cada uno.

-Declaración de Ginebra: aprobada por la Sociedad de Naciones en el año 1924, se constituye como el primer antecedente de la CIDN. A través de ésta se reconoce y afirma por primera vez la existencia de necesidades específicas de los niños así como también la responsabilidad de los adultos para con ellos. La misma postulaba siete principios, a saber:

“I. El niño debe ser protegido excluyendo toda consideración de raza, nacionalidad o creencia.

II. El niño debe ser ayudado, respetando la integridad de la familia.

III. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material, moral y espiritual.

IV. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser asistido; el niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y el abandonado deben ser recogidos.

V. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad.

VI. El niño debe disfrutar completamente las medidas de previsión y seguridad sociales; el niño debe, cuando llegue el momento, ser puesto en condiciones de ganarse la vida, protegiéndole de cualquier explotación.

VII. El niño debe ser educado, inculcándole la convicción de que sus mejores cualidades deben ser puestas al servicio del prójimo” (Jiménez García, 2000: 8-9).

-Declaración Universal de los Derechos Humanos: aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948. Mediante sus 30 artículos queda asentado y afirmado que todos los hombres por igual, sin distinción alguna, gozan de la libertad, igualdad y derechos que en ella se contemplan (derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos). Entre otros, podemos destacar la presencia de ciertos artículos que refieren a la familia, la cual es considerada como elemento natural y fundamental de la sociedad, y en tanto tal el derecho de ésta a recibir protección de la sociedad y del Estado, asimismo, en el artículo 25 de dicha Declaración se afirma que la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencia especiales.

-Declaración de los Derechos del Niño: Tratado Internacional elaborado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y aprobada en el año 1959. La misma reunía diez principios, los cuales a diferencia de la Declaración de Ginebra, ya plasmaba en ella la noción de derechos. Los mismos hacían referencia a la protección, el cuidado y la atención que los niños merecen.

-Año Internacional del Niño: El año 1979 fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el “Año Internacional del Niño”, buscando así promover centrar la atención hacia los problemas de la infancia que repercutirían en el futuro. El Año Internacional del Niño contaba con los siguientes objetivos:

“-Alentar a todos los países, ricos y pobres, para que revisen sus programas para la promoción del bienestar de los niños, y movilicen el apoyo a los programas de

acción, tanto nacionales como locales, de acuerdo con las condiciones de cada país, sus necesidades y prioridades.

- Crear conciencia de las necesidades especiales de los niños, entre aquellas personas que toman las decisiones, y entre el público en general.

- Promover el reconocimiento de que existe una unión de enorme importancia entre los programas en favor de los niños, por una parte, y el progreso social y económico, por la otra.

- Lograr implementar medidas específicas y prácticas, con metas realizables, para beneficio de los niños, a nivel nacional, tanto a corto como a largo plazo” (Revista Latinoamericana de Psicología, 1979: 173).

Durante el transcurso del siglo XX si bien comenzaba a hablarse de derechos y de cuestiones que debían ser cumplidas y garantizadas para con los niños, no era un enfoque completamente de derechos el que primaba en la sociedad para con ellos sino más bien una noción asistencialista que desembocaba en la reconocida doctrina de la situación irregular, donde el “menor” era concebido como un objeto y no como un sujeto de derechos, objeto que podía ser tutelado, asistido, “objeto de prestaciones y de protección, pero también muy a menudo objeto de explotación y de malos tratos por parte de los adultos” (Campana, 2014: 138).

1.2.2. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Niñas, niños y adolescentes como Sujetos de Derechos

Ahora bien, luego de haber analizado los antecedentes de la CIDN, nos centraremos en ella. Fue a partir de su aprobación cuando se comienza a hablar puntualmente de los derechos de niñas, niños y adolescentes como parte integrante de los **derechos humanos** fundamentales y a través de la cual se las y los interpreta como **sujetos de derechos**. Es por ello que se entiende que “aquellas situaciones que atraviesa el individuo y que requieren de protección dejan de ser descriptas en términos de necesidades humanas, para definirse en términos de derechos y –por consiguiente– en términos de obligaciones de responder para que se efectivicen” (Murga y Anzola,

2011: 18). Se hace posible ubicar la delimitación de un antes y un después en lo que respecta a la niñez y sus derechos.

¿Qué significa que niñas, niños y adolescentes sean Sujetos de Derechos? Pues bien, nada más y nada menos que la titularidad de éstos. Admitir que son sujetos de derecho es reconocer que “‘tienen derecho a...’, y no solamente que los Estados, o las familias, o los adultos ‘deben’ nutrirlos, alimentarlos, protegerlos, cuidarlos y educarlos” (Campana, 2014: 139). Se propone así una alternativa a la noción de “asistencia a las necesidades” para colocar el énfasis en el **deber de garantizar derechos**.

“Esta diferencia entre necesidades y derechos tiene importantes consecuencias en la práctica ya que los derechos generan deberes y responsabilidades basadas en estándares objetivos, mientras que las necesidades no. Satisfacer necesidades puede implicar un enfoque basado en la caridad –en la que los beneficiarios dependen de la compasión o buena voluntad– o en el asistencialismo, pero no constituyen un reclamo exigible y por tanto ejecutable legalmente, lo cual modifica esencialmente el sentido y orientación de las intervenciones” (Murga y Anzola, 2011: 18).

La CIDN marca una ruptura con las consideraciones anteriores acerca del tema en cuestión. Mediante sus cincuenta y cuatro artículos da cuenta de la titularidad de los derechos por parte de niñas, niños y adolescentes e indica cuáles son las medidas a seguir por parte de los Estados para que estos derechos sean respetados y cumplidos.

Este tratado internacional hace alusión desde un primer momento al valor de la familia como el ámbito principal de cuidado y protección para niñas, niños y adolescentes y, tras anunciar ello, indica que son los Estados quienes deben garantizar que padres y madres cumplan con sus funciones y deberes respecto a sus hijos. De allí en más se continúa con el nombramiento de derechos que son el reflejo de la Declaración de los Derechos Humanos, es decir, se hace mención a los derechos que niñas, niños y adolescentes poseen respecto a su identidad, sus opiniones, sus expresiones, la igualdad de condiciones sin distinción alguna, el derecho a la salud, a la educación, a estar protegidos contra todo tipo de explotación (económica, sexual, laboral), a recibir asistencia, entre otros. Más adelante daremos cuenta de la forma en que en nuestro país esta Convención fue incorporada a la Constitución Nacional en el año 1994, y el trayecto que debió recorrerse luego, y durante más de una década, para

no solo poseer una legislación acorde a estos criterios sino también comenzar a incorporarlos en las prácticas cotidianas para con niñas, niños y adolescentes.

Finalizando, retomamos lo que en un inicio fue planteado: no siempre hubo niñas, niños y adolescentes tal como los entendemos hoy. Observamos, a través del análisis llevado a cabo que la infancia, en su carácter de construcción social, ha ido tomando diferentes recorridos o modos de interpretarse de acuerdo a las condiciones económicas, políticas, culturales e históricas presentes en cada momento determinado. En los distintos períodos presentados se vislumbran las relaciones de poder imperantes, que permiten pensar cómo niñas, niños y adolescentes sobrevivían –y sobreviven hoy– a relaciones completamente asimétricas, donde se los sitúa en un lugar de subordinación respecto a la posición de superioridad que ocupan los adultos de acuerdo a sus intereses, concepciones y privilegios “indiscutibles”. En la mayoría de las sociedades modernas, el capitalismo, el patriarcado y el adultocentrismo han ido diseñando las formas en las que las personas pueden/deben relacionarse, donde se deja en claro quién se ubica “por encima del otro”. El contexto cambia, las leyes se modifican, los derechos se expanden a mujeres, niñas, niños y adolescentes, pero aun así la esencia de las relaciones de poder y subordinación entre unos y otros sigue “marcando la cancha”, delimitando las posibilidades, los lugares a ocupar por cada uno, etc.

Capítulo 2: Cuestión Social, paradigmas acerca de la niñez y la adolescencia y prácticas del Estado

Cuando los niños no eran niños, sino “menores” otra ley era la que los contemplaba, una que se encargaba de ellos, que los vigilaba, los atrapaba y los castigaba. Una ley que no hablaba de derechos, ni de protección integral; ingenuamente podríamos esperar descubrir algún artículo que refiera al interés superior o a su derecho a ser oídos.

Esta, la Ley n° 10.903 de Patronato de Menores, también conocida como Ley Agote, ha estado presente en nuestro país por casi cien años. En 1919 fue aprobada y si bien se ha intentado desterrarla desde hace tiempo, aquellos menores debieron esperar hasta el año 2005 para poder convertirse en niñas, niños o adolescentes, o para al menos así estar representados en el texto de una ley en nuestro país.

Es por ello que en este momento consideramos imprescindible poder recorrer la historia del sistema de atención/protección en nuestro país, lo que será presentado en distintos períodos históricos para dar cuenta de los diferentes paradigmas y las concepciones ideológicas que fueron delineando el accionar y las prácticas para con las niñas, niños y adolescentes, así como también la forma en la que en cada uno de estos momentos se los protegía –o se decía que se procuraba hacerlo–.

2.1. El primer antecedente: la intervención de la Sociedad de Beneficencia

Es este primer período, que en nuestro país podemos ubicar desde el año 1600 a 1900, en el cual existe un fuerte predominio de lo privado. Se conjugaban aquí los intereses desplegados especialmente por la Iglesia Católica y los portadores de ideas positivistas y liberales, donde el rol activo era cumplido por la sociedad civil y sus organizaciones, llenando el vacío del Estado, ya que de acuerdo a los pensamientos de la época, el Estado mínimo solo se encargaba de garantizar derechos y libertades individuales, la propiedad privada, la seguridad interior y la defensa nacional.

Indagando en la historia de nuestro país y basándonos especialmente en aquellos aspectos que hacen a la intervención para con la infancia, podemos recordar la renombrada Casa de los Niños Expósitos, la cual fue fundada en el mes de agosto del año 1779 y la que, de alguna manera, es la primera institución que podemos reconocer en donde el objetivo primordial era la protección de niñas y niños abandonados. Esta funcionaba como lo que conocemos con el nombre de Casa Cuna; donde se brindaba asilo tanto a quienes eran encontrados abandonados así como también a aquellos que eran dejados en el torno de manera anónima.

Hacia el año 1823 Bernardino Rivadavia dará creación a la Sociedad de Beneficencia, primera institución dedicada a la intervención en lo social, donde las mujeres pertenecientes a la elite tenían el papel más significativo. Hasta aquel momento la asistencia estaba directamente vinculada a la Iglesia Católica. Rivadavia, al ser nombrado Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, introduce ciertas reformas en la vida política, económica y social de Buenos Aires.

En el año 1822 había sido sancionada la Ley de Reforma del Clero, la cual proponía expulsar del terreno de la asistencia a las órdenes religiosas y limitar el poder y la participación de la Iglesia en la política; al ser creada la Sociedad de Beneficencia, ésta “tomará a su cargo las instituciones expropiadas a las órdenes religiosas, y si bien es considerada como una actividad del poder público, presenta la particularidad de ‘delegación’ del Estado, constituyéndose en una asociación filantrópica privada con autonomía tanto en las decisiones como en la administración de los fondos, aunque sostenida por el aporte estatal” (Parra, 1999: 103).

Hacia el año 1892 surge en la Capital Federal el Patronato de la Infancia, institución específica de asistencia directa a niñas, niños y adolescentes en situación de abandono, compartiendo el espacio con la Sociedad de Beneficencia.

Durante este periodo prima la idea de que la atención de aquellos más débiles y empobrecidos de la sociedad correspondía a las instituciones de la beneficencia, relegando el papel del Estado a un mínimo respaldo a éstas. La preocupación por alojar a aquellos abandonados se basaba principalmente en la concepción moral de la miseria que sostenían, donde la pobreza era asimilable a la desviación social, por lo tanto, aquellos huérfanos debían ser asilados, siendo al mismo tiempo disciplinados.

“El accionar de la ‘Sociedad de Damas de la Beneficencia’ estaba basado en la tutela entendida como una relación entre ricos y pobres donde los sectores acaudalados ‘tutelan’ a los pobres mediante consejos de orden moral, de manera tal que estos incorporen los valores morales necesarios para lograr ser un hombre o mujer ‘de bien’ y ‘trabajador’, para –de esta manera– salir de la situación de pobreza. La moralización constituye la modalidad de intervención, cuyo sistema de ‘ayuda’ se centraba en el control de los valores morales más que en la distribución de bienes materiales, o en todo caso, estas quedaban supeditadas a la ‘buena conducta de los beneficiarios’. (...) La política social y la política dirigida a la niñez de esos momentos estaban a cargo de esta organización privada. Durante su reinado –de aproximadamente un siglo- se crearon en la mayoría de las provincias argentinas diversas instituciones, prioritariamente asilos, tanto para ancianos como para niños, centrándose su accionar en la ciudad y provincia de Buenos Aires” (Firpo- Salazar, 2011: 22).

Desde el periodo de consolidación de la Sociedad de Beneficencia hasta su fin fueron creados diferentes institutos de minoridad. Se recibieron donaciones económicas, terrenos y edificios mediante los cuales pudieron ser creados las distintas residencias. Estos institutos fueron fundados para alojar y asistir, en lo que respecta a cuestiones de salud y educación, a niños y niñas así como también algunos de estos estaban preparados para alojar a jóvenes de más de 14 años de edad. Los internados contaban con perfiles educativos, tanto para niñas como para niños, desde lo concerniente a la educación preescolar y primaria, educación moral y religiosa, como así también talleres y enseñanzas en oficios. Las mujeres disponían de talleres de bordado, telar, economía doméstica; en cuanto a los varones, la educación se abocaba en muchos casos a oficios como zapatería, carpintería, así como también un perfil agropecuario (ganadería, tambo, avicultura, etc.). Además de ello, había institutos puntuales para el tratamiento de niños con tuberculosis, ciegos o 'débiles mentales'.

2.2. Inmigrantes, obreros y niños como “desestabilizadores” del orden social: bases de la Ley de Patronato

Ahora bien, ¿cómo surge la Ley de Patronato? ¿A raíz de qué, por qué se plantea su necesidad? Podemos mencionar algunas palabras clave: inmigrantes, obreros,

anarquistas... la combinación perfecta para el 'desarrollo de la inmoralidad, el delito, el peligro'.

Teniendo como base el modelo agro-exportador en marcha, hacia finales del siglo XIX fueron implementadas políticas inmigratorias con el objetivo de poblar el país, lo que permitió que muchos extranjeros arribaran a estas tierras, dando lugar al mayor índice de inmigrantes que ingresaron al país. La política inmigratoria buscaba promover el arribo de población europea (especialmente de países como Inglaterra, Alemania, Suecia) bajo la promesa de entregarles la propiedad de tierras y herramientas para la producción agrícola; además de buscar resolver los problemas demográficos también se esperaba encontrar una respuesta al “problema cultural”, sosteniendo que quienes llegarían a estas tierras generarían una “inyección de civilización europea”, sustituyendo la “barbarie autóctona”, la cual no se correspondía con el nuevo proyecto nacional. Se produjo, en los años siguientes, un acelerado proceso de urbanización.

Daroqui y Guemureman (1999) sostienen que la gran mayoría de los inmigrantes, si bien provenían de países europeos –tal como se deseaba–, no poseían el perfil buscado. Los recién llegados traían consigo su experiencia sindical y política, la cual compartían con el movimiento obrero que desde algunos años se había comenzado a gestar en nuestro país. Ellos eran quienes, mediante la lucha obrera, la resistencia y el cuestionamiento del orden social, se enfrentaban a aquella situación de vulneración en la que se encontraban. No eran los europeos “civilizados”, los deseados; eran hombres, mujeres, niñas y niños que llegaron en busca de un lugar donde trabajar y vivir, muchos de ellos escapando de la persecución, de la miseria, de la muerte. Trabajadores, sí, pero no el tipo de trabajadores que se esperaba. Trabajadores con la impronta de Europa, con el sabor de la anarquía y la protesta en los labios, estrechamente vinculados a la lucha por la conquista de los derechos fundamentales, como es el derecho al trabajo.

La gran mayoría de los recién llegados se radicó en centros urbanos del país, contribuyendo así al crecimiento de ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Formaron parte de la mano de obra que se concentró en los grandes talleres y fábricas, dando esto la posibilidad de organización de los trabajadores.

Durante los años 1880-1900 fueron creados diversos sindicatos por oficio así como también se incrementaron las huelgas y acciones de protestas de los trabajadores, siendo la crisis argentina de 1890 el motor para la activación del movimiento obrero.

Fue a partir de la asunción de Alfredo Palacios en el año 1904, primer diputado socialista de toda América, cuando se comienza a dar importancia a los pedidos de los trabajadores. Las luchas obreras en aquel entonces reclamaban la jornada laboral de 8 horas, la prohibición del trabajo a los menores de 14 años, la abolición del trabajo nocturno para mujeres y menores de 18 años, el descanso no interrumpido para todos los trabajadores de 36 horas semanales, entre otros.

La creciente lucha obrera generaba una inquietud cada vez mayor por el control hacia las masas por aquellos que bregaban por el mantenimiento del “orden social”. Pero esto no era lo único. El crecimiento demográfico tanto en las zonas urbana y rural como el empeoramiento de las condiciones económicas en ambas, se constituyen como temas de interés de determinados sectores. Los médicos higienistas empiezan a tener participación en aquel contexto. Sus postulados referían a las condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores más empobrecidos de quienes se decía que ponían no solo en peligro la salud desde el aspecto físico sino que era una “amenaza para el orden social”. De este modo, la vida en los conventillos era vista por los sectores conservadores, así como también por los higienistas, como el lugar proclive para el desarrollo de epidemias físicas, “sociales” y “morales”, tales como el alcoholismo, la prostitución, el vicio... Este supuesto enlace entre pobreza y enfermedad dio lugar a la puesta en escena, una vez más, de prácticas de control social.

“... los dos tipos de peligros que estos médicos tuvieron permanentemente en cuenta...la fábrica y el conventillo los preocuparon por el efecto que tenían sobre sus ocupantes, aunque tal vez haya sido mayor su inquietud por los riesgos a los que exponían al resto de la población. Se trataba de amenazas físicas, morales y sociales: enfermedades, ‘vicios’ y protestas masivas y tumultuosas. Estaban en juego, por consiguiente, la salud, los valores y los intereses político-económicos de los grupos dirigentes (...)” (Recalde, 1997 citado en Parra, 1999, p.118-119).

Esta consideración estigmatizante acerca de la supuesta existencia y propulsión de enfermedades “sociales” y/o “morales”, las cuales eran directamente atribuidas a los sectores obreros, no solo implicaban la denominación de dichos males sino que también se indicaba el “tratamiento” que debía conllevar; demandándose al Estado una mayor intervención.

Encontramos aquí aspectos que permiten comenzar a hablar de la cuestión social entendiendo por tal a la “expresión del proceso de formación y desarrollo de la clase obrera y de su ingreso en el escenario político de la sociedad, exigiendo su reconocimiento como clase por parte de empresarios y del Estado. Es la manifestación, en lo cotidiano de la vida social, de la contradicción entre el proletariado y la burguesía, la cual pasa a exigir otros tipos de intervención, más allá de la caridad y de la represión” (Iamamoto-Carvahlo, 1984 citado en Garma-Campana, 2006 p.11); dicho esto y teniendo en cuenta que en cada período histórico la cuestión social va reconfigurándose, podemos decir que en aquel entonces ésta se expresaba en los problemas vinculados a los sectores populares, hacia los cuales –otros sectores– pretendían que se ejerzan determinadas prácticas de control.

Se hacía visible en el país la presencia de una importante masa de desocupados que se acrecentaba, permitiendo al mismo tiempo la ampliación de las áreas urbanas, especialmente de ciudades como Buenos Aires y Rosario. El pronunciado crecimiento poblacional tuvo como resultado que la clase trabajadora esté una y otra vez, como mencionamos anteriormente, en boca de aquellos quienes defendían el “orden moral y social”. Aquellos que se caracterizaban por ser obreros y con ideologías principalmente inclinadas hacia el socialismo y el anarquismo constituían aquí un peligro. Y no solo por sus ideologías sino también por su estilo de vida, eran esas familias quienes residían en conventillos, que no eran parte de los cánones de vida “normal y moral”. Así eran visualizados, eran los peligrosos, los de mala vida, los inmorales. A ellos se les atribuían la violencia, la delincuencia, el abandono, la desviación. ¿Qué hacer con ellos entonces? Pues bien, sobre ellos era necesario operar. Sobre ellos, los que desestabilizaban el orden social.

Pero no solo se debía actuar para proteger a la sociedad de aquellos adultos, de los hombres y mujeres potencialmente peligrosos, sino que se tornó imprescindible no perder de vista a sus hijos. Ellos fueron los menores, esos hijos. La escena principal no era ocupada solo por los huérfanos o los niños abandonados encomendados a la Sociedad de Beneficencia sino que ahora se trataba de menores que, al igual que “ciertos” adultos, ponían en cuestión el orden social.

Ellos eran los menores de la posterior Ley Agote. Los hijos de los peligrosos, de los revoltosos, de los inmorales. Se comenzó a contar en el país con leyes para aquellos

adultos, para los obreros, para los extranjeros, y también llegó el momento en que se contó con una ley específica para los menores.

En aquellos menores se pensó, en quienes vivían en conventillos, con hábitos y costumbres 'indecentes e inmorales', aquellos a quienes por su situación de pobreza podía leerse el supuesto futuro inmediato que los esperaba, marcado por la delincuencia, la criminalidad y conductas completamente ajenas a las reglas de “la moral”.

Destacamos aquí la concepción dicotómica “niño/menor” que había comenzado a hacerse visible desde ya hacía algunos años, a partir de la etapa fundacional para la historia de la infancia iniciada a través de la educación (escolarización).

“A partir de los 80, la niñez se transforma claramente en un objeto de institucionalización estatal, particularmente por medio de la escuela pública, concebida como eslabón entre la familia y el Estado y como vehículo de modernidad y progreso. Como consecuencia del saber pedagógico y de la creación de los agentes del sistema escolar –los maestros- se irá configurando (...) la “identidad del niño-alumno”. La escuela debía producir esa identidad, lo cual requería disolver las marcas sociales originales presentes en los niños de diferentes sectores sociales y fundar una “igualdad imaginaria” necesaria para el futuro de la nación. Sin embargo, ya en el discurso sarmientino (...) se señalaba la existencia de “otros niños”, los que devendrían en la identidad de “niño-menor”. Esos “otros niños” serían aquellos que no revestían la capacidad de educabilidad necesaria por parte de la escuela y necesitarían una institucionalidad particular.”(Roigé, 2010: 30)

Los menores no encasillaban en el modelo sarmientino de “niño-alumno” ni en los ideales de la familia burguesa tan promovidos en aquel momento, sino que se encontraban al margen de todo aquello. Por este motivo, como sostienen Firpo y Salazar (2011: 46) “la institucionalidad y las prácticas que se consolidaron en la categoría ‘niño’ iban a estar relacionadas a la familia y a la educación, mientras que las definidas para el ‘menor’ (generalmente pertenecientes a sectores pobres), iban a estar relacionadas con la institucionalización y el trabajo”.

“Las instituciones cerradas o alejadas de la ciudad daban cuenta de la concepción respecto de la cual había que evitar el contacto de estos ‘menores’ con los otros niños, a fin de evitar todo tipo de ‘contagio’, la arquitectura de las instituciones de

estos momentos así lo demuestra: edificios fríos, oscuros y húmedos con altos muros, para impedir todo tipo de contacto con el afuera; a su vez, mientras los niños-alumnos hacían uso del guardapolvo blanco (representando la pureza), los ‘menores’ eran diferenciados de éstos haciéndolos usar guardapolvos grises o azules (demostrando impureza)” (Firpo-Salazar, 2011: 47).

2.3. Peligro material o moral, los menores de la Ley de Patronato

Como fue dicho, no cualquier niño era un “menor”. No cualquier hijo era un menor. Un menor era así llamado en la medida en que éste era pobre, por lo tanto asociado al peligro que él constituía para el conjunto de la sociedad, o si el mismo se encontraba en peligro. Los menores –en peligro material o moral, o los menores peligrosos–, se concebían como cuerpos plausibles para recibir “protección” y corrección.

El Dr. Agote, que hacia el año 1919 se desempeñaba como diputado conservador, propuso dos iniciativas, por un lado un Proyecto de Ley de Tutela del Estado y por otro, de Prohibición de Venta de Diarios y Revistas y todo oficio en la vía pública para los menores de 15 años de edad. Ambas se complementaron y dieron lugar a la Ley de Patronato de Menores. Esta apuntó a la regulación tutelar de los menores que se encontraran en “riesgo material o moral” o que significaran un “peligro”.

Como afirman Daroqui y Guemureman (1999: 21-22) “con el transcurso de los años quedó evidenciado que el trasfondo implícito de esta ley, era la idea de defensa social, de profunda raigambre positivista y peligrosista. La idea del utilitarismo penal de preservar a una mayoría no desviada de los “ataques” de una minoría que sí lo era –no importaba que en potencia o en acto– dio lugar a la confección de un cuerpo normativo profundamente anti-garantista en lo jurídico y violatorio de los derechos humanos, defecto este aumentado para con la franja etaria minoril merced a su vulnerabilidad”. Teniendo en cuenta lo que sostienen las autoras podemos entrever la presencia de la criminalización y judicialización de la pobreza, así como la formalización por parte del Estado del control social sobre la infancia pobre.

En el texto de la Ley de Patronato n° 10.903 podemos dilucidar a qué se hace referencia cuando se hace alusión al abandono material o moral, así como también de qué se trata el peligro moral. Del artículo 21 de dicha legislación extraemos que:

“(…) se entenderá por abandono material o moral o peligro moral, la incitación por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud física o moral; a la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego o con ladrones o gente viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido los 18 años de edad, vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las calles o lugares públicos, o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud”.

En estos casos, se trate de un “menor peligroso” o un “menor en peligro”, la respuesta era la misma, apelar a la judicialización. Los menores separados de sus padres o los que se hallaran en estado de abandono quedaban así bajo la tutela estatal. Todo “menor” recibía el mismo tratamiento, eran separados de su familia con fines “asistenciales” así como también correctivos.

“Es ineficaz la distinción legal entre menores abandonados y delincuentes... es de importancia sustancial –que la diaria experiencia confirma en los establecimientos de reforma y curación– la aplicación de medidas de seguridad (reeducadoras, probatorias y eliminatorias, según los casos) que deben aplicarse a los menores abandonados, peligrosos pervertidos o en estado de simple inconducta” (Julio Alfonsín, 1937 citado en Eroles, 2002: 58).

Los jueces ejercían el patronato del Estado sobre los menores, disponiendo de su vida y su libertad. De esta manera, se encontraban habilitados para disponer de aquellos a quienes consideraran en estado de abandono, ya sea material o moral, generándose innumerables arbitrariedades. “Se concretiza la idea del ‘menor’ –además– como ‘objeto’, ya que el Estado –por intermedio de los jueces– puede decidir sobre ellos sin que los padres, ni los mismos protagonistas, es decir los niños y jóvenes, puedan defenderse” (Firpo-Salazar, 2011: 47).

El Estado decidía su futuro. Muchos fueron los que pasaron sus días en hogares, en reformatorios, en donde la “protección” se consolidaba pura y exclusivamente en la violación y restricción de derechos. Pero, al no poseer la titularidad de tales derechos, es imposible que exista una vulneración de estos.

En el año 1931, a través de un decreto emanado por el gobierno del General José Félix Uriburu, es creado el Patronato Nacional de Menores, organismo de carácter nacional que pretendía abordar la cuestión de la infancia. Dicho organismo perteneció hasta el año 1944 al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Es la primera institución oficial de envergadura que intenta centralizar y controlar las políticas estatales concernientes a la “minoridad abandonada y delincuente”, es decir a niñas, niños y adolescentes abandonados por el Estado y condenados a ser 'delincuentes' por su propia situación sociocultural.

“Al Patronato Nacional de Menores le corresponde dirigir y administrar los establecimientos tutelares que dependen del gobierno nacional; proyectar planes para la edificación de nuevas instituciones en Capital Federal, provincias y territorios nacionales; proponer medidas administrativas o legislativas para la protección de los menores; presentar reglamentaciones o leyes para que los establecimientos oficiales, que tienen a su cargo a menores de ambos sexos, pasen a depender directamente de la Comisión Honoraria con el fin de “coordinar y unificar su acción”; y participar y controlar la colocación de menores huérfanos o abandonados en instituciones particulares cuando los establecimientos dependientes del Patronato no puedan encargarse de ellos. Para el cumplimiento de todas estas funciones, el PNM posee la facultad de actuar en forma conjunta con los Jueces y Defensores de Menores, así como con los patronatos provinciales y las instituciones privadas que se ocupan de la asistencia a la infancia” (Giménez, 2009: 5).

Como fue mencionado, muchos de los institutos para menores que se crearon a partir de la década de 1930, es decir a partir del decreto que da origen al Patronato Nacional de Menores, fueron fundados desde la Sociedad de Beneficencia.

De acuerdo a Eroles (2002: 30), en el periodo que transcurre desde esta década hasta 1945, “el sistema tiene tres pivotes:

- a) la figura prestigiosa y omnímoda de los jueces de menores

b) la Dirección de Menores, organismo técnico-administrativo que supervisa el sistema de institutos dependientes del Estado nacional, fundamentalmente los dedicados a menores varones con problemas de conducta

c) la Sociedad de Beneficencia y el Patronato de la Infancia, responsables del manejo de la mayoría de los institutos asistenciales y de los dedicados a la atención de niñas.”

Si bien en este periodo se logra contar con una legislación mediante la cual se asumía y legitimaba la intervención del Estado respecto a los menores, ya sea en situaciones donde los padres abandonaran a sus hijos, cometieran delitos contra ellos o los colocaran en situaciones de peligro moral o material, o cuando los mismos menores sean los autores de situaciones peligrosas para el resto de la sociedad, esta legislación no garantizaba más que la **legalidad de la represión** con la que se actuaba así como también la constante estigmatización, criminalización y control social hacia determinados sectores poblacionales.

Se concebía la pobreza en sí como un delito, pero no un delito del cual eran víctimas quienes día tras día vivían en condiciones paupérrimas sino que ellos, los que padecían dichas condiciones de pobreza, eran quienes ponían constantemente en peligro al resto de la sociedad. Desde la arista desde la cual se lo mire, eran los culpables y responsables de los supuestos males, tales como las pestes, las conductas desviadas e inmorales, el delito, el peligro, etc., y por lo tanto debían pagar por ello.

A partir de la gran depresión de 1929 se inicia un periodo de cambio. En nuestro país, como en tantos otros, haciendo eco de las transformaciones que a nivel mundial se sucedían, cesa el modelo económico vigente, instaurándose la industrialización por sustitución de importaciones. Tras el cierre de los mercados europeos y la depreciación de las exportaciones agropecuarias argentinas, durante la década del '30, la elite se vio forzada a adoptar ciertas medidas. De esta manera se dará lugar al posterior crecimiento en el territorio nacional de las industrias y talleres manufactureros, y así también un proceso de transformación en lo que concierne a la conformación de la estructura social de nuestro país.

Entre las décadas de 1930 y 1940 se instalaron en las ciudades y alrededores establecimientos fabriles, generando productos de consumo que ya no se conseguían

mediante las importaciones. Ello conllevó un proceso de migraciones internas permitiendo el crecimiento poblacional, radicándose migrantes de las zonas rurales en los centros urbanos del país como Buenos Aires, Córdoba y Rosario; dándose de esta manera también la conformación de cordones de poblaciones en los alrededores de las ciudades. La atracción ejercida por las nuevas oportunidades de empleo que surgían en las industrias y en las actividades de servicios permitió que el área metropolitana comenzara a poblarse de provincianos, creciendo el número de estos a mediados de la década del '30 y especialmente a partir de 1940.

Este crecimiento de la población en las grandes ciudades y sus alrededores trajo a su vez, como consecuencia, la emergencia de nuevos barrios, en muchos casos caracterizados por la precariedad, por no contar con servicios básicos, por problemas referidos a la salubridad, etc.; dándose lugar a la conformación de lo que conocemos como villas o barrios pobres.

Este escenario social traerá cambios. Emergen a partir de allí dos nuevas figuras, dos nuevos sectores, por un lado los industriales (los dueños de los medios de producción) y por otro, quienes conformaban la fuerza de trabajo, los nuevos trabajadores que habían arribado a las ciudades, y quienes se constituirán luego en la “nueva clase obrera”.

Esta etapa estará signada nuevamente por conflictos laborales, donde el reclamo y las huelgas por los derechos de los trabajadores se encontraron presentes y donde el Estado interviene una vez más para sostener el modelo económico vigente así como también el orden social.

Durante estas primeras décadas del siglo XX, como sostiene Emilio García Méndez (1994: 4), teniendo en cuenta este contexto se evidencia a su vez un “crecimiento significativo del mundo de los menores”, donde la “falta de recursos, o si se quiere la falta de una voluntad política que permite priorizar aquellas categorías vulnerables más afectadas por la crisis, motivaron la judicialización de este problema. La doctrina de la situación irregular constituyó el soporte jurídico ideal para legitimar las prioridades establecidas”.

2.4. El Estado de Bienestar, la puesta en escena de nuevas prácticas

Hacia mediados de la década de 1940, más precisamente a partir de la asunción de Juan Domingo Perón como presidente pueblo argentino, se fundan las bases del Estado de Bienestar o Estado Social, evidenciándose un nuevo modo respecto a la intervención estatal y la relación entre Estado y sociedad.

El Estado Benefactor “consiste en un conjunto de instituciones públicas supuestamente destinadas a elevar la calidad de vida de la fuerza de trabajo o de la población en su conjunto y a reducir las diferencias sociales ocasionadas por el funcionamiento del mercado. Ellas operan en el terreno de la distribución secundaria del ingreso mediante transferencias monetarias directas (pensiones, prestaciones por desempleo o asignaciones familiares) o indirectas (subsidio a los productos de consumo básico), provisión de bienes (programas de complementación alimentaria) y prestación de servicios (educación/salud)” (Isuani, 1991, citado en Firpo-Salazar, 2001, p.27).

Es durante este período de la historia argentina donde se primordialmente se hace hincapié en la “universalización de los derechos” como lo son la salud, la educación, el trabajo, la vivienda. Este giro en la concepción de los derechos y las intenciones de universalizar los mismos permitió dar un salto respecto a la consideración de lo que corresponde a lo público, especialmente al Estado. “El Estado peronista procuró extender sus apoyos a la amplia franja de sectores populares no sindicalizados, con quienes estableció una comunicación profunda, aunque de índole diferente, a través de Eva Perón y de la Fundación que llevó su nombre” (Romero, 1994: 148).

La niñez, en este sentido, deja de ser pensada como un problema (en cuanto a aquellos niños sobre los cuales el Estado operaba a través de la judicialización porque se trataba de menores que estaban por fuera de los ideales de normalidad y moralidad de la época) y pasan a instalarse como el centro de atención de las políticas de Estado. A mediados de la década de 1940 se da inicio a una nueva concepción acerca de la niñez y la juventud la cual, de acuerdo a Carli (2000), es planteada como una interpelación política de los niños y jóvenes. La autora plantea que se piensa a la niñez y la juventud

como “depositaria” de la acción social del Estado por un lado, y “heredera y continuadora” de la nueva cultura política, por otro.

Niños y jóvenes no solo son tenidos en cuenta en las acciones y políticas del Estado sino que al mismo tiempo se los postula como protagonistas, especialmente concibiéndolos como los actores fundamentales del futuro de la nación. Es interesante la lectura en lo que respecta a la pedagogía y la política vinculada a la niñez durante el peronismo y cómo de esta manera se proponía no solo que sean los “privilegiados” de las políticas sociales del Estado sino lograr en ellos los futuros ciudadanos, respetuosos de la patria, transmisores del peronismo, “sujetos políticos con responsabilidad pública en los destinos de la nación” (Carli, 2000: 29).

Para este proyecto político del peronismo, se comienza a poner el mayor énfasis en la educación. La escuela ya no era el espacio del niño-alumno (el niño de familia acorde a los ideales sarmientinos) sino que a partir de aquel momento la institución escolar se constituía como el lugar para todos los niños. Se funda así la escolaridad en base a determinados pilares, por un lado la gratuidad, la obligatoriedad y principalmente la concepción de la educación como un derecho. Para que esto pueda concretarse se llevaron a cabo en distintos puntos del país no solo la creación y el sostenimiento de instituciones educativas sino también la generación de condiciones para garantizar la igualdad de oportunidades en lo relativo al aspecto educativo. Se diseñaron circuitos de enseñanza en lugares donde no se hallaban establecimientos, se brindaron soluciones a problemas referidos al transporte, se realizaba entrega de materiales, fueron creados comedores escolares, internados y semi-internados en casos que hayan sido necesarios, etc. A partir de ello se pretendía garantizar el acceso a la educación a los niños y jóvenes como así también el fortalecimiento a las familias para promover la inserción escolar de los hijos.

En el año 1946 fue creada la Fundación Eva Perón, institución destinada a proporcionar asistencia social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. A partir de allí, la Sociedad de Beneficencia queda desarticulada y sus bienes e instalaciones son transferidos al ámbito estatal.

Es menester destacar que el lema que se sostenía principalmente desde la Fundación Eva Perón era el de “justicia social”, ni filantropía, beneficencia o caridad, sino aquello que correspondía simplemente al pueblo. Los fondos de la Fundación

provenían de aportes de los trabajadores sindicalizados, de las loterías, casinos e hipódromos como así también de donaciones de empresarios y recursos asignados a través de leyes y decretos. Existía un interés por diferenciarse de las anteriores organizaciones de la caridad, “en la Fundación no se distinguía entre merecedores y no merecedores de ayuda. Se hablaba de derechos sociales y la ayuda no se limitaba a la satisfacción de una necesidad básica. Una de las frases que mejor simboliza el sentido que Eva Perón le imprimió a su obra fue: 'donde hay una necesidad, hay un derecho.'” (Golbert, 2010: 94). La Fundación Eva Perón destinaba su acción primordialmente a aquellos sectores poblacionales más pobres, aquellos quienes no se encontraban cubiertos por un sindicato, los ancianos, las familias numerosas, los discapacitados, los niños y las mujeres, las jefas de hogar sin una ocupación estable, etc. Se promovía desde allí una prioridad en lo que refiere a la atención del bienestar de los niños pero planteándolo desde una idea integral de protección y entendiendo menester la protección de la familia obrera en su conjunto.

En aquel entonces “el área de Menores pasa a integrar las funciones de la flamante Dirección Nacional de Asistencia Social, cuya ley de creación 13.341, le otorga en su art. 2 ‘la asistencia del menor abandonado, huérfano o delincuente, proveyendo a su educación, instrucción y formación completa y la de aquellos cuyos padres o representantes legales se encuentren física, económica o legalmente impedidos de hacerlo’. (...) se comienza a poner énfasis en los aspectos preventivos y en el fortalecimiento de la familia” (Eroles, 2002: 31).

A partir de aquí podemos señalar que en materia de niñez la política del Estado promueve el inicio de un cambio sustancial, colocándose el acento ahora en una política más bien global e integral. Esto nos conduce a pensar que durante aquel momento se le otorga importancia a aquellos determinantes que condicionaban la realidad de algunos sectores, abandonando las nociones para las cuales las poblaciones más vulneradas eran las responsables únicas de las situaciones que atravesaban.

Al indagar y recorrer diferentes estudios realizados en nuestro país en relación a este periodo histórico, creemos interesante dar cuenta de algunos aspectos que deben ser considerados. Tras el manifiesto interés del peronismo por lograr una disminución de la distancia existente entre las condiciones en las que se hallaban los sectores populares respecto de aquellos más acomodados, muchas de las acciones efectuadas bajo el

postulado de una atención integral a la infancia y las familias fueron entendidas como prácticas con cierto carácter arbitrario y de reclusión para con los niños.

“La extensión del bienestar social a la población infantil, planteaba la permanencia de ciertas prácticas de tutela con rasgos autoritarios. Si bien, la cuestión apareció emparentada con la protección de la familia obrera, y de hecho la legislación y las nuevas normas promovieron la conservación de ese núcleo primario, en la práctica, muchas de las obras emprendidas, establecieron un régimen de internación, y muchas veces el desplazamiento de sus lugares de origen” (Aversa, 2008: 9).

Durante el gobierno de Perón hubo dos instituciones emblemáticas, estas fueron la Ciudad Infantil y la Ciudad Estudiantil, en la Capital Federal, y los distintos Hogares Escuela que se fundaron en el territorio nacional. Estas distaban demasiado de las instituciones de alojamiento anteriores. De acuerdo a los registros e imágenes que dan cuenta de las mismas, se puede indicar que estas contaban con una infraestructura no solo novedosa para la época sino también de amplias dimensiones y confort, como así también lo era el mobiliario que formaba parte de ellas; poseían espacios de esparcimiento completamente adaptados a las edades de los niños y jóvenes que allí se encontraban. Siguiendo la lectura del libro “La razón de mi vida” de Eva Perón, es posible comprender por qué estas instituciones eran concebidas de esta forma así como también por qué la importancia de aquellos aspectos o detalles que, como veremos luego, fueron motivo de críticas para algunos sectores. Esta aspiración de poder brindar una mejor calidad de vida a aquellos que se encontraban más vulnerados era parte del posicionamiento de Eva Perón. En estas instituciones se cubrían las necesidades de alimentación, salud y tanto los niños y niñas como los jóvenes que allí residían asistían a establecimientos educativos (los más grandes concurrían a escuelas por fuera de la Ciudad Estudiantil, lo que permitía estar en contacto directo la comunidad) y además, al interior de ambas instituciones se contaba con espacios donde se les permitía desarrollar sus capacidades deportivas, artísticas, etc. Por su parte, en los Hogares Escuela del interior del país (los que se constituían de cierto modo como una especie de réplica de las instituciones mencionadas) se contaba con espacios de enseñanza vinculados en muchos casos a las características particulares de cada provincia. En ellas se desempeñaban trabajadores como asistentes sociales, enfermeras, maestras, médicos, preceptoras y serenos, quienes diariamente desarrollaban sus funciones y la atención de niñas, niños y jóvenes que allí residían.

Ahora bien, interesa conocer el por qué de estas instituciones, qué es lo que se buscaba y cómo se lograba el ingreso de un niño a éstas. La noción central: romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Se pretendía de este modo poder alterar de manera radical con esta continuidad, y la forma de hacerlo era alejando al niño de ese ámbito. Se buscaba establecer un nuevo punto de partida para una nueva generación de ciudadanos.

En lo que respecta al ingreso de un niño a una institución, ello dependía de determinados indicadores que debían ser tenidos en cuenta. Para que un niño pueda ingresar, de acuerdo a los reglamentos, existían ciertas prioridades, condiciones que debían ser evaluadas. Estas eran el abandono material o moral, que los padres o encargados padecieran enfermedades, las situaciones de extrema pobreza o indigencia, la orfandad, la situación irregular de los padres o que estos estuvieran separados, encontrarse en situación de desequilibrio económico a causa de que el jefe de familia se hallara desocupado, entre otros. Eran las visitadoras domiciliarias (visitadoras sociales) quienes detectaban las necesidades de la población y determinaban el ingreso o no de un niño a las instituciones de acuerdo a los requisitos arriba mencionados. Luego de la evaluación de la situación, el niño podía ser admitido en dos modalidades, interno o externo.

De acuerdo a las fuentes consultadas, en este período son fomentadas las instituciones con regímenes semi-abiertas, permitiendo el contacto frecuente de quienes se encontraban residiendo en ellas y el resto de la sociedad, estas instituciones se enfocaban en mantener el contacto fluido de los niños que allí residían con la familia de origen y además, respecto a la familia, se promovía “engarzarla al ambiente social”, lo cual era pretendido a través de la unión en matrimonio de los padres, el bautismo de los hijos, resolviendo necesidades materiales, etc.

Si bien no compartimos, cabe mencionar en este momento ciertas críticas que desde algunos sectores se han realizado respecto a estas instituciones y el accionar de la Fundación Eva Perón. Carli (2000) refiere que fundamentalmente éstas fueron efectuadas en cuanto a lo que las instituciones ofrecían a quienes allí se encontraban residiendo, considerando que en ellas existía cierta “abundancia” y lujo tanto respecto a bienes materiales como así también a las actividades que se les brindaba y a las que tenían acceso niñas, niños y jóvenes, actividades “alejadas” de las realidades a las que

estas poblaciones estaban acostumbradas y que formaban parte de su vida cotidiana; se presumía la existencia de una cierta prédica de los estilos más bien burgueses, que nada tenían que ver con los sectores más desfavorecidos que era a quienes estaban destinadas dichas instituciones.

Esta época, y teniendo en cuenta lo mencionado en las últimas páginas, es a nuestro entender el periodo en el cual se hacen evidentes otras formas de interpretar la niñez. Manifestar esto no significa que hayan desaparecido de la escena en aquel entonces aquellas concepciones acerca del peligro/abandono moral y material (ya que ello continuaba siendo un factor relevante a la hora de evaluar las condiciones en las que los niños se encontraban), pero sí nos permitimos afirmar que otras concepciones constituyeron parte del escenario.

Sostenemos que, más allá de los modos en las que muchas acciones fueron llevadas a cabo y de las intenciones ideológicas del peronismo que adjudicaban un lugar central a los niños y los jóvenes, fue en este periodo donde la niñez es interpretada desde otra óptica, desde lo que se ha dado en llamar el paradigma de la niñez en riesgo social. De acuerdo a Eroles (2002: 63), este paradigma se trata de “una caracterización más social que jurídica, que permite describir la situación problemática que afecta a un niño o a un adolescente sin hacer juicios morales ni asignar necesariamente responsabilidades individuales. Riesgo es un conjunto de factores que determinan la posibilidad de que se produzca un daño o una vulneración.”

Desde esta perspectiva se infiere que las deficiencias sociales estructurales son las que influyen y permiten la existencia de situaciones que ponen en riesgo a la población; motivo por el cual, podemos decir, se proponía que una forma de romper con las condiciones de pobreza y exclusión era cortando con la transmisión intergeneracional de la pobreza a la que se hacía alusión, generando así una nueva “camada” de ciudadanos, los cuales serían en el futuro los niños que durante aquel tiempo se beneficiarían con estas instituciones de asistencia, protección y formación al servicio de los menos favorecidos.

2.5. Entre democracias y gobiernos de facto. Niñas, niños y adolescentes en el periodo de lucha contra el “enemigo” político

A partir del derrocamiento del presidente Perón y hasta el año 1983 han alternado en nuestro país gobiernos de facto como así también electos democráticamente. Procuraremos dar cuenta de este periodo y los modos en que fue abordada la niñez y adolescencia.

El primero de los golpes de Estado fue en el mes de septiembre del año 1955. La “Revolución Libertadora” tenía como principal objetivo quitar el “totalitarismo” del peronismo en la sociedad argentina. El peronismo fue proscripto, se prohibió la sola mención de Perón o Eva así como la exhibición de símbolos ligados al Justicialismo. Fue intervenida la CGT y diferentes sindicatos. Se buscaba desarticular el peronismo en la sociedad así como también el debilitamiento de la clase trabajadora –respecto a derechos adquiridos–, y para aquellos que se rebelaran a lo establecido por el gobierno militar hubo detenciones y fusilamientos.

Entre los años 1958 y 1966 el país contó con gobiernos democráticos los cuales luego de un tiempo, y al no responder a los intereses de los sectores dominantes, fueron derrocados. En un primer momento se encontró en la presidencia Arturo Frondizi (1958-1962) y luego Arturo Illia (1963-1966), siendo José María Guido presidente provisional –respondiendo a los intereses y mandatos de las Fuerzas Armadas– durante poco más de un año luego del derrocamiento de Frondizi hasta la asunción de Illia. Tanto durante el gobierno de Frondizi como de Illia, fueron garantizados de cierta manera a los sindicalistas y trabajadores determinados derechos que habían sido debilitados, así como también ambos permitieron una apertura al peronismo. En el periodo de la presidencia de Illia las políticas implementadas ponían en escena una mayor apertura de la intervención estatal, ejemplo de ellas son el fomento de la industria nacional, el aumento del presupuesto en educación, la sanción de la Ley de Salario Mínimo, Vital y Móvil, entre otras que fueron entendidas como desestabilizantes del orden, una amenaza constante para los sectores económicos y políticos dominantes por lo que el entonces presidente fue destituido.

En aquel entonces, y a poco del golpe militar del año 1955, había sido creado el Instituto Nacional de Acción Social, disolviéndose la Fundación Eva Perón, demostrándose un proceso de retroceso del Estado respecto a su intervención como garante de los derechos de los ciudadanos. Cabe destacar que en el año 1956 con el advenimiento de Caritas en Argentina, se vuelve a depositar en las instituciones de la

sociedad civil (en este caso perteneciente a la Iglesia Católica) la responsabilidad en cuanto a la asistencia para las poblaciones más necesitadas, alejándose el Estado de esta función y, posteriormente, durante la presidencia de Frondizi, la Sociedad de Beneficencia volverá a retomar su accionar para con las poblaciones 'humildes y merecedoras'.

Es así que los sectores que anteriormente hallaban en las políticas estatales cierto respaldo a su situación –tanto los trabajadores como los desocupados, los ancianos, etc.– comienzan ahora a notar a su lado la presencia de la desprotección. Con este escenario y sumando a ello la legislación vigente en materia de niñez –la Ley 10.903– se volvía a dejar abierta la puerta para la continuidad de la criminalización, la estigmatización y la judicialización de niñas, niños y adolescentes pobres.

A partir de 1966 y durante siete años, los ciudadanos argentinos se encontraron comandados por fuerzas militares. La “Revolución Argentina”, en nombre de la Doctrina de la Seguridad Nacional, buscaba combatir a los “enemigos políticos” y establecer el control militar. Los hechos de violencia, la represión a los trabajadores, los despidos masivos, la intervención a los sindicatos, la represión en la conocida “noche de los bastones largos”, entre otros episodios, caracterizaron esta etapa. “Hechos como el Rosariazo y el Cordobazo dan cuenta del clima de disconformidad frente a las medidas tomadas por el gobierno nacional de facto, como también de la potencia de estos movimientos opositores cuya consecuencia inmediata será la caída de Onganía” (Bustos, 2015: 30). En este contexto se decide preparar el terreno para elecciones presidenciales, negándole a Juan Domingo Perón su participación en las mismas.

En el año 1973 asume la presidencia Héctor Cámpora, candidato del sector peronista, quien renuncia a poco de su asunción, debiéndose realizarse elecciones presidenciales. En esta ocasión Perón sí se encontraba autorizado a presentar su candidatura, retomando nuevamente a la presidencia de la nación. En el mes de julio de 1974, tras su fallecimiento, ocupa dicho lugar su esposa, María Estela Martínez. Dos años después y en un contexto social y político signado por un clima de inestabilidad, terrorismo, asesinatos, un nuevo y último golpe de Estado se hace presente en nuestro país.

Durante la última dictadura cívico militar, la cual se extendió desde el año 1976 a 1983, y bajo el nombre de “Proceso de Reorganización Nacional”, se llevaron a cabo

genocidios y crímenes de lesa humanidad, donde miles de argentinos fueron detenidos, torturados y desaparecidos durante este periodo, acciones que fueron fundamentadas – nuevamente– de acuerdo al interés en restablecer el “orden social”.

Persecución, secuestro y torturas a estudiantes, trabajadores, sindicalistas y a todos aquellos considerados subversivos, peligrosos; centros clandestinos de detención, desaparición de personas; apropiación de niños; los vuelos de la muerte; las censuras a diferentes artistas fueron, entre tantas otras, algunos de los actos atroces que se han cometido.

En lo que respecta al aspecto económico de aquel momento recordamos aun hoy el “lema” del entonces Ministro de Economía Martínez de Hoz, 'achicar el Estado es agrandar la Nación'. Congelamiento de salarios, caída de ingresos de los trabajadores, ingreso de capital extranjero, fueron algunas de las medidas implementadas.

No obstante ello, hubo sectores que para nada se contentaban con lo que en el país sucedía. A poco de la instauración del último gobierno de facto comienzan a hacerse presentes en las plazas y en las calles las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes buscaban –y buscan aun en la actualidad– a sus hijos, sus nietos desaparecidos, quienes reclaman justicia por quienes ya no están y aparición de aquellos que aun encuentran negada su identidad

La lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, desplegadas en gran parte del territorio nacional, la Guerra de Malvinas –mediante la cual se pretendía conseguir adhesión al gobierno militar– y el subsiguiente derrocamiento en las islas, con el atroz saldo de muertes que la misma ha dejado, eran junto a otros los motores del descontento de la población que llevó luego a la renuncia de Galtieri, el entonces presidente argentino. Debido a ello asume Bignone, el último presidente de facto que hemos tenido en nuestro país. Gracias a la lucha constante de aquellos sectores que día tras día daban cuenta de la ilegalidad del gobierno, gracias a la acción de aquellos que luchaban por la restauración de un orden democrático, que manifestaban el malestar que envolvía al país, se anunciará la celebración de elecciones presidenciales en el año 1983.

Entendemos necesario poder realizar una breve descripción respecto de lo que fue, durante la última dictadura militar, la consideración hacia niñas y niños. Durante este periodo fueron alrededor de quinientos niñas y niños quienes nacieron en centros de

detención y tortura, donde sus madres eran sometidas a las más grandes atrocidades que pueden conocerse de nuestra historia. Surge aquí el interrogante acerca de la concepción que se tenía acerca de niñas y niños, que arbitrariamente nacían en condiciones inhumanas y que también durante años se les ha negado –y aun en la actualidad– su identidad, su origen, su historia. Niñas y niños nacían en cautiverio, en las mismas condiciones en las que se hallaban sus madres, para quienes se veían obstruidas las posibilidades de llevar adelante un parto respetado y humanizado sino que, por el contrario, las condiciones en las que las mujeres daban a luz eran aberrantes: “mujeres embarazadas en trance a tener familia, atadas de pies y manos a las camas y con suero permanente para acelerar el proceso de parto” (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas [CONADEP], 2015: 312).

Siguiendo los relatos presentados en el Informe “Nunca Más”, de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, es posible inferir que estas prácticas no eran aisladas sino que los tratos violentos, vulneradores y atroces eran ejercidos de manera cotidiana para con las mujeres que se encontraban embarazadas en cautiverio.

“...Una vez nacida la criatura, la madre era ‘invitada’ a escribir una carta a sus familiares a los que supuestamente le llevarían el niño” (CONADEP, 2015: 307). Los niños permanecían durante solo algunas horas con sus madres y posteriormente eran separados de ellas bajo el pretexto de que serían llevados con familiares. Ello no ocurría de este modo sino que, por el contrario, no volvía saberse ni de los recién nacidos como así tampoco de aquellas madres que se encontraban detenidas. “Despojados de su identidad y arrebatados a sus familiares, los niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo una profunda herida abierta en nuestra sociedad” (CONADEP, 2015: 303).

Muchos de esas niñas y niños fueron adoptados, inscriptos como hijos propios de las familias apropiadoras, sin ningún rastro de su origen ni de su historia. A otros, en cambio, se los declaraba “abandonados” y por lo tanto se recurría a su institucionalización, la obtención de guardas para algunas familias o su adopción. En todos los casos, existía la legitimación de parte del aparato judicial en complicidad con el poder de la Junta Militar para que estas acciones se concretaran, negándole tanto a la familia de origen el conocimiento de estos niños que habían nacido en cautiverio como

así también, y fundamentalmente, negando la identidad a aquellas niñas, niños y bebés apropiados, origen que aun no todos han logrado conocer.

Asimismo, el horror, el secuestro, la tortura y desaparición también fueron situaciones vividas por niñas, niños y adolescentes. De acuerdo al Informe de la CONADEP muchos fueron quienes presenciaron episodios donde sus domicilios fueron allanados, sus padres secuestrados –en muchas ocasiones también siendo niñas, niños y adolescentes detenidos y torturados–, y finalmente desaparecidos. Se relata también acerca de situaciones en las cuales han sido los mismos niños –a muy corta edad– quienes, al haber sido testigos de dichos episodios de tortura y violencia, y ante la desaparición de sus padres, tomaron determinaciones tan drásticas como la de quitarse la vida.

El período en el cual se lleva a cabo la última dictadura militar se encontró signado por la completa deslegitimación de las garantías constitucionales, se encontraban estas anuladas, suspendidas. Las posibilidades de concebir a los ciudadanos como sujetos de derechos eran nulas, ya sea para los adultos como para los niños...

Este contexto de los casi treinta años desde el derrocamiento del presidente Perón hasta la restauración de la democracia, caracterizado por la alternancia de gobiernos de facto y democracias “débiles”, los derechos alcanzados tanto por los trabajadores así como también por aquellos sectores más desprotegidos, y de la ciudadanía en general, se encontraron en jaque.

“La niñez pobre se minorizaba en las villas y asentamientos. Los menores de entonces eran los hijos de esos pobres, eran los errores del sistema que no dejaban de constituirse en una amenaza. La legislación vigente continuaba operando como soporte del tratamiento de la ‘niñez minorizada’. La clave política fue la creación y expansión de los otros dos pilares del Patronato: la multiplicación de Tribunales de Menores a lo largo del territorio nacional, y de las agencias técnico-administrativas” (Daroqui-Guemureman, 1999: 29).

En este periodo se han dado algunos cambios en lo que respecta a los organismos destinados a la minoridad. En un primer momento fue creado el Consejo Nacional del Menor (1958) que posteriormente tras ser disuelto pasará a ser denominado Servicio Nacional de Minoridad (1969), luego Dirección General de la

Minoridad y la Familia (1970) y finalmente, en Subsecretaría del Menor y la Familia (1978); estos diversos organismos han dependido de diferentes Ministerios, Secretarías y Áreas del Estado.

Durante las décadas de 1960 y 1970 comienzan los intentos por ponerse en práctica otras formas alternativas de cuidado más allá de las instituciones de alojamiento. Surgen así los programas Amas Externas primero, y Pequeños Hogares y Familias Sustitutas, luego. Estos tenían por objetivo brindar un ámbito de cuidado alternativo lo más próximo a un ámbito familiar, sin encontrar resultados favorables.

Niñas, niños y adolescentes continuaban siendo alojados en las distintas instituciones que existían a lo largo y ancho del país. Se retomaban las ideas del peligro material y moral y, como sostiene Eroles (2002: 61), “hubo un intento claro (...) de ‘aggiornar’ la vieja caracterización de ‘peligro material o moral’, cargada de una connotación de ‘defensa social’ y reemplazarla por el concepto ‘situación irregular’”. Continúa el autor indicando que, “situación irregular supone, a contrario sensu, la existencia de una situación de regularidad, de normalidad. Es por lo tanto también una forma de estigmatizar a los menores.”

2.6. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, neoliberalismo y derechos de niñas, niños y adolescentes

El 10 de diciembre de 1983 asume en elecciones democráticas la presidencia del país Raúl Alfonsín. El electo presidente se encuentra con un país donde la pobreza y el desempleo eran el denominador común de gran parte de la población argentina. La restauración democrática generaba expectativas en cuanto a las mejoras en lo que concernía a la calidad de vida de los ciudadanos, pero la agravada situación económica y social del momento “dejó al gobierno democrático con escasos grados de libertad de ejecutar políticas tendientes a reparar el daño causado (...) El aumento de la deuda externa generada por la dictadura y la deuda social interna eran dramáticos indicadores de esta situación” (Golbert, 2010: 132-133).

Durante los años en los que Alfonsín se presidió el país, pueden observarse desde el inicio la instauración de ciertos cambios que tienen que ver fundamentalmente

con cuestiones sociales, culturales y el fortalecimiento de la democracia. A cinco días de haber asumido el nuevo presidente, a través del Decreto 187 se dará lugar a la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, teniendo como objetivo “intervenir activamente en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país, averiguando su destino o paradero como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización. Recibirá denuncias y pruebas sobre esos hechos para remitirlas a la justicia cuando de ellas surgiera la comisión de delitos.” (CONADEP, 2015: 447). Asimismo, el Juicio a las Juntas en el año 1985 se constituyó como un hito en la historia, no solo latinoamericana sino también a nivel mundial. Comienza así un proceso donde se pretende otorgar relevancia a todo aquello que hace a la democracia, la libertad de expresión, la participación activa de la sociedad, la recuperación de los espacios antes censurados, etc.

Algunos años después, en 1989, asume la presidencia Carlos Menem, el nuevo presidente emprenderá un rumbo diferente para el país. “Con el apoyo explícito de los empresarios más importantes –expresado en la incorporación a su gobierno de directivos de Bunge y Born, la mayor corporación privada, y del ingeniero Alsogaray, patriarca del liberalismo-, y también de Estados Unidos, con cuya política exterior se alineó decididamente, se dedicó a aplicar estrictamente el recetario liberal y a construir lo que sería el ‘partido del mercado’” (Romero, 1994: 368).

Las características neoliberales que marcaron este periodo se basaron, primordialmente, en otorgar al mercado el mayor protagonismo en lo que respecta a la asignación de recursos y satisfacción de necesidades. El Estado comienza un proceso de achicamiento en cuanto a sus funciones, relegando las mismas tanto al mercado como a la sociedad civil. Las políticas sociales del momento se caracterizaron por el recorte del gasto social, la desestatización y las consecuentes privatizaciones, la focalización y la descentralización. Fueron priorizados una vez más los intereses no del pueblo sino de los sectores empresarios y de capitales privados.

Como sostienen Andrenacci y Repetto (2006: 14) son tres los elementos a destacar al hablar de las reformas de política social, “la desestatización, la descentralización y la focalización. La desestatización implicó la transferencia parcial o total de responsabilidades del Estado a actores privados (empresas y organizaciones no gubernamentales y comunitarias); la descentralización produjo una reorganización de

los servicios públicos y sociales que favorece el crecimiento de la responsabilidad relativa de los Estados subnacionales; y la focalización, por último, implicó un cambio de objetivo de la política social, del ciudadano como receptor por derecho, al grupo o zona de riesgo como receptor estratégico.”

“La nueva política alcanzó también al mercado laboral: se avanzó en la flexibilización de los contratos de trabajo, al tiempo que se reglamentaba restrictivamente el derecho a huelga y se reducía la capacidad de negociación de las grandes organizaciones sindicales” (Romero, 1994: 369). La exclusión laboral y social y la creciente pobreza de gran porcentaje de la población argentina fueron las características principales de aquel momento.

En el año 1994 se crea la Secretaría de Desarrollo Social, la cual se encargará del diseño de programas destinados a atender a los grupos que presentaban mayores vulnerabilidades. Estos programas se encontraban “comandados” por las recomendaciones del Banco Mundial. Durante este periodo se crearon un importante número de programas los cuales se caracterizaban por su poca perdurabilidad en el tiempo, no generando en las poblaciones atendidas acceso a ningún derecho y no existiendo tampoco articulación entre los diferentes organismos estatales.

El presidente Menem continuó en el gobierno hasta el año 1999, cuando Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza, asume dicho lugar luego de las elecciones presidenciales. Durante este periodo la situación del país continuaba la misma línea que la iniciada por Menem, generando aun más situaciones de endeudamiento del país, culminando con la explosión de una crisis económica, política y social, obligando el “que se vayan todos” al renunciamento del presidente de la Rúa el día 20 de diciembre del 2001. El clima que se vivía en el país se encontraba marcado por la inestabilidad económica y política; la represión sangrienta hacia el pueblo por parte de las fuerzas policiales los días 19 y 20 de diciembre dejaron como saldo la muerte de aproximadamente medio centenar de personas, entre las cuales una gran cantidad de ellos eran adolescentes menores de 18 años de edad.

Durante el año 2001 se sucedieron tres presidentes hasta el momento en el que asume Eduardo Duhalde. En aquel entonces la pobreza alcanzaba a más del 50% de la población y la indigencia llegaba a un 25%. Durante los años que se continuaron, el clima del país se encontró marcado por la agudización de la conflictividad social,

política y económica. En el año 2003 el presidente Duhalde adelanta las elecciones a partir de las cuales asume el mandato presidencial Néstor Kirchner, en el mes de mayo de ese mismo año.

Ahora bien, desde el advenimiento de la democracia en el año 1983 y hasta el período previo de la presidencia de Néstor Kirchner, ¿qué podemos vislumbrar respecto a las consideraciones en materia de infancia?

Desde un primer momento cabe aclarar que no existió un cambio en la concepción del binomio niño/menor, este continuaba, los niños seguían siendo los mismos de antes, los menores también. La niñez empobrecida seguía siendo criminalizada, judicializada, estigmatizada, minorizada. Además de ello, durante este periodo los sectores pobres e indigentes aumentaban a diario.

A partir del retorno de la democracia y durante los diez años que se sucedieron, se promovieron ciertos cambios como la implementación de pequeños hogares, familias sustitutas, amas externas, las cuales no lograron concretar los objetivos propuestos de intentar evitar la institucionalización de los niños, por lo que se los continuaba alojando en los hogares e institutos de siempre.

Si bien en el año 1989 es aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y al año siguiente se la sanciona con fuerza de ley en nuestro país, y pese a que en la reforma constitucional del año 1994 es incorporada y toma rango constitucional junto a otros Tratados Internacionales de Derechos Humanos, lejos nos encontrábamos en aquel entonces de efectivizar parte de lo que en la misma se proclama.

A pesar de que ello debería ser entendido como un nuevo paso en sentido positivo en lo que respecta a niñez y adolescencia en nuestro país, ya que podría pensarse que daría inicio a la incorporación de nuevos conceptos y fundamentalmente prácticas en lo que a ellas refiere y sus derechos como así también las responsabilidades del aparato estatal, en Argentina se vivía un periodo en el cual el Estado se encontraba completamente ausente y alejado; distante de dar respuestas y cumplimiento efectivo a esos derechos, garantizando aunque a cuentagotas, la asistencia a los sectores menos favorecidos.

La aplicación de la Convención se tornaba imposible en el contexto de las políticas neoliberales de la década del '90. Se trataba de un escenario contradictorio, así como por un lado el país adhería a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, “los dispositivos estatales que apuntaban a la justicia social estaban en franco retroceso” (López, 2012: 16).

“Se producían avances en términos del reconocimiento de los derechos (...) y una ampliación del campo de saberes en torno a la niñez; pero, por otro lado, el conocimiento acumulado no desembocaba en el mejoramiento de las condiciones de vida de la infancia. Por el contrario, las políticas de ajuste estructural implementadas en aquel entonces se tradujeron en un fuerte crecimiento del desempleo y el aumento de la pobreza, dejando a miles de familias huérfanas de Estado, y con ello, más niñas y niños perdieron la igualdad para el ejercicio de sus derechos” (López, 2012: 16).

¿Qué derechos se pueden garantizar cuando lo único que pareciera asegurarse a los ciudadanos, especialmente a los sectores populares, es cada vez una mayor situación de pobreza y exclusión? Estando la vida de los argentinos en manos exclusivas de la economía de mercado neoliberal capitalista, y por tanto el Estado subordinado a sostener dicho escenario, los derechos, las garantías y las responsabilidades del aparato estatal para con niñas, niños y adolescentes se encontraban visiblemente en un segundo plano.

2.7. Niñas, niños y adolescentes como Sujetos de Protección

La década del '90 estuvo fuertemente atravesada por la vulneración de derechos, teniendo como base para ello la adhesión del país al modelo neoliberal. El achicamiento de los deberes del Estado y el resultado de esto observado en las situaciones de miles de familias que día a día amanecían más empobrecidas repercutió en la vida de un enorme porcentaje de niñas, niños y adolescentes que cotidianamente encontraban vulnerados sus derechos.

En el año 2003 asume la presidencia Néstor Kirchner, iniciando su gobierno bajo el lema de la defensa activa de los derechos humanos, económicos, políticos, sociales y culturales de los ciudadanos. La pobreza en Argentina alcanzaba a casi la mitad de la

población, la indigencia, por su parte, presentaba cifras que llegaban al 20% de los ciudadanos. Según datos obtenidos del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en aquel año el 44% de niñas, niños y adolescentes se encontraban en situación de indigencia. Un dato a tener en cuenta al pensar nuestro país post CIDN.

Las políticas a partir de aquel año indicaron como punto central el cambio respecto a las que habían sido llevadas adelante por el modelo anterior. Se establecieron dos ejes en materia de políticas desde los cuales se postuló trabajar para revertir el modelo neoliberal, estos eran por un lado el trabajo, entendido este como el principal organizador e integrador social y por otro, la familia, concibiendo la multiplicidad de modos de constituirse de las familias y otorgando a estas la satisfacción de los derechos vulnerados durante años.

Las políticas sociales pensadas para tal fin pusieron énfasis en la generación de empleos, sosteniendo la integralidad y la construcción comunitaria de este como un aspecto trascendental para que los ciudadanos puedan contar con un ingreso como fruto de su inserción laboral.

Por otro lado, en lo que refiere al eje que tiene como fundamento a las familias, se hizo hincapié en la recuperación de derechos por parte de estas; en este sentido, la extensión de la cobertura de asignaciones familiares como la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social y posteriormente la correspondiente asignación por embarazo, es un ejemplo de ello.

La Asignación Universal por Hijo (AUH), implementada a través del decreto 1602/2009, permitió el acceso a una prestación no contributiva similar las asignaciones familiares que tradicionalmente fueron otorgadas a aquellas familias cuyos adultos se encontraban insertos en el mercado formal de trabajo; permitiendo ahora a niñas, niños y adolescentes hasta los 18 años edad, hijos de desocupados o trabajadores del sector informal, contar con dicha prestación. La misma se trata de una prestación no contributiva con corresponsabilidad de parte de quien lo percibe. De este modo, niñas, niños y adolescentes deben cumplir con dos requisitos puntuales: asistir a un establecimiento educativo y presentar controles de salud al día. La implementación de la AUH permitió un incremento de la matrícula escolar en diferentes niveles, así como también la reducción de la indigencia de miles de personas menores de 18 años.

No obstante ello, creemos oportuno poder plasmar datos obtenidos del boletín publicado por la ANSES, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2014, el cual indica que hacia el mes de abril del año mencionado, un total de 3.348.032 niñas, niños y/o adolescentes percibían los aportes de la AUH. Nos resulta interesante este dato a la hora de pensar que alrededor del 10% de las niñas, niños o adolescentes de nuestro país integran familias en las cuales existen situaciones de desocupación, adultos que se desempeñan en el mercado de trabajo informal, en tareas del servicio doméstico, contratados “en negro”, etc., donde las remuneraciones percibidas se encuentran por debajo del salario mínimo, vital y móvil.

Ahora bien, nos interesa destacar fundamentalmente de este periodo es que fue en el año 2005, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, que se sanciona la Ley Nacional n° 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La misma se constituye como la puesta en escena a nivel nacional de los fundamentos de la Convención, la que una década atrás había sido incorporada, junto a otros Tratados Internacionales de Derechos, a la Constitución Nacional. Se inaugura aquí el cambio de paradigma respecto a la niñez, buscando generar la erradicación de aquel posicionamiento que postulaba a niñas, niños y adolescentes como menores plausibles de ser tutelados por el Estado cuando éste lo considere oportuno, a concebirlos como Sujetos de Derechos de los cuales las familias y el Estado se constituyen como responsables. Posteriormente daremos cuenta de que si bien hablamos de un nuevo paradigma en materia de niñez, no infiere esto un cambio abrupto sino que se trata de un proceso gradual, donde coexiste lo actual con rasgos del modelo anterior, y donde hablar de Sujetos de Derechos no implica que de manera directa las prácticas lo demuestren.

La actual ley suprimió (en principio el plano de lo discursivo) la vieja institucionalidad, estableciendo la creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, órgano que se ubica en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Posteriormente fue establecido el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el cual instala el encuentro entre los gobiernos de las veintitrés provincias de nuestro territorio nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo posee funciones deliberativas, consultivas, la especificidad de formulación de propuestas y de

políticas. De esta manera, las diferentes provincias cuentan con la posibilidad de participar de forma activa en la discusión y formulación de políticas que conciernen a la infancia, adolescencia y la familia a nivel federal, así como también la utilización de dicho espacio para la construcción, intercambio y cooperación entre profesionales de las diferentes jurisdicciones que sirvan para establecer lineamientos nacionales para la concreción de políticas de inclusión.

Si bien ahondaremos este tema en el capítulo siguiente cabe aclarar en esta instancia que en la provincia de Santa Fe en el año 2009 es aprobada la ley n° 12.967, de Promoción y Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, adhiriéndose ésta a la Ley Nacional n° 26.061. A través de ésta, la provincia de Santa Fe da cuenta de una adecuación a la normativa nacional como así también a la CIDN y a los tratados de Derechos Humanos.

Tomando los textos de ambas legislaciones es posible vislumbrar nuevas percepciones respecto a niñas, niños y adolescentes. A diferencia de la Ley de Patronato, las actuales entienden a niñas, niños y adolescentes como Sujetos de Derechos, a quienes se los considera partícipes plenos y no objetos de decisiones ajenas. Se hace hincapié asimismo en el lugar que le compete a la familia y a la comunidad como el espacio propicio para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes; el respeto a sus opiniones; el derecho a ser oídos; la conservación de su centro de vida y, fundamentalmente lo que expresa la actual legislación es la indicación de que la separación de una niña, un niño o adolescente de su medio familiar o centro de vida solo deberá ser efectuada de manera **excepcional**, de carácter transitorio durante determinado plazo de tiempo, cuando los derechos y el interés superior de la niña, niño o adolescente se vean amenazados y/o vulnerados. Como veremos luego, estas medidas se aplicarán con el objeto resguardar a los sujetos así como restituir los derechos que han sido vulnerados, permitiéndole a la niña, niño o adolescente el pleno ejercicio y goce de ellos; las medidas de separación solo proceden cuando se hayan agotado las instancias de intervención o cuando se trate de vulneraciones donde se crea inadecuado que la niña, niño o adolescente continúe junto a su grupo familiar.

De esta manera es posible revelar un punto fundamental que da cuenta de las diferencias con el paradigma anterior. La protección, como veremos en el próximo capítulo, no se postula mediante acciones como la separación de niñas, niños y

adolescentes de sus familias de origen para luego ser alojados en instituciones asistenciales o “reformatorios” sino que se la concibe y enuncia como una política de Estado, la cual debe tener como eje el trabajo constante y cotidiano con las familias y la comunidad para su fortalecimiento en lo que respecta a acciones de cuidado y protección. De esta manera se promueve que la protección de niñas, niños y adolescentes sea brindada por la propia familia, evitando así la separación e institucionalización, entendiendo que la separación y el alojamiento en espacios alternativos al grupo familiar deben darse solo excepcionalmente una vez que todas las instancias previas hayan sido agotadas.

2.8. A pesar de la Protección Integral...

Sí, a pesar de la Protección Integral son muchos los ejemplos que pueden mencionarse que hacen dudar acerca de la garantía de derechos de los que se supone, niñas, niños y adolescentes son titulares. Luciano Arruga, joven que a sus 16 años de edad, en enero de 2009, fue desaparecido, hallándose su cuerpo enterrado como NN más de cinco años después de su muerte. Niñas, niños y adolescentes como Néstor y Oscar, quienes han sido noticia en los medios nacionales durante algunos días en el año 2015 al morir ambos por desnutrición y tuberculosis; otros que día a día ven arrasadas sus vidas a causa de la compañía constante de sustancias que hacen que tal vez vivir no sea tan duro; y tantos más que padecen cotidianamente las consecuencias de la ausencia de políticas que efectivamente combatan aquellas situaciones que atraviesa gran parte de la población infantil y los jóvenes de nuestro país. Niñas, niños y adolescentes que encuentran sus proyectos de vida anulados, alejados, y así también sus derechos.

Si bien hemos mencionado un cambio en la direccionalidad de las políticas implementadas durante los últimos años, la situación de niñas, niños y adolescentes como así también sus grupos familiares continúan dando cuenta de que nos encontramos alejados aun del ejercicio efectivo de los derechos por parte de quienes se constituyen como sujetos de las actuales legislaciones en materia de protección.

De acuerdo al Informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, el cual releva el período comprendido entre los años 2010-2015, se puede inferir modificaciones en lo que a los niveles de

indigencia y pobreza conciernen, son notorias las cifras ascendentes si se las compara con los datos presentados anteriormente cuando nos referíamos a la situación de la población argentina durante el año 2003. Sin embargo son aun alarmantes las cifras que se presentan, aquello expresado en porcentajes representa a millones de ciudadanos – niñas, niños, jóvenes, adultos– que sufren condiciones tales como inseguridad alimentaria, ausencia de servicios básicos como agua potable y servicios sanitarios, vivienda precaria, entre otros.

En el mes de diciembre del año 2015 asume la presidencia del país Mauricio Macri, quien se presenta como el candidato del “cambio”. Diversas medidas fueron tomadas desde su asunción al gobierno nacional. Un dato a destacar, siguiendo la información brindada por la UCA, es que el índice de pobreza, ascendió de un 29% en diciembre de 2015 a más del 34% durante los primeros tres meses del año 2016, a pesar del lema del actual gobierno que reza “pobreza cero”. Miles de trabajadores, tanto del sector público como privado, debieron enfrentarse a los despidos masivos durante los primeros meses de mandato; tarifazos y caída del salario real, desmantelamiento de diversos programas (vinculados a educación, salud, trabajo, cultura) entre otras acciones llevadas a cabo, son las que signaron los primeros meses de gobierno de Macri.

En oposición a este contexto fueron reiteradas las movilizaciones de trabajadores, estudiantes y la ciudadanía en general expresando la oposición a las medidas aplicadas desde el gobierno, las cuales comprometen cada vez más a los sectores más vulnerables. El reclamo por las declaraciones de emergencia nacional por la violencia de género, la emergencia social, como así también el lanzamiento de la campaña “Ni un Pibe Menos por la Droga”, se han convertido en pedidos constantes durante el presente año, los cuales no han demostrado signos de haber sido considerados de importancia por el gobierno actual. Sí contamos con la declaración de Emergencia Nacional en Seguridad, la cual fue decretada a poco de la asunción presidencial y a través del cual, entre otros aspectos, se legaliza la militarización de barrios a lo largo y ancho del país, centrando la “atención” en aquellos sectores tradicionalmente criminalizados.

En este contexto, entendemos imperioso que la lucha y defensa por los derechos y garantías fundamentales continúe para hacer frente a aquellas medidas que no se corresponden con los intereses, necesidades y derechos del pueblo, teniendo en cuenta

que todo aquello que afecta a la comunidad en general repercute, en mayor medida, en niñas, niños y adolescentes, quienes se constituyen –lamentablemente– en el sector poblacional más vulnerable.

Capítulo 3: Hacia la Protección Integral

Cotidiano es que hagamos referencia a la protección integral, la desinstitucionalización o a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos; conceptos completamente opuestos a aquellos que hemos presentado en el capítulo anterior cuando mencionamos el período que abarcó casi un siglo, el del Patronato de Menores.

Estas nuevas formas de entender la niñez y llevar a cabo prácticas que den cuenta de ello y estén alineadas a estos nuevos cánones, como hemos intentado demostrar en el primer capítulo, no son cambios súbitos. Ha quedado demostrado cuánto ha tardado que niñas y niños dejen de ser percibidos como adultos pequeños y que se los comience a considerar como sujetos de derechos que requieren una protección especial; por lo tanto, no resulta raro deducir que también llevará su tiempo plasmar en prácticas estas nuevas concepciones de protección integral, de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, entre otras. Ahora bien, intentaremos en los próximos párrafos dar cuenta de aquel camino que se hemos comenzado a transitar en pos de hacer efectivo este nuevo paradigma de la Protección Integral.

Hemos hecho mención en el presente trabajo a la existencia de un “anterior paradigma” así como también a la presencia de uno actual, ¿qué significa ello? Tomando la definición de Kuhn (2004: 13) podemos mencionar que se trata de “un conjunto de realizaciones de la ciencia, universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”; si bien en este sentido se plantea que tras la instauración de un nuevo paradigma el anterior queda completamente anulado, en las ciencias sociales esto no se evidencia de la misma forma, de manera contraria, es posible la coexistencia de múltiples paradigmas, de múltiples modelos en simultaneidad. Por ello hoy en día podemos evidenciar ciertas prácticas que pueden parecernos que ninguna relación tienen con la protección integral a pesar de que este es el “modelo” que actualmente nos guía para con la niñez y adolescencia.

Esta coexistencia o prevalencia de dos paradigmas es propio de las ciencias sociales, se trata de cambios profundos que no pueden darse de un momento al otro.

Estos nuevos modos se van “gestando” a la par que continua vigente el anterior y lleva tiempo derrumbar un viejo modelo por completo para que podamos decir que nos encontramos de manera exclusiva “bajo” determinado paradigma, en este caso el de la protección integral. Esto se debe a que se trata de procesos sociales, históricos, de los cuales somos parte cada uno de quienes nos constituimos como sujetos sociales, el entramado institucional y legal y los actores vinculados a este campo, y es esto lo que lleva a que los cambios se instauren como parte de un proceso gradual.

3.1. Ley Nacional n° 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Uno de las modificaciones más relevantes es la que se instaura a partir del marco legal generado mediante la sanción de la Ley Nacional 26.061, en el año 2005. Si bien hacia aquel año ya contábamos en nuestro país con la incorporación de Tratados Internacionales a nuestra Constitución Nacional desde la década anterior, entre los cuales se encontraba la CIDN, debieron pasar todos aquellos años para que las niñas, niños y adolescentes argentinos cuenten con una legislación que ponga de manifiesto la nueva perspectiva y quite legitimidad a la Ley Agote por completo.

La Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en sus casi ochenta artículos plantea la forma en la que, en todo el territorio de la República Argentina, se deberá bregar por el cumplimiento, garantía, goce y ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes se constituyen como sujetos de dicha ley. Esta da cuenta de diferentes aspectos que demuestran la brecha existente entre la anterior Ley de Patronato y el nuevo paradigma de la protección integral. No solo se plasman en la misma cada uno de los derechos que deben ser garantizados a niñas, niños y adolescentes, de los cuales deben gozar y ser titulares plenos, sino que también se pone de manifiesto la responsabilidad del Estado – en sus diferentes niveles y organismos– en lo que refiere a su competencia en garantizar y dar cumplimiento a los derechos mencionados.

La Ley establece órganos administrativos de protección de derechos, en tres niveles diferentes, un nivel nacional, uno federal y finalmente un nivel provincial. Respecto al primero de ellos, se concreta con la creación de la Secretaría Nacional de

Niñez, Adolescencia y Familia, el cual se constituye como el organismo especializado en materia de derechos de infancia y el cual depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A nivel federal se establece el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia que, como mencionamos en el capítulo anterior, se trata de un órgano de articulación y concertación para el diseño, planificación y efectivización de políticas públicas en todo el territorio del país donde participan las diferentes provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, a nivel provincial se promueve la creación de los órganos administrativos competentes para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Es en este sentido que se propone e inicia la reorganización a nivel nacional respecto a la forma en que los diferentes niveles del Estado y los correspondientes organismos deberán ser creados, estableciendo las nuevas incumbencias en lo que concierne a la obligación y responsabilidad de velar por el cumplimiento y ejercicio cotidiano de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Se plantea la responsabilidad del aparato estatal en su conjunto respecto a todas aquellas medidas destinadas a promover, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuáles son las acciones correspondientes para su efectivización así como también el modo en que deben ser aplicadas las medidas tendientes a la reparación de derechos vulnerados.

A partir de la sanción de la Ley Nacional n° 26.061, diferentes provincias del territorio argentino han ido sancionando sus propias normativas adhiriéndose a ésta. Si bien algunas provincias ya contaban con legislaciones anteriores en consonancia con la CIDN, postulando el paradigma de la Protección Integral, el gran cambio se genera con la sanción de leyes en el resto de las provincias en directa relación con la Ley Nacional. De esta manera, la provincia de Santa Fe sancionó en el año 2009 la Ley n° 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

3.2. Ley Provincial n° 12.967, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

La provincia de Santa Fe, a través de la legislación sancionada y homologando la Ley Nacional, da inicio a la conformación del **Sistema Provincial de Promoción y**

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el cual organiza diferentes niveles de aplicación de la ley dentro de la provincia y las respectivas responsabilidades a los fines de dar cumplimiento a la misma.

A través de sus artículos se plasma, en correlación con la legislación Nacional así como también a la CIDN, quiénes son los sujetos comprendidos en la misma, cuáles son los derechos reconocidos y el modo en que los diferentes organismos del Estado deben bregar para garantizar de manera constante todos y cada uno de aquellos derechos de niñas, niños y adolescentes, conjuntamente con las responsabilidades otorgadas a las familias, la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil, etc.

La Ley Provincial n° 12.967 se encuentra constituida por 74 artículos, los cuales son organizados en seis títulos, estos son: Disposiciones Generales (artículos 1 al 6), Principios, Derechos y Garantías (artículos 7 al 28), Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (artículos 29 al 49), Medidas de Protección Integral y Excepcionales –procedimientos (artículos 50 al 66), Presupuesto y Financiamiento (artículo 67) y Disposiciones Complementarias (artículos 68 al 74).²

De esta manera, podemos mencionar que son **Sujetos de Derechos** de dicha ley todas las personas –niñas, niños y adolescentes– del territorio provincial hasta los 18 años de edad, y que tales derechos y garantías son de orden público, irrenunciables e interdependientes.³

En el título II del texto legislativo son enunciados cada unos de los derechos y garantías reconocidos a niñas, niños y adolescentes, los cuales se entienden que son reconocidos y aplicados por igual a todos y todas quienes se constituyen como sujetos de dicha ley, sin discriminación alguna. Estos son: derecho a la vida; derecho a la integridad personal; a la identidad; a la convivencia familiar y comunitaria; derecho a la salud; a la educación; a la libertad; derecho al descanso, recreación, deporte y juego; derecho a la propia imagen; a la asociación, reunión y tránsito; a opinar y ser oído; derecho al trabajo de los adolescentes; a la protección contra la explotación económica; derecho a la seguridad social⁴.

² Ver Anexo I, texto de Ley n° 12.967.

³ Ley 12.967, art. 2.

⁴ Artículos 9 a 24 de la Ley Provincial n° 12.967.

Posterior a la enunciación de los derechos mencionados, en los siguientes artículos de la Ley n° 12.967, se indican garantías tales como las de procedimientos judiciales o administrativos, los procedimientos de identificación e inscripción en el registro del Estado. Asimismo se pronuncia que todos los miembros de establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tomara conocimiento de amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños o adolescentes, se encontrará en el deber de comunicar tal situación al órgano administrativo o judicial de protección de derechos. Por consiguiente, se pone de manifiesto que es obligación del agente público la recepción de denuncias sobre amenazas o vulneración de derechos y por lo tanto actuar en consecuencia.

Continuando con la lectura del texto de la Ley Provincial, es posible vislumbrar la reiterada referencia al **interés superior** del niño, niña y/o adolescente, y que es éste el que deberá regir y guiar el accionar de las autoridades de aplicación de la ley, a miembros de organismos gubernamentales, no gubernamentales, de carácter público o privado, a la hora de llevar a cabo acciones en pos de garantizar el pleno goce de derechos de niñas, niños y adolescentes.

En este sentido es trascendental dar cuenta de a qué se hace referencia cuando se habla de interés superior; por lo tanto, creemos necesario plasmar el artículo cuarto de la Ley n° 12.967, el cual indica que,

“interés superior. Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidas y los que en el futuro pudieren reconocérsele.

La determinación del interés superior debe respetar:

- a) Su condición de sujeto de derecho.
- b) Su derecho a ser oído cualquiera sea la forma en que se manifieste y a que su opinión sea tenida en cuenta.
- c) El respeto al pleno desarrollo de sus derechos en su medio familiar, social y cultural.
- d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.

- e) El equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y las exigencias del bien común.
- f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar asimilable a su residencia habitual donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecen los primeros.”

Teniendo en cuenta el recorrido realizado hasta el momento por los diferentes artículos de la Ley, entendemos que todas las acciones llevadas a cabo para con niñas, niños y adolescentes deben tener en cuenta el interés superior de cada uno de ellos y que dichas acciones e intervenciones deben darse en pos de garantizar los derechos dentro del ámbito familiar y comunitario del que niñas, niños y adolescentes formen parte. Para ello se plantea además que deberán ser implementadas políticas públicas integrales a las cuales les corresponderá tener como “principal objetivo el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en su medio familiar, social y cultural.”⁵

Pueden ser señalados en este momento determinados indicios que dan cuenta del cambio postulado en los modos de pensar y actuar para con niñas, niños y adolescentes. Uno de los puntos centrales de la actual legislación está dado por la preponderancia de la familia y la comunidad como espacios indicados para el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes, considerándolos ámbitos propicios para el cuidado, protección y el ejercicio constante de sus derechos. Por otro lado se plantea que es el Estado, a través de sus diferentes organismos, quien detenta la **responsabilidad** de fortalecer, promover y garantizar que los derechos reconocidos se cumplan, así como también “la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas especialmente en relación a la asignación de recursos hasta el máximo de los que se disponga (...)”⁶, a los fines de generar condiciones de igualdad para el cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

⁵ Ley 12.967, art. 5.

⁶ Ley 12.967, art. 6.

El énfasis ya no está dado por el tutelaje hacia los “menores” por parte del aparato estatal sino que, por el contrario, es enunciado un “deber ser” donde es el mismo Estado desde sus diferentes organismos quien debe poner a disposición todos aquellos recursos, programas, servicios y demás medios, que sirvan para garantizar que niñas, niños y adolescentes gocen y ejerzan cada uno de sus derechos reconocidos libremente junto a su grupo familiar y su comunidad. Se hace evidente de esta manera cómo la Ley Provincial se hace eco del cuarto artículo de la CIDN, a través del cual se expresa que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los Derechos reconocidos y en la presente Convención. En lo que respecta a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.

3.2.1. El Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Se hace necesario en este momento poder dar cuenta acerca de la conformación del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que hemos mencionado al iniciar el recorrido de la legislación provincial vigente. ¿Cómo está constituido éste? ¿Cuáles son las competencias de cada uno de los organismos que lo conforman?

Mediante el artículo 29 de la Ley Provincial se encuentran establecidos los puntos primordiales para comprender aquellos interrogantes. En dicho artículo se indica que el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se encuentra organizado en tres niveles, a saber: **local**, **regional** y **provincial**, entendiendo que el nivel local se corresponde con un primer nivel de intervención, y los niveles regional y provincial, con un segundo nivel.

- Nivel Local o Primer nivel de intervención

Este primer nivel está conformado por distintos organismos e instituciones que comúnmente solemos referir que se encuentran “en territorio”, es decir, los que cotidianamente llevan a cabo intervenciones en conjunto con la aplicación de políticas públicas, programas y/o actividades con niñas, niños y adolescentes así como también con su grupo familiar y el conjunto de la comunidad para la promoción de derechos. A modo de ejemplo podemos mencionar los hospitales, centros de salud, SAMCos; Centros de Acción Familiar; escuelas, Equipos Socioeducativos; centros de día y guarderías (con y sin convenio con la Subsecretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia); Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos; vecinales, ONGs, Organizaciones de la Sociedad Civil; Centro de Orientación a la Víctima de Violencia.

Como parte integrante de este primer nivel de intervención se encuentran los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos. Estos se constituyen como unidades técnico operativas que se encargan de “facilitar que las niñas, niños y adolescentes que tengan amenazados o violados sus derechos, puedan acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad”⁷. Los Servicios Locales se encuentran conformados por equipos interdisciplinarios y es a este equipo al que le corresponde el trabajo cotidiano con niñas, niños y adolescentes, sus familias y la comunidad, en pos de desarrollar acciones de promoción y protección de derechos en el ámbito local. Los Servicios Locales poseen como funciones: “promover acciones tendientes al fortalecimiento familiar; diseñar e implementar programas, dispositivos o servicios que viabilicen el acceso efectivo al ejercicio de los derechos; planificar, implementar y supervisar las alternativas tendientes a evitar la separación de la niña, niño o adolescente del medio familiar o centro de vida en el que se encuentre”⁸, entre otras.

Le compete a los Servicios Locales la ejecución de Medidas de Protección Integral, es decir aquellas que no implican la separación de niñas, niños o adolescentes de su grupo familiar conviviente.

○ Niveles Regional y Provincial o Segundo Nivel de intervención

⁷ Ley 12.967, art. 30.

⁸ Ley 12.967, art.30, Dec. Regl. 619/10.

El segundo nivel del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se encuentra, en conformidad con la Ley, constituido por los siguientes organismos: la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, las Direcciones Provinciales de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia y las Delegaciones Regionales.

De acuerdo al decreto reglamentario del artículo n° 31 de la legislación, estos tres organismos pertenecientes al segundo nivel de intervención poseen como funciones las de “garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes o la restitución de los mismos ante la vulneración; garantizar el acceso a programas, dispositivos o servicios que posibiliten el ejercicio efectivo de los derechos; garantizar cuando sea necesaria la contención en ámbitos de cuidados familiares alternativos; garantizar cuando sea necesario la contención en ámbitos de cuidados bajo las modalidades familiares o institucionales públicos o privados, en última instancia y por el menor tiempo posible; brindar asistencia técnico-jurídica a los Servicios Locales (...); evaluar y en su caso adoptar y supervisar las medidas de protección excepcional propuestas por la Autoridad Administrativa del Ámbito Local”

Daremos cuenta a continuación de cada uno de estos tres organismos que conforman el segundo nivel de intervención:

- Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, se constituye como la autoridad de aplicación del Sistema Provincial de Promoción y Protección, posee entre sus funciones las de “coordinar el sistema provincial en los ámbitos local, regional y provincial; diseñar políticas públicas integrales destinadas a las niñas, niños y adolescentes y sus grupos familiares; (...) promover la creación de los Servicios Locales (...); brindar a las niñas, niños, adolescentes y sus grupos familiares, servicios especializados en la atención de situaciones de calle, maltrato, abuso, explotación, prostitución, consumo de sustancias, situación de riesgo penal y cualquier otra que implique vulneración de sus derechos; (...) interactuar con todos los poderes del Estado a fin de lograr la implementación transversal de las políticas de promoción y protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes (...)”⁹

⁹ Ley 12.967, art. 33.

- Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, se trata de un Organismo descentralizado de la Subsecretaría y cuenta con dos sedes en el territorio provincial: en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Ejerce su función de “coordinación directa de las delegaciones regionales de la zona y la asistencia técnica jurídica.”¹⁰

- Delegaciones Regionales, son las autoridades administrativas de protección de derechos del ámbito regional. Deben brindar a los Servicios Locales asesoramiento técnico y jurídico para la intervención y el diseño de programas. Son los equipos interdisciplinarios de las Delegaciones a quienes les compete la adopción y aplicación de Medidas de Protección Excepcionales. De acuerdo a lo que plantea la Ley Provincial en su artículo nº 31, “para garantizar los objetivos enunciados en esta ley en cada Delegación Regional la Subsecretaría debe garantizar programas e instituciones con la modalidad de puertas abiertas como centros de día, centros de atención inmediata, paradores nocturnos, albergues temporarios u otros con especificidad para el abordaje de situaciones de calle, de abandono real o simbólico, consumo de sustancias, maltrato, violencia familiar, abuso sexual, crisis subjetivas graves y situaciones de riesgo penal, entre otras”. En la actualidad en la Provincia de Santa Fe existen seis Delegaciones Regionales, ubicadas en las ciudades de Reconquista, Vera, Rafaela, San Lorenzo, Villa Constitución y Venado Tuerto, las tres primeras dependientes de la Dirección de Santa Fe, y las restantes corresponden a la Dirección de Rosario.

Para finalizar con la conformación del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, haremos mención a la existencia de otros organismos y cuerpos consultivos que integran dicho Sistema; estos son la Comisión Interministerial de la Niñez y Adolescencia, el Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, y la creación de la figura del Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes.

- Comisión Interministerial de la Niñez y Adolescencia, se ubica bajo el ámbito de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, y se establece a través de la presencia de representantes de los diferentes Ministerios del Estado

¹⁰ Ley 12.967, art. 35.

Provincial.¹¹ Esta Comisión, a través del trabajo y las acciones articuladas entre los diferentes Ministerios, velará por la efectivización de la aplicación de las políticas de promoción y protección integral, definiendo competencias y responsabilidades de cada Ministerio, la disposición y transferencia de recursos, entre otras.

-Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, se trata de un cuerpo de carácter consultivo y de asesoramiento en materia de promoción y protección de derechos. Los miembros son representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de Universidades, de municipios y comunas, de colegios profesionales y de organizaciones no gubernamentales involucradas en la temática de niñez. Los espacios llevados a cabo tienen como fin proponer o generar reformas legislativas, participar en campañas públicas, solicitar información acerca de la distribución de recursos, entre otras. “Es responsabilidad del Consejo fortalecer el reconocimiento en la sociedad del niño y el adolescente, como sujetos activos de derecho.”¹²

- Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes (ubicada en el ámbito de la Defensoría del Pueblo), el cual “tiene a su cargo, velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, las leyes nacionales y provinciales y el resto del ordenamiento jurídico.”¹³ El Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes debe defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas, supervisando además la aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de nuestra provincia.

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes presenta una serie de funciones tales como “supervisar las entidades públicas y privadas del Sistema de Infancias, para decidir sobre aquellas políticas públicas que están ausentes o necesitan mejoras; proporcionar asesoramiento a las niñas, niños y adolescentes y a sus grupos familiares. Recibir reclamos o denuncias formuladas por las niñas, niños y adolescentes, o adultos a cargo, y llevar un registro estadístico de los mismos; promover y proteger los derechos

¹¹ Representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno y Reforma del Estado, Salud, Educación, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, Ministerio de Innovación y Cultura, de Producción y de Economía.

¹² Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, información disponible en [http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/125584/\(subtema\)/93750](http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/125584/(subtema)/93750)

¹³ Ley 12.967, art. 38.

mediante acciones y recomendaciones ante las instancias públicas competentes. Denunciar las irregularidades detectadas (...) difundir los principios emanados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Proponer las reformas legales necesarias para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a la niñez y la adolescencia. Conformar y fortalecer una red articulada en el ámbito local para facilitar la confluencia de recursos destinados a la problemática de amenaza o violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” (Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, 2013: 34).

Cabe aclarar en esta instancia que la Provincia de Santa Fe forma parte del minúsculo porcentaje de provincias del país que cuentan con la figura del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes. Si bien la Ley Nacional, a través de su tercer capítulo (artículos 47 a 64), indica la creación de la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sus funciones y deberes –entre otros aspectos relativos al mismo– ha transcurrido ya una década desde la sanción de dicha legislación no contándose aun con el nombramiento de éste.

- Organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas o servicios de información, difusión, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estas, al igual que cualquier otro órgano e institución, deben cumplir con los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente, con la CIDN, los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país sea parte, y cumplir con funciones vinculadas al respeto y garantía de cada uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Es posible concebir esta conformación e instauración del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes como la puesta en escena de las bases en lo que respecta a las nuevas perspectivas concernientes a la niñez y adolescencia. La idea de un Sistema que articule en diferentes niveles desde lo más cercano al territorio, donde se suceden los hechos y donde se encuentran los sujetos a los que debe protegerse, hacia un nivel más diagramador de las políticas en materia de niñez y adolescencia da cuenta de la presencia de nuevas concepciones que pretenden otorgar otras direcciones a la acción del Estado, diferentes a las anteriores.

3.2.2. Medidas de Protección Integrales y Excepcionales

Continuando con el análisis que hemos emprendido y retomando los dos niveles que hemos diferenciado recientemente, corresponde en esta instancia dar cuenta de las Medidas de Protección Integrales y Excepcionales que son aplicadas por cada uno de estos niveles en pos de garantizar y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como también son ejecutadas a los fines de reparar derechos vulnerados.

Las **Medidas de Protección Integral** son aquellas empleadas por los Servicios Locales y/o las autoridades administrativas como las Delegaciones Regionales y corresponden en situaciones que se presentan como amenazas o violación de derechos o garantías y tienen como objetivo primordial la preservación o restitución a los niñas, niños y adolescentes del goce y ejercicio de aquellos derechos que se han visto amenazados o vulnerados. “La amenaza o violación (...) puede provenir de la acción u omisión del Estado, la Sociedad, los particulares, los padres, el grupo familiar, representantes legales o responsables, o de la propia conducta de la niña, niño o adolescente.”¹⁴

Las Medidas de Protección Integral de ningún modo pueden significar la separación de niñas, niños o adolescentes de su grupo familiar de origen, familia ampliada o con quien mantenga lazos afectivos. Al contrario, estas suponen la “aplicación de diferentes programas, dispositivos y servicios del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos que no implican la separación de la niña, niño o adolescente de su medio familiar conviviente o del centro de vida en el que se encuentra.”¹⁵

Por su parte, las **Medidas de Protección Excepcionales**, son aquellas “subsidiarias y temporales que importan la privación de la niña, niño o adolescente del medio familiar o de su centro de vida en el que se encuentra cuando el interés superior de éstos así lo requiera”¹⁶. Esta separación efectuada posee como objetivo que niñas,

¹⁴ Ley 12.967, art. 50.

¹⁵ Ley 12.967, art.50, Dec. Regl. 619/10.

¹⁶ Ley 12.967, art. 51.

niños o adolescentes recuperen y conserven el pleno ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y sean reparadas sus consecuencias. Estas medidas solo se ejecutan cuando las medidas de protección integral resulten insuficientes o inadecuadas para la situación de niños, niñas o adolescentes.

Como su nombre lo expresa, son excepcionales; se aplican cuando las instancias de trabajo anteriores han sido agotadas o bien en situaciones donde no sea apropiada la aplicación de Medidas Integrales debido a la gravedad de la situación y la amenaza que significare para la niña, niño o adolescente continuar conviviendo con quienes vulneran y violan sus derechos. Estas Medidas deben ser acotadas en el tiempo; de acuerdo a la ley Provincial, las medidas no pueden exceder los noventa días (existiendo la posibilidad de prorrogar el plazo –con el debido control de legalidad– mientras persistan las causas que le dieron origen a la misma). Si bien la ley prevé un plazo máximo de dieciocho meses, a partir de la reforma e implementación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el plazo máximo se redujo a un total de seis meses¹⁷.

De esta manera, en el lapso de seis meses el órgano administrativo de aplicación de las Medidas de Protección Excepcional debe resolver la situación. De acuerdo a las condiciones particulares de las situaciones que los equipos interdisciplinarios abordan, las medidas de separación pueden ser cesadas –donde el niño, niña o adolescente regresara con su grupo de origen del cual fue separado, entendiendo que las condiciones que habían dado lugar a la medida fueron revertidas–, o se procederá a la sugerencia de la resolución definitiva –solicitar y/o sugerir la guarda o tutela del niño, niña o adolescente por parte de algún miembro de su familia ampliada o, en caso contrario, sugerir la declaración de la situación de adoptabilidad del niño, niña o adolescente–.

Durante el transcurso de la aplicación de la Medida de Protección Excepcional, son los profesionales pertenecientes al órgano administrativo de aplicación quienes, en conjunto y de manera articulada con los equipos de primer nivel deben trabajar en pos de la reparación de los derechos vulnerados en las niñas, niños o adolescentes que dieron origen a la medida de separación así como también las acciones para con los

¹⁷Anteriormente, al contar con el plazo máximo de dieciocho meses, la Medida de Protección Excepcional implicaba luego de la aplicación, la posibilidad de efectuar cuatro prórrogas -teniendo en cuenta el plazo de 90 días de cada una- hasta la definición o cese de la misma. En la actualidad, al reducirse el plazo máximo a seis meses, luego de la aplicación de la Medida de Protección Excepcional se puede realizar solo una prórroga, debiendo definirse la situación o cesar la medida de separación al cumplirse el sexto mes.

adultos responsables, a los fines de transformar y revertir las situaciones que dieron lugar a la aplicación de la Medida de Protección Excepcional y restablecer la convivencia de la niña, niño o adolescente a su medio familiar o centro de vida. En situaciones donde ello no resulta posible, “se deberán llevar adelante acciones tendientes a la inserción y vinculación de la niña, niño o adolescente en un medio familiar alternativo y definitivo.”¹⁸

En pocas palabras, una Medida de Protección Excepcional, no debe superar el plazo de seis meses, período en el cual puede suceder que las causas que dieron origen a la separación se reviertan y quien ha sido sujeto de una medida de separación regrese a convivir con sus progenitores, tutores o responsables, o bien que desde el órgano administrativo interviniente se evalúe y considere que no se encuentran dadas las condiciones necesarias para el regreso de la niña, niño o adolescente a su centro de vida, y se sugiera a los Tribunales o Juzgados competentes en materia de Familia, que se resuelva de manera definitiva.

De acuerdo al artículo 52 de la Ley Provincial 12.967, y en correlación con el artículo 41 de la legislación Nacional, las Medidas de Protección Excepcional deben ser aplicadas conforme a determinados criterios, a saber

“a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las medidas consisten en la búsqueda e individualización de las personas vinculadas a ellos a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad según costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes.

b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al considerar las soluciones se debe prestar especial atención a la continuidad en la educación de las niñas, niños y adolescentes, y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

c) Permanencia temporal en centros terapéuticos de salud mental o adicciones.

¹⁸ Ley 12.967, art. 51, Dec. Regl. 619/10

d) Las medidas se implementan bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo familiar de origen con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes.

e) Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos de hermanos deben preservar la convivencia de los mismos.

f) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir en privación de la libertad.

g) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional la falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas de la autoridad administrativa.

La aplicación de las medidas deberá ser supervisada por la autoridad administrativa que la dictó.”

A través de estos criterios es posible percibir ciertas intenciones de la legislación provincial de indicar lineamientos que no deben pasar desapercibidos ya que contribuyen a garantizar derechos a la hora de la ejecución de una Medida de Protección Excepcional, es decir, la separación de una niña, niño o adolescente de su medio familiar.

Se evidencia en ellos el importante lugar otorgado a los vínculos y los lazos, ya sea con familiares o con miembros de la comunidad, los cuales se sugiere que puedan sostenerse más allá de la aplicación de una medida de separación. Que la niña, niño o adolescente sea alojado temporalmente en ámbitos familiares alternativos, ya sea que se trate de la familia ampliada o de la comunidad, así como también la preservación de la convivencia entre grupos de hermanos, muestran las intenciones de garantizar derechos, mantener vínculos y especialmente actuar según el interés superior de niñas, niños y adolescentes que sean sujetos de Medidas de Protección Excepcional. Por otro lado, la indicación constante de los ámbitos familiares como lugares de acogimiento dan cuenta también de una de las nociones fundamentales de este nuevo paradigma en relación al lugar primordial que ocupa la familia como ámbito propicio para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, postulando las instituciones de alojamiento como última instancia y por el menor lapso de tiempo que sea posible.

3.3. Con miras a la desinstitucionalización

La Ley Provincial, así como se inscribe dentro del paradigma de la Protección Integral, también lo hace –o pretende hacerlo–, al paradigma de la “desinstitucionalización”. No nos referimos aquí a la desinstitucionalización como la abolición por completo de las instituciones destinadas al alojamiento de niñas, niños y adolescentes sino que lo que se pretende es que no sean los espacios institucionales los primeros y únicos pensados para el alojamiento de quien se constituya como sujeto de una Medida de Protección Excepcional.

Este indicar frecuente de la Ley acerca de la necesidad de búsqueda de miembros de la familia ampliada de las niñas, niños y adolescentes o con quienes ellos mantengan lazos afectivos (independientemente de que sean lazos sanguíneos o jurídicos), así como la búsqueda y el alojamiento por parte de familias que se constituyan como alternativas al grupo familiar –como lo es el Programa Familias Solidarias en nuestra provincia– dan cuenta del “desplazamiento” que se pretende generar respecto a las instituciones de alojamiento, primando la promoción de la convivencia de niñas, niños y adolescentes en ámbitos familiares.

De acuerdo a datos presentados en el Informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2013), la provincia cuenta con un total de 12 centros residenciales oficiales, es decir, espacios institucionales para el alojamiento transitorio de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, y aproximadamente el doble de instituciones privadas que poseen convenios con la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia para el mismo fin (cabe mencionar que el número de instituciones con convenio varía y que los datos presentados corresponden al informe del año 2013).

Realizando un recorrido por artículos de diferentes medios de comunicación digitales¹⁹, así como también a través de los datos presentados por el documento elaborado por Unicef y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, “Situación de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales en la República

¹⁹ Fueron consultados artículos periodísticos de diarios La Capital y Página/12 (sección Rosario/12)

Argentina. Relevamiento Nacional y Propuestas para la Promoción y el Fortalecimiento del Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria” del año 2012, fue posible obtener datos cuantitativos acerca de niñas, niños y adolescentes con Medidas de Protección Excepcional (datos correspondientes al período 2007-2015). De acuerdo a dicha información se infiere por un lado una notoria disminución de niñas, niños y adolescentes separados de sus familias de origen y, por otro, se hace referencia a la disminución de la cantidad de niñas, niños y adolescentes alojados en ámbitos institucionales.

Resulta interesante poder plasmar dichos datos ya que dan cuenta de la reducción del espacio institucional como el principal medio de alojamiento de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. De esta manera, de acuerdo a datos obtenidos del informe elaborado por UNICEF y la SENNAF, en el año 2007 en la Provincia de Santa Fe, más de 1600 niñas, niños y adolescentes se encontraban “internados”, por lo que la provincia se constituía como la segunda a nivel nacional con mayor población infantil institucionalizada. Hacia mediados del año 2012, de un total de 647 niñas, niños y adolescentes separados de su grupo familiar de origen, 533 (un 82,38%) se encontraban alojados en modalidades institucionales, mientras que el resto se hallaba en ámbitos familiares. De acuerdo a datos oficiales presentados en artículos periodísticos recientes, brindados por quien se constituyó hasta el año 2015 como Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, de una cifra de alrededor de 700 niñas, niños y adolescentes separados de su medio familiar, aproximadamente un 50% de ellos se encontraba en hogares residenciales mientras que el otro 50% se trataría de niñas, niños y adolescentes alojados por familias (ya sea por miembros de su familia ampliada o bajo el Programa Familias Solidarias). Si bien de acuerdo a estos datos no se registrarían en los últimos cinco años cambios en la cantidad de niñas, niños y adolescentes separados de su medio familiar, sí sería notoria la disminución de ellos en centros residenciales.

Es en este sentido que resulta importante dar cuenta del Programa Familias Solidarias, vigente en la provincia de Santa Fe, el cual nuclea a personas o grupos familiares que desean brindar de manera transitoria alojamiento, cuidados, atención y protección a niñas, niños y adolescentes que se encuentren separados de sus grupos familiares de origen debido a la aplicación de una Medida de Protección Excepcional. El programa tiene como objetivo ofrecer atención y cuidados a niñas, niños y

adolescentes cuyos derechos se encuentran vulnerados, posibilitar su desarrollo integral, fortalecer la recomposición de los vínculos con sus orígenes en un marco de respeto por su historia e identidad, así como también y brindar una alternativa a la institucionalización.

De este modo entendemos que esta lógica de la desinstitucionalización no se lleva a cabo con la erradicación de las instituciones de alojamiento para niñas, niños y adolescentes sino que su puesta en práctica se pretende a través de diferentes modos. Uno de ellos es a través de la promoción de otras instancias de alojamiento como lo son las que preponderan la convivencia de niñas, niños y adolescentes en ámbitos familiares; por otro lado, otro modo de generar la ruptura con las antiguas modalidades del Patronato y del modelo tutelar tiene que ver con la posibilidad de lograr una refuncionalización de las instituciones de alojamiento de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.

En lo que respecta a la refuncionalización de los espacios institucionales, veremos en el quinto capítulo la instauración de los Estándares de Calidad, los cuales son propuestos a los fines de orientar y acompañar las prácticas e intervenciones con niñas, niños y adolescentes alojados en ámbitos institucionales de cuidado así como también la adecuación de dichas instituciones hacia el paradigma de la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.

“La institucionalización no es un aspecto negativo per se, pero se transforma en una práctica desdeñable cuando se utiliza indiscriminadamente o cuando se aplica como primera y única forma de abordar la situación de un niño y su familia (...) Se hace necesario plasmar, en este sentido, una distinción fundamental que existe entre la institucionalización como medida compulsiva (...) y otra interpretación posible sobre las instituciones, aquella que indica que las estatales son necesarias y deben estar al servicio del sistema de protección integral, como recursos de calidad del estado disponibles y de ultima ratio para restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes” (UNICEF-SENAF, 2012: 38).

3.4. Los “otros” adolescentes

Resulta necesario poder desarrollar de manera breve en este punto aspectos que conciernen a los adolescentes que suelen denominarse “en conflicto con la Ley”.

Si bien en la presente tesina tomamos como aspecto central lo que concierne a la institucionalización, nos referimos a ella específicamente como alternativa para niñas, niños y adolescentes a partir de la aplicación de Medidas de Protección Excepcional llevadas a cabo por los organismos correspondientes pertenecientes a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe; sin embargo interesa en este momento poder dar cuenta de aquellos quienes no parecen ser Sujetos de Protección de las legislaciones vigentes de protección integral de derechos, encontrándose en contextos institucionales muchas veces de encierro, siendo criminalizados y estigmatizados. El precio de ser jóvenes, el precio de ser pobres.

Son estos adolescentes los que fueron históricamente excluidos de aquellos espacios que se suponía debían brindarles contención, cuidados y garantías a sus derechos, los que hoy sí tienen un “lugar” en programas o instituciones donde se los vulnera una vez más, como mencionamos, en muchas ocasiones en contextos explícitos de encierro.

Como ejemplo de ello podemos mencionar el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (IRAR), donde las condiciones de existencia de los jóvenes parecieran reducirse al simple acto fisiológico de la respiración. Donde adolescentes de entre 16 y 18 años conviven en condiciones de hacinamiento, con falta de privacidad en los baños, ausencia de condiciones dignas de higiene, torturas impartidas hacia ellos, entre otras condiciones completamente en contradicción con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, teniendo en cuenta la mención acerca de las condiciones en las que deben encontrarse los jóvenes al tratarse de medidas privativas de la libertad. No debemos pasar por alto las frecuentes situaciones de jóvenes que mueren en sus celdas, quemados, golpeados, ahorcados.

Ellos, quienes cotidianamente son expuestos por los medios de comunicación como los generadores de la “inseguridad” son quienes han padecido a lo largo de su

vida la violencia de aquellas acciones que no hicieron más que expulsarlos. Han padecido la violencia y ella sigue atravesándolos hoy.

¿Dónde están incluidos estos jóvenes en las legislaciones de Protección Integral? Ellos continúan hoy siendo quienes frecuentan los Juzgados de Menores... De acuerdo a Bustos (2015) en la actualidad nos hallamos ante un interrogante crucial: ¿son los jóvenes quienes se encuentran en conflicto con la Ley o, por el contrario, las legislaciones son las que se están en contradicción y en conflicto con los jóvenes?

De acuerdo a la lectura realizada por Bustos, las leyes actuales tanto nacional como provincial protegen en la medida en que los sujetos no transgredan las normas; como sostiene, “quedan por fuera de la Ley n° 26.061 el tratamiento de los niños/as y adolescentes que incurran en algún delito, quienes en contradicción con la CIDN, están comprendidos por la Ley Nacional n° 22.278 mientras que la faz procesal, en nuestra provincia se rige por el Código Procesal de Menores, Ley n° 11.452 que comprende aspectos civiles y penales” (Bustos, 2015: 52). Es aquí donde se ubica la contradicción fundamental, donde el Estado, a través de la ley se transgrede a sí mismo.

Hoy, aquellos tildados y señalados como violentos, asesinos, peligrosos, entre otras tantas denominaciones completamente estigmatizantes, son quienes vieron sus vidas una y otra vez violentadas. Son ellos a quienes no se los protegió y hoy pareciera que lo que principalmente cobra importancia es “protegerse de ellos”.

Vivimos en una sociedad donde lo habitual es estigmatizar y criminalizar a los jóvenes, especialmente a los jóvenes pobres a los que se asocia al delito; se solicita a los gobiernos mayor “seguridad”, mayores penas, más encierro. Se postula como alternativa llevar adelante la “justicia por mano propia”, “matar al que mata”, pero nadie cuestiona las prácticas expulsivas que durante años sufren niñas, niños y adolescentes.

No se cuestiona la violencia ejercida hacia ellos desde las instituciones escolares –las primeras por las que se supone transitan niñas y niños–; no se cuestiona la ausencia de políticas públicas que tengan como norte garantizar efectivamente los derechos de niñas, niños y adolescentes; tampoco se lo hace respecto a la violencia policial impartida hacia los cuerpos y subjetividades de ellos, ni en relación a aquellas situaciones vinculadas a la circulación de armas, al acceso cada vez más frecuente y a

más temprana edad por parte de niñas y niños al consumo de sustancias psicoativas...
pero sí se pide seguridad, cámaras y mayor control social.

Capítulo 4: Gozar de un nivel de vida adecuado, un derecho... ¿para algunos?

“La pobreza es la violación más flagrante de los derechos humanos.”

Norberto Alayón

Desarrollaremos en algunas páginas lo que a nuestro parecer constituye el mayor problema de gran parte de la población de la sociedad actual: la situación de pobreza.

Tanto la legislación nacional como la provincial en materia de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dan cuenta del **derecho a la vida**. En breves líneas, y tal como fue planteado en el capítulo anterior, la mención en los textos legislativos acerca del mismo refiere que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute y protección y al acceso a un nivel de vida adecuado, tanto para sí como para su familia. Asimismo, se indica que debe bregarse por una mejora continua de las condiciones de existencia.

¿De qué hablamos cuando nos referimos al “nivel de vida adecuado”? Ya en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado en el año 1966²⁰, se hacía referencia a ello. Se enuncia a través de sus artículos el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado así como también la importancia otorgada al derecho a la alimentación, vestimenta y vivienda, junto con los referidos a la educación, al trabajo, entre otros, como derechos que hacen a ese “nivel de vida adecuado”.

Es posible mencionar, a grandes rasgos, algunos de los indicadores que constituyen aquello que denominamos nivel de vida adecuado, entre ellos podemos contemplar el acceso y permanencia al sistema educativo, el acceso a los servicios de salud, poseer una vivienda, contar con servicios básicos como lo son el agua potable, los desagües cloacales, contar con energía eléctrica, tener acceso a una alimentación saludable, encontrarse inserto en el mercado formal de trabajo, entre otros.

Ahora bien, no todas las personas cuentan con aquellas condiciones que hacen al nivel de vida adecuado. A modo de ejemplo, que una niña, un niño o adolescente tenga

²⁰ El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se encuentra disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>

acceso al sistema de salud y reciba atención médica no significa que su “derecho a la salud” se encuentre plenamente garantizado. En este sentido, creemos oportuno realizar una lectura acerca del derecho al nivel de vida adecuado (vulnerado e inexistente, pareciera, para tantos), haciendo puntualmente hincapié en lo que respecta al derecho a la vivienda digna y el acceso a determinados servicios que hacen a la calidad de vida.

Ranchos de chapas, lonas o maderas, pisos de tierra –y barro cuando llueve–; un balde utilizado como inodoro; velas supliendo la luz eléctrica; una única canilla de donde obtener agua; niños trabajando junto a sus padres, juntando materiales desechados en las calles, entre otras, son algunas de las condiciones cotidianas de muchas niñas, niños y adolescentes en la actualidad, tristes postales que no solo se observan a los alrededores de las grandes ciudades sino que se encuentran en diversos puntos de la provincia, en las grandes ciudades y en pequeños pueblos. Como hemos mencionado en el párrafo anterior, el derecho a la salud no se encuentra plenamente garantizado en una persona por el simple hecho de concurrir con cierta frecuencia a consultas médicas o a realizarse tratamientos para determinada enfermedad si al regresar al lugar donde vive no tiene agua potable para beber, si ésta escasea y tampoco alcanza para asearse, si las condiciones habitacionales de su vivienda no son saludables, etc.

Es decir, más allá de las acciones que puedan realizarse en pos de garantizar el acceso de niñas, niños, adolescentes y la comunidad en general a determinados servicios que se encuentran directamente relacionados con el goce de diferentes derechos, si también se “garantizan” ciertas condiciones de pobreza, nos encontramos algo alejados de la posibilidad de hablar de goce de derechos; por el contrario, la vulneración sigue ganando terreno.

Teniendo en cuenta los diferentes Tratados Internacionales de Derechos Humanos que nuestra nación ha incorporado a través de la reforma constitucional, así como también la legislación nacional y provincial en materia de protección a la niñez y adolescencia, se puede percibir la reiterada mención a la responsabilidad fundamental del Estado en lo que concierne a garantizar que los derechos reconocidos sean cumplidos, haciéndose mención en diferentes momentos acerca del deber del aparato estatal a la hora de brindar los recursos y asistencia necesarias para el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en su medio familiar, social y cultural.

Nos interesa aquí plasmar dos puntos interesantes a tener en cuenta. Por un lado, nuestra consideración acerca de la pobreza como un indicador de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes o, para decirlo de la manera correcta, una vulneración a los derechos humanos. Por otro lado, en la actualidad nos encontramos en un momento donde las concepciones respecto a la protección de la niñez y la adolescencia refieren distanciarse de aquellas prácticas de judicialización y criminalización de la pobreza como así también de aquellas según las cuales la separación de un niño, niña y/o adolescentes de su grupo familiar era efectuada con fines asistenciales para romper con la transmisión intergeneracional de la miseria. Esto nos permite enunciar nuevamente que la condición económica, es decir en lo que respecta a recursos materiales, de una niña, niño o adolescente **no es motivo** para que sea separado de su grupo familiar sino que aquellas situaciones deben ser revertidas mediante intervenciones y recursos otorgados por el Estado para con la familia y la comunidad en general.

Lo expuesto en el párrafo precedente, cabe aclarar, de ninguna manera infiere la idea de que niñas, niños o adolescentes deberían ser separados de su medio familiar a causa de las situaciones económicas en las que se encuentran viviendo; por el contrario la intención es poner de manifiesto cómo pueden las situaciones de pobreza por las que muchas familias se encuentran atravesadas pasar de cierto modo desapercibidas como vulneradoras de los derechos adquiridos. Pareciera “anularse” la condición de pobreza como un factor que denotaría vulneración, como si nos encontráramos ante una situación natural, aceptable, o sin la trascendencia que implica; permitiéndonos pensar que nos estaríamos hallando ante una cierta legalización de la vulneración que genera la pobreza (donde día a día conocemos que son más las niñas, niños y adolescentes tanto en la provincia como en el territorio nacional que se encuentran atravesados por la constante ausencia de vivienda, alimentos, servicios básicos, entre otros).

De acuerdo al Informe elaborado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Santa Fe en el año 2013, niñas, niños y adolescentes santafesinos se encuentran en desventaja respecto del resto de la población del territorio provincial en lo que concierne a las condiciones de vida. En dicho informe son evaluados indicadores como la cobertura de agua de red y desagüe cloacal, los hogares con necesidades básicas insatisfechas y las condiciones de comodidad, seguridad e higiene; el mismo refiere que quienes pertenecen al rango etario de 0 a 17

años se hallan en una posición de desventaja respecto a la población en general, es decir, niñas, niños y adolescentes cuentan con déficit en el acceso al agua potable y desagües cloacales, con mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas así como también un gran número de ellos viviendo en condiciones de hacinamiento. Asimismo, el informe culmina indicando que nuestra provincia presenta los mejores contextos (en comparación con el resto del país) respecto a las condiciones de vida vinculadas al hacinamiento y necesidades básicas insatisfechas, no pudiendo decirse lo mismo en lo que concierne a las condiciones relativas a la cobertura de agua potable y desagües cloacales.

Y es justamente sobre estos sectores, atravesados por situaciones de exclusión económica y social y de vulnerabilidad constante, sobre los cuales en mayor medida el ojo del Estado está presente. Son las niñas, niños y adolescentes que muchas veces asisten en condiciones de higiene inadecuadas a las escuelas, quienes en ocasiones no concurren regularmente a establecimientos educativos o directamente abandonan esos espacios; son las niñas, niños y adolescentes que día a día realizan actividades que poca relación tienen con sus derechos sino que por el contrario son manifestaciones de las diferentes formas de trabajo infantil –sean actividades remuneradas o no–; son niñas, niños y adolescentes que presentan diferentes tipos de desnutrición infantil, niñas y niños con bajo peso, carentes de nutrientes esenciales para el desarrollo y crecimiento adecuado; niñas y niños que no siempre cuentan con la recuperación propicia ante una enfermedad, y quienes tampoco cuentan con las condiciones óptimas para que ello suceda...son ellos también los que concurren a escuelas, a efectores de salud y demás instituciones que forman parte del entramado territorial de lo público, es decir, son niñas, niños y adolescentes los que de una forma u otra toman contacto con espacios en donde actores y organismos específicos entran en escena.

Desocupación, trabajos precarizados, trabajo infantil, ausencia de viviendas dignas para las familias, acceso restringido a servicios básicos de calidad, entre otros, son manifestaciones de las desigualdades sociales que cotidianamente atraviesan y golpean los cuerpos y las subjetividades de niñas, niños y adolescentes, de sus familias y comunidades. Y es allí donde se hace necesaria la presencia del Estado y sus organismos, una presencia que apunte al fortalecimiento de las comunidades, el diseño y aplicación de políticas que pretendan, efectivamente, erradicar aquellas condiciones de vida que alejan cotidianamente a niñas, niños y adolescentes de sus derechos.

En este sentido podemos afirmar que no son únicamente los padres o los responsables legales de niñas, niños y adolescentes quienes llevan a cabo acciones o prácticas vulneradoras de los derechos; es también el Estado, ya sea por acción u omisión quien frecuentemente permite de cierto modo que determinados derechos de niñas, niños y adolescentes sean vulnerados una y otra vez.

Capítulo 5: La vida en la institución

Como ha sido mencionado anteriormente, cuando es aplicada una Medida de Protección Excepcional mediante la cual niñas, niños y adolescentes son separados de su centro de vida, si bien se plantea a través de la legislación provincial vigente la necesidad de búsqueda de ámbitos familiares alternativos –familia ampliada del niño, niña o adolescente o familia de la comunidad con quien mantenga lazos afectivos o familias solidarias que brinden alojamiento transitoriamente– en muchas ocasiones el ámbito de alojamiento no es familiar sino institucional.

A partir de aquí es que resulta nuestro interés –entre otras cuestiones– de conocer cómo se desarrolla en la actualidad la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes institucionalizados; cómo es un día “normal” para una niña, un niño o un adolescente alojado en una institución de niñez; cuáles son los cambios que se han logrado y qué es lo que aún resta por construir. Estos interrogantes surgen a partir de pensar que si bien el actual paradigma tiene ya décadas de haberse postulado, es relativamente reciente, es decir, son prácticas y cotidianidades que se han comenzado a forjar durante los últimos años, construyéndose nuevos modos, los cuales se suponen diferentes a los anteriores. A pesar de ello, y como hemos planteado con anterioridad, esto no implica que sea un cambio abrupto sino que es posible la coexistencia de diversos modos más allá de que puedan considerarse contradictorios.

Tomamos como referencia para el presente trabajo el Hogar “María Elena Walsh”²¹ institución de alojamiento transitorio para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales ubicado en una ciudad del centro de la provincia de Santa Fe.

5.1. El surgimiento de la institución

El hogar de referencia es una institución dependiente de la provincia de Santa Fe, más precisamente es una de los espacios de alojamiento transitorio de niñas, niños y

²¹ El nombre de la institución es ficticio a los fines de preservar la identidad de los sujetos informantes así como también la institución.

adolescentes pertenecientes a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia (se trata de una institución “oficial”).

La misma se encuentra ubicada en un barrio que se ha constituido como la primer “villa” de la ciudad, en la misma manzana en la que se ubica la institución se hallan también otros organismos estatales tanto de la provincia como así también pertenecientes al nivel municipal (centro de salud, Centro de Acción Familiar, equipo territorial)

A inicios de la década de 1960 un grupo autodenominado “damas de la sociedad” plantea la inquietud de contar en la ciudad con una institución que sea capaz de resguardar y dar asilo a jóvenes madres (menores de edad) desamparadas. La presencia de situaciones de adolescentes o jóvenes embarazadas o con niños sin un lugar estable donde vivir se constituyó en la demanda inicial de lo que hoy es el hogar. Se inicia de esta forma la solicitud y las posteriores gestiones a nivel provincial que permitieron concretar este pedido.²²

En la ciudad no se contaba en aquel entonces con instituciones destinadas exclusivamente al alojamiento de niñas, niños y adolescentes que se encontraran separados de su ámbito familiar, por este motivo comenzó esta institución también a constituirse como ámbito de alojamiento de aquellos niños cuando el Juzgado de Menores así lo determinara. Como fue mencionado al recorrer el paradigma anterior, aquellas niñas, niños y adolescentes –en aquel entonces 'menores'– se encontraban institucionalizados en gran medida debido a situaciones de pobreza, es decir por cuestiones asistenciales, al igual que las niñas y jóvenes madres o embarazadas, ingresaban a la institución todos ellos por disposición del Juzgado de Menores.

Hacia el año 1980 la institución poseía capacidad para albergar a 36 menores-madres con sus hijos. Contaba además con la presencia de una guardería, la que poseía un total de 80 cupos, constituyéndose años después como el Centro de Acción Familiar (CAF).

A través del trabajo de campo realizado fue posible acceder a un documento escrito, elaborado por personal de la institución donde se ponen de manifiesto

²² En la capital provincial, paralelamente, ya se contaba con un hogar para madres menores de edad el cual, por cuestiones edilicias, se decide que sea trasladado a la ciudad en la que actualmente se encuentra la institución.

cuestiones vinculadas a la historia del hogar –el mismo fue elaborado debido a que en reiteradas ocasiones estudiantes de carreras universitarias de la ciudad se han acercado a la institución a indagar sobre su surgimiento, ofreciendo de este modo parte de la información requerida–. Fue posible a través de este material al cual se pudo tener acceso conocer ciertos objetivos de la institución durante sus primeros años. Entre ellos se manifiesta que el objetivo principal se fundaba en poder brindar asilo a las madres menores que se encontraban en situación de desamparo o que presentaran problemas de conducta, “satisfaciendo sus necesidades, elevando su nivel intelectual, consolidando valores éticos y morales y capacitándolas a los fines que en un futuro se puedan insertar en el mundo laboral sin problemas.”²³

Otro de los objetivos que perseguía la institución se encontraba vinculado a afianzar el lazo entre madres e hijos. A través del documento consultado como así también por medio de la entrevista realizada a la profesional de trabajo social de la institución²⁴, es posible visualizar en qué consistía la cotidianidad de las jóvenes, niñas y niños que allí se encontraban alojados. Las tareas de “amas de casa” y “madre” eran las que predominaban entre las adolescentes (tareas de limpieza, cocina, cuidado de los niños), se indica además en el documento facilitado que contaban también con momentos de esparcimiento tanto dentro como fuera de la institución. Del mismo modo, se agrega que quienes residían en el hogar tenían la posibilidad de asistir a establecimientos de educación formal, ya sea primaria, especial o secundaria; como así también contar con atención a la salud. Finalmente se indica acerca de la participación de las jóvenes en talleres de peluquería, manualidades y planificación familiar.

En la entrevista mantenida con la profesional de trabajo social de la institución la misma refiere acerca de la preponderancia que se le otorgaba en aquel entonces a las cuestiones referidas a la transmisión de conocimientos y habilidades vinculadas al rol materno, donde el personal de la institución en su conjunto se ocupaba de transmitir a las jóvenes aquellos hábitos cotidianos relativos a la crianza y cuidado de los hijos, entre otras.

En lo que respecta a las trabajadoras que durante años han formado parte de la institución fueron siempre mujeres, las mismas desempeñaban tareas de preceptoras,

²³ Extraído del documento brindado en la institución recientemente mencionado.

²⁴ Ver Anexo II.

auxiliares de preceptoras, servicios generales; el hogar contaba además con maestras de manualidades, enfermeras, ecónomas, administradoras y las directoras correspondientes de acuerdo a los diferentes periodos.

5.2. La institución en la actualidad

Ahora bien, luego de haber presentado aspectos que hacen a la historia de la institución y retomando los interrogantes planteados al inicio de este capítulo es que consideramos necesario dar cuenta de aquellos conocimientos y/o reflexiones a las que hemos podido arribar a partir de la inserción en dichos espacios cotidianos.

5.2.1. Aspectos generales

Para comenzar diremos que en parte no ha cambiado la población que se aloja en la institución ya que, como hemos visto, el hogar además de dar asilo a las madres menores de edad también se constituía como ámbito de alojamiento de niñas, niños y adolescentes separados de sus padres por el Juzgado de Menores; pero por otra parte, entendemos que sí hubo un cambio y este proviene del hecho de que a partir de la implementación de la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes son solo los órganos administrativos de aplicación de las Medidas de Protección Excepcional los que decidirán el alojamiento de una niña, niño o adolescente en la institución, quitándole competencias a los Juzgados de Menores.²⁵

Asimismo, otro avance notorio se evidencia en la mayor profesionalización con la que cuenta la institución hoy si se la compara respecto a cómo estaba constituido el cuerpo de trabajadores anteriormente; en la actualidad el hogar posee un equipo profesional conformado por una trabajadora social y una psicóloga, la directora, acompañantes convivenciales (integrado también por un acompañante varón) y otros miembros como ecónoma, administradora y personal de servicios generales.

²⁵ Cabe aclarar que hemos tomado conocimiento que han transitado por la institución adolescentes con sus hijos, pero ello se debía a que aquellas jóvenes menores de 18 años de edad eran sujetos de protección de una Medida Excepcional por lo cual se encontraban alojadas en el hogar, y junto a ellas se encontraban sus hijos y/o hijas.

5.2.2. Inserción en la institución

Para poder dar cuenta de las características de institución en la actualidad, el contraste con las instituciones pasadas –de acuerdo a lo conocido a partir de la indagación bibliográfica–, la cotidianidad de las niñas, niños y adolescentes, así como también los desafíos pendientes, fue necesario ser parte de lo cotidiano de aquellos quienes residían, o residen aun, en ella. Los encuentros con niñas, niños y adolescentes fueron llevados a cabo tanto en el espacio institucional como así también por fuera de él, durante los meses de enero a julio del año 2015.²⁶

Bajo la forma de observación participante fue posible compartir los diferentes espacios en los que niñas, niños y adolescentes se encuentran –o se han encontrado– habitando. El acercamiento al ámbito institucional permitió lograr una aproximación al conocimiento acerca de cómo se desarrolla el día a día de quienes se hallan institucionalizados, entendiendo que es a través de la incorporación a la rutina de los informantes, al conjunto de actividades y de relaciones que tienen lugar en su vida diaria que podemos tener acceso y percibir su cotidianidad.

Si bien puede sonar reiterativo, creemos preciso recordar que las niñas, niños y adolescentes que hoy son alojados en instituciones se debe a que son sujetos de Medidas de Protección Excepcional aplicadas por los órganos administrativos de la provincia, a los cuales les compete la ejecución de tales medidas de separación de niñas, niños y adolescentes de su centro de vida. Por otro lado aclarar también que, de acuerdo a lo que plantea la legislación vigente, la institucionalización de niñas, niños y adolescentes debe tenerse en cuenta como una última instancia, debiendo trabajarse en pos de que quienes sean sujetos de una medida de separación de su núcleo familiar de origen puedan ser alojados por miembros de su familia ampliada, familias de la comunidad o bien bajo el Programa Familias Solidarias, haciendo prevalecer la convivencia en un ámbito familiar por sobre el institucional. De este modo, niñas, niños y adolescentes que hoy se encuentran en espacios institucionales son aquellos para con quienes no se ha contado con un ámbito familiar alternativo al momento de separación de su grupo de origen.

²⁶ Durante el mes de enero mediante la participación en el espacio de Colonia de Verano se ha podido mantener encuentros con algunos de las y los adolescentes que se encuentran alojados en el Hogar, posteriormente al finalizar ésta, se ha iniciado la asistencia a la institución.

5.2.3. El Hogar, niñas, niños y adolescentes y la cotidianidad

El Hogar “María Elena Walsh” se trata de un hogar mixto, en el cual varones y mujeres comparten el mismo espacio físico (a excepción de la designación de habitaciones, donde sí son separados por sexo). Fue posible evidenciar variadas edades de quienes allí se encontraron alojados durante el período en que se desarrolló la observación participante. Asimismo, el hogar cuenta con capacidad total para alojar a 15 niñas, niños y/o adolescentes.²⁷

En lo que respecta a lo edilicio, cuenta con los siguientes espacios:²⁸

- Dirección
- Oficina del equipo técnico (trabajadora social y psicóloga)
- 6 (seis) habitaciones utilizadas por niñas, niños y adolescentes, en las cuales poseen sus respectivas camas, muebles y ropero (hay además dos habitaciones que al momento no eran utilizadas como dormitorios)
- un cuarto donde funciona ropería y costurero (en dicho lugar se observa indumentaria y calzado que generalmente es donado a la institución, así como también comprado por la misma y la cual es utilizada por las niñas, niños y adolescentes)
- Baño de uso compartido por niñas, niños y adolescentes (se trata de un baño amplio donde por un lado se ubican las duchas individuales, en otro sector los sanitarios y lavabos en el centro)
- Sala de acompañantes convivenciales-preceptoría
- Sala de usos múltiples (durante el tiempo que fue realizada la observación se evidenció que ésta era utilizada como comedor ya que el comedor del hogar se hallaba en refacción junto a otras áreas)

²⁷ En el transcurso en el que fueron realizadas las observaciones fue posible registrar momentos en los que la capacidad de alojamiento estaba cubierta y otros en donde el total de niñas, niños y adolescentes descendía (esto se debía en algunas situaciones a traslados de algunos de ellos a otras instituciones u otros ámbitos de cuidado alternativo o bien debido al egreso a causa del cese de la Medida de Protección Excepcional).

²⁸ Ver Anexo II, Plano de la institución

- Baño (para uso de los trabajadores)
- Lavadero (área en refacción)
- Cocina (área en refacción)
- Economato (área en refacción)
- Despensa (área en refacción)
- Patios: delantero, trasero, interno y en uno de los laterales.

Las condiciones respecto a la estructura edilicia, diseño y equipamiento de los ambientes de la institución observadas durante el periodo en que esta fue frecuentada para el presente trabajo no eran óptimas. Esto pudo evidenciarse por ejemplo en cuanto a las condiciones en las que se observaban las paredes internas, el baño utilizado por niñas, niños y adolescentes, las aberturas de las habitaciones, el mobiliario. Es importante precisar sin embargo que se encontraban en refacción los ambientes ubicados en el sector derecho de la institución (donde se observaban en reparación y remodelación las áreas recientemente mencionadas), sector que no ha sido utilizado durante aquel tiempo debido a los trabajos que estaban llevándose a cabo. Cabe aclarar también que algunas de las remodelaciones daban cuenta de cambios de las aberturas de la institución, puesta en condición de algunas paredes, remodelación completa de la cocina –donde los elementos y materiales utilizados podían inferir una modificación positiva en lo que respecta a las condiciones de higiene y seguridad del lugar–.

Dentro del hogar, niñas, niños y adolescentes cuentan con espacios de uso compartido (como lo son el baño, el comedor, la sala de usos múltiples) y otros espacios que pueden identificarse como revestidos por cierta privacidad, como por ejemplo las habitaciones. Por lo general, ante la presencia de grupos de hermanos, las habitaciones son compartidas por ellos. Es posible evidenciar la privacidad/intimidad que significan las habitaciones de cada uno de ellos, manteniendo muchas veces las puertas cerradas, donde se torna imprescindible el tocar la puerta o pedir permiso antes de ingresar, y donde el resto de niñas, niños y adolescentes en algunas ocasiones solo ingresan acompañados de quienes se constituyen como dueños de ellas. Allí guardan muchos de sus objetos personales, regalos, cartas, fotos, juegos, pinturas, recuerdos y demás elementos significativos, allí se refugian también en ocasiones de enojo, de angustia...

Por fuera del espacio institucional niñas, niños y adolescentes cuentan con actividades comunes y diferentes. Al momento de la realización de la observación participante en el hogar, se ha tomado conocimiento que niñas, niños y adolescentes alojados en el hogar asistían a establecimientos educativos, ya sea nivel primario como secundario, concurriendo los más pequeños al CAF que se encuentra a pocos metros del hogar. La asistencia escolar se realizaba tanto en turno mañana como así también durante la tarde, contando algunos de ellos con modalidad jornada ampliada dentro del establecimiento escolar. En contra-turno suelen concurrir a espacios recreativos como por ejemplo a un club a practicar deportes, talleres, apoyo escolar. Para muchas de estas salidas del hogar, niñas, niños y adolescentes se mueven con cierta autonomía, los más pequeños siempre lo hacen junto a un acompañante convivencial o acompañante personalizado²⁹; para determinadas actividades niñas y niños más grandes lo hacen sin la presencia constante de un adulto. Además de ello disponen de horarios para poder salir de la institución, visitar a sus amistades, etc. En ocasión de poseer salidas y/o viajes organizados desde los establecimientos escolares, se ha tomado conocimiento que han concretado dichas actividades con el respectivo grupo escolar. Asimismo, existen oportunidades en que niñas, niños o adolescentes deciden realizar cambios respecto a la asistencia de una determinada institución escolar, siendo estas decisiones acompañadas y apoyadas por los miembros del equipo técnico de la institución siempre que se evalúe adecuado.

Por otro lado es posible, a través de la observación participante realizada, dar cuenta del tiempo dedicado por parte de niñas, niños y adolescentes al juego y la recreación. Si bien se evidencia que no es elevada la cantidad de recursos materiales (juegos y juguetes) con las que cuenta la institución, sí es podemos afirmar que existen determinadas actividades, como por ejemplo el jugar a la pelota, jugar con “bolitas” en

²⁹ Acompañantes Personalizados es un programa de abordaje ambulatorio, destinado a niños, niñas, adolescentes y familias que se encuentran momentáneamente atravesando alguna dificultad que le impide el ejercicio pleno de sus derechos. Los profesionales acompañan y asisten con herramientas que posibiliten el desarrollo integral y el cumplimiento efectivo de todos los derechos en caso de que alguno de ellos se encuentre vulnerado. El programa se pone a disposición de los equipos (servicio local/gobierno local/ equipos de Subsecretaría de niñez) que trabajan en sus territorios y consideran la necesidad de incorporar al acompañante como parte de una estrategia de intervención. Está pensado a partir de la contratación por horas de personas adecuadas para cada situación, que le permita desde su rol profesional diferenciarse del trabajador del Estado, ésta particularidad admite poder establecer vínculos diferentes a los que hasta ese momento pudo ofrecerse al niño/a adolescente o familia.

Otra característica de importancia es que la intervención se lleva a cabo en el lugar donde se encuentran los destinatarios (domicilio, institución, hospital, barrio, plaza, calle, etc.) y allí se trabaja. Disponible en [http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/118550/\(subtema\)/93750](http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/118550/(subtema)/93750)

el patio, entre otras, que convocan a la mayoría de ellos –y ellas– y que es a partir de estas actividades a través de las cuales comparten momentos del día, dedicando largos periodos de tiempo a estos juegos al aire libre, independientemente de las edades y sexo de los participantes. Fue posible asimismo observar cómo se interesan en los momentos libres por realizar actividades didácticas y manualidades, el cual también se constituye como un momento de encuentro, donde no solo cada uno realiza su actividad sino que se genera un espacio de diálogo constante entre ellos y los adultos que se hallan coordinando y/o acompañando la actividad, generalmente con la profesional de psicología de la institución y los acompañantes personalizados.

Cabe mencionar también que dentro de la institución se organizan los cumpleaños de cada uno de ellos durante algún día del fin de semana, en los cuales niñas, niños y adolescentes cuentan con una jornada donde se celebra ese día especial, se lo agasaja con una torta de cumpleaños, golosinas, regalos, tarjetas de invitación y la presencia de personas y amistades que ellos tengan por fuera del hogar, etc.³⁰ Durante los periodos de vacaciones y/o receso escolar, ha sido posible tomar conocimiento que niñas, niños y adolescentes participan de actividades recreativas tales como la asistencia a la colonia de vacaciones, la participación en eventos animados, visita al circo, obras de teatros en espacios barriales, etc.

Siguiendo lo que ha sido expresado por la profesional del hogar que ha brindado la entrevista, desde un tiempo a la actualidad se busca fomentar que niñas, niños y adolescentes posean actividades por fuera de la institución, que participen en espacios que incluyan a otros miembros de la comunidad, generando y propiciando la apertura, que se funden vínculos y lazos y que no todo deba suceder al interior de la misma. Puede decirse a través de lo percibido tanto a través de la entrevista como así también durante el período en el que fue realizada la observación participante que existe la intención de que no haya una distinción entre niñas, niños y adolescentes “del hogar”/“otros niños”, sino que niñas, niños y adolescentes sean ello: niñas, niños y adolescentes, sin etiquetas, ni títulos, a los fines de evitar cualquier signo de estigmatización a causa de encontrarse institucionalizados.

En este sentido es posible mencionar que anteriormente niñas, niños y adolescentes que residían en la institución poseían uniformes, lo que posteriormente ha

³⁰ Este tipo de eventos son llevados a cabo siempre y cuando quien cumpla años así lo desee.

sido eliminado. La instauración de este tipo de prácticas y hábitos dentro de las instituciones de alojamiento generaba una marca, posibilitando así cierta estigmatización hacia quienes allí residían ya que, desde un primer momento, eran identificados a partir del uso de un uniforme en común, con una insignia, como habitantes del hogar. Ello ha sido eliminado, ya no hay uniforme, disponiendo cada uno de ellos de su vestimenta, calzado y demás elementos personales. Es por ello que podemos sostener que existen intenciones de que niñas, niños y adolescentes no solo se vinculen con el resto de la comunidad, que desarrollen actividades por fuera del hogar sino que también se integren de modo tal que el convivir junto a otros en una institución de alojamiento transitorio por encontrarse separados de sus grupos familiares de origen no sea determinante, que no sea ello lo primero que los defina y los presente ante los demás.

En lo que respecta a cuestiones vinculadas a la atención de la salud, desde el momento en que se realiza un ingreso de una niña, niño o adolescente a la institución se coordina la asistencia al Centro de Salud y se procura, desde aquel momento, generar que profesionales de dicho efector se constituyan como referentes de ellos. Se realizan articulaciones además con el hospital local y otros efectores de salud por fuera de la ciudad en caso de ser necesario.

Se ha evidenciado además que existen horarios para el desayuno, almuerzo, merienda y cena, los cuales son flexibles y se adaptan a cada niña, niño o adolescente dependiendo de los horarios que cada uno posee. Pudo notarse la ausencia dentro de la institución de horarios estrictos vinculados a lo cotidiano en donde todos deban realizar la misma actividad.

A partir de la presencia dentro de la institución fue posible ser partícipe de momentos significativos para las niñas, niños y adolescentes. Fueron frecuentes en algunas situaciones las visitas de familiares, donde no solo se observó a quien recibía dicha visita disfrutar de aquel momento sino también al resto de las niñas, niños y adolescentes allí alojados, quienes compartían juegos grupales, conversaciones y mates. Por otro lado se pudo en una oportunidad presenciar el egreso de la institución de un grupo de niños (hermanos), quienes –al cesar la medida de separación– retomaron la convivencia junto a su progenitor. En dicha ocasión se hizo evidente cómo la partida de aquel grupo de hermanos repercutió en el resto de los niños. Entendemos que aquella

situación generó diferentes sentimientos en quienes continuaban en el hogar. “Te vamos a extrañar”, “vení a visitarnos” se podía oír en aquella despedida, y posteriormente algunos momentos de preguntas, enojos, manifestación de deseos, silencios...

5.3. Algunas consideraciones a partir del trabajo de campo

Tal como ha sido plasmado en un principio basándonos en la definición de Guber (2005) respecto al trabajo de campo, es posible aseverar que es a través de esta inmersión de quien investiga en la cotidianidad de quienes se constituyen como los sujetos informantes que pudo lograrse un acercamiento al conocimiento del modo en que los sujetos habitan la institución. Asimismo, esta presencia frecuente, la utilización de técnicas tales como la observación participante y la realización de entrevista a profesional de la institución como parte constitutiva de dicho trabajo de campo han permitido poder reflexionar acerca del cambio de paradigma en lo que respecta a niñez y adolescencia, la implementación y puesta en práctica de las actuales legislaciones así como también pensar las modificaciones que se han generado respecto a las instituciones de alojamiento de niñas, niños y adolescentes.

Cuando hablamos acerca de las instituciones propias del Patronato hacemos alusión a éstas como “instituciones totales”, entendiendo por tales, de acuerdo a Goffman (2001: 13), como aquel lugar de residencia y trabajo “donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente”, siendo características de éstas que todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad única, donde cada etapa de la actividad diaria se lleva a cabo en compañía de otros, quienes reciben el mismo trato y de quienes se requiere que realicen juntos las mismas cosas; en dichas instituciones, todas las etapas de las actividades diarias están estrictamente programadas, presentándose de manera secuencial e impuestas, a través de un sistema de normas formales explícitas.

Si tomamos como referencia las anteriores instituciones de alojamiento de la minoridad “en peligro o peligrosa”, las cuales poseían en gran medida las características de las instituciones totales como ha sido expresado en el párrafo precedente, encontramos considerables aristas desde donde se evidencian diferencias que dan cuenta

del cambio iniciado a partir de la instauración del nuevo paradigma. De acuerdo a la observación participante así como también teniendo en cuenta la entrevista que ha sido realizada a la profesional de trabajo social, podemos mencionar una serie de aspectos que permiten inferir la existencia de una nueva impronta dentro de la institución y las prácticas llevadas a cabo para con niñas, niños y adolescentes que allí se alojan.

A partir de la implementación de la Ley de Protección Integral no solo se plantea que niñas, niños y adolescentes deben encontrarse institucionalizados de manera transitoria, por el menor tiempo posible y como última instancia debido a la vulneración de sus derechos y en pos de la reparación de éstos, sino que se hace evidente cierto interés por la transformación de prácticas que durante años han prevalecido –y de las que aun hoy se perciben ciertos vestigios–, a los fines de *aggiornar* la cotidianidad de niñas, niños y adolescentes, y la institución en general, a los nuevos estándares de las prácticas y condiciones de alojamiento que se encuentran en lineal relación con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Se evidencia –por parte de los profesionales que se desempeñan dentro del hogar– que existen intenciones, así como también acciones, que dan cuenta del convencimiento de que el paso por la institución de las niñas, niños y adolescentes debe darse de modo tal que signifique el menor padecimiento posible, entendiendo que se encuentran inmersos en una sociedad que no solo permitió que se vulneren sus derechos sino que a raíz de ello han sido separados de su centro de vida, motivo por el cual deben vivir en un ámbito por fuera de lo “normal”, es decir, separados de sus familias. Es por ello que se apunta a que quienes sean alojados en esta institución puedan gozar de una cotidianidad que resulte lo más parecido a cualquier otra niña, niño o adolescente.

Ello es llevado a cabo, o se procura hacerlo, a través de diferentes acciones que niñas, niños y adolescentes desempeñan así como también son promovidas por quienes allí se encuentran trabajando. La concurrencia a establecimientos educativos por fuera del hogar, la participación en actividades recreativas en los lugares donde ellas se dictan y no simplemente pasando los días al interior de la institución, los festejos de aquellas fechas especiales para niñas, niños y adolescentes, donde cuentan con la posibilidad de poder disfrutar la presencia de seres queridos y quienes representan lazos afectivos, disponer de la posibilidad de salir a visitar a personas, ya sean familiares o no, con quienes mantienen vínculos afectivos y amistosos, dan cuenta de la búsqueda de una

apertura, de integrar a quienes allí se encuentran residiendo y no cercándolos o excluyendo como se lo hacía décadas atrás, donde la sociedad en general no debía tener contacto con los “internos”, los “peligrosos”...los menores encerrados.

Todas aquellas acciones permiten pensar en la instauración de nuevas prácticas en la cotidianidad de niñas, niños y adolescentes alojados en el lugar, buscando impregnar en la convivencia diaria los rasgos que más se le asimilen a la cotidianidad que una niña, niño o adolescente podría transitar estando en un ámbito familiar y no institucional; aspirando que el periodo que deban recorrer en la misma sea lo menos dañino para las subjetividades y los cuerpos de niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, es importante destacar que existen cuestiones vinculadas a la vida de niñas, niños y/o adolescentes en la institución que muchas veces exceden a las intenciones de los profesionales que intervienen en el lugar, correspondiéndose a otras instancias, a otros niveles u organismos. Ha sido posible tomar conocimiento que el alojamiento en la institución de niñas, niños y adolescentes no solo ha implicado la separación y alejamiento de sus grupos familiares sino que también ha conllevado el distanciamiento del resto de sus inscripciones y vínculos afectivos, institucionales y de referentes de su comunidad.

No todas las niñas, niños y adolescentes allí alojados eran oriundos de la ciudad en la que se encuentra la institución sino que provenían de localidades de otros puntos de la provincia. Sí es posible mencionar que durante aquel período un niño y un grupo de hermanos sí pertenecían a una localidad del Nodo Regional en el cual se ubica el hogar, pero el resto de ellos contaban con sus equipos profesionales intervinientes en la situación familiar por fuera de la región. Cabe aclarar que ello no depende de quienes se desempeñan dentro de la institución sino que corresponde a las áreas encargadas de la búsqueda de alojamiento, a quienes aplican las medidas de protección y deciden o no la institucionalización en un determinado lugar, etc.

Estas determinaciones, es decir, la institucionalización de niñas, niños y adolescentes en localidades alejadas de sus lugares de origen genera una ruptura de los lazos comunitarios y/o institucionales existentes así como también respecto a los vínculos afectivos que niñas, niños y/o adolescentes hayan podido tener. Como ha manifestado la profesional entrevistada, en algunas situaciones el contacto se dificulta, escasea, es débil y ello en gran medida se debe a las distancias que separa a niñas, niños

y adolescentes del resto de sus familiares, debiéndose establecer contactos a través de otros medios, como por ejemplo las comunicaciones telefónicas.

Cabe aclarar además que hemos podido evidenciar que al interior de la institución han comenzado a realizarse algunos cambios fundamentales –haciéndose especialmente visibles aquellas modificaciones en lo que respecta a lo edilicio– que dan cuenta de las intenciones de adaptar la misma a los nuevos modelos y exigencias que deben cumplir estos espacios de acuerdo a los Estándares de Calidad. Tomando en cuenta lo mencionado por la trabajadora social de la institución, estas modificaciones no son sencillas, implican la puesta en marcha de diferentes aspectos. Se hace necesario contar con recursos financieros, la aprobación de presupuestos para las modificaciones que conciernen a lo edilicio y la infraestructura; asimismo, también implican tiempo aquellos cambios vinculados a las prácticas concretas para con niñas, niños y adolescentes, la profesional entrevistada ha dado cuenta de aspectos relativos a dificultades –atribuidas a parte del personal que se desempeña en la institución– en lo que al trato con los sujetos que allí residen respecta, así como también en cuanto a la aplicación efectiva de los lineamientos otorgados por los Estándares de Calidad. Se trata de cambios sumamente necesarios que requieren modificaciones en las prácticas y los modos que han estado instaurados durante años, implica también el reconocimiento de las responsabilidades de cada uno de ellos como miembros de la institución, la puesta en escena de la capacidad de escucha, de contención, entre otros, a los fines de brindar tanto las condiciones de alojamiento correctas como las prácticas respetuosas de los derechos para con niñas, niños y adolescentes que allí residen.

5.4. Los Estándares de Calidad y la institución de alojamiento

¿A qué nos referimos al hablar de los Estándares de Calidad de las Prácticas y Condiciones de Alojamiento? Se trata de criterios esperables a cumplimentar por cada centro residencial, ya sea público o privado, que “deberán seguir de guía a todas aquellas personas que participen de la toma de decisiones y cotidianidad respecto a la vida de las niñas, niños y adolescentes alojados en centros residenciales” (Ministerio de Desarrollo Social, 2013: 14). Estos criterios tienen por objetivo brindar una orientación a las acciones, los modos y contenidos de los adultos responsables dentro de las

instituciones de alojamiento a los fines de lograr la efectivización de los derechos. Con ello se pretende “contribuir a orientar los procesos y tareas de planificación y ejecución de las prácticas y condiciones de alojamiento, desde el ingreso a un centro residencial, y hasta el egreso, cuidando que en todo momento las estadías resulten afables y favorables para el desarrollo personal y social de cada niña, niño y adolescente, de acuerdo a los enunciados de la Ley Provincial nº 12.967” (Ministerio de Desarrollo Social, 2013: 14).

Pues bien se trata de un documento que ha sido elaborado en relación al actual paradigma y el cual insta los modos a través de los cuales deben regirse las instituciones de alojamiento transitorio de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. La puesta en práctica de dichos Estándares implica cambios, transformaciones, entre ellas podemos mencionar el modo en que debe ser planificada la estadía de las niñas, niños y adolescentes en la institución; la calidad de la atención, donde se refieren cuestiones vinculadas a la alimentación, la promoción y atención de la salud, la participación en el sistema educativo, las salidas, entre otras; se plantea también acerca de las relaciones de convivencia entre niñas, niños y adolescentes que en un centro residencial se alojen así como también respecto a los profesionales y/o acompañantes convivenciales y el personal en general; la estructura edilicia, entre otras.

Fue durante el peronismo que, como hemos visto en el segundo capítulo, se realizaron críticas a las instituciones de alojamiento, las cuales eran planteadas debido a que se consideraba inadecuada la supuesta “ostentación” que revestían los lugares de alojamiento de aquel momento –por tratarse de edificios y espacios vistos como “lujosos”, que distaban de la realidad de las niñas, niños y adolescentes que allí residían, los cuales provenían de los sectores más empobrecidos–. De la misma manera que cuestionamos de qué se hablaba cuando se hacía referencia a que las instituciones de aquella época eran “demasiado ostentosas”, hoy nos preguntamos ¿qué ha pasado con ello?, ¿qué ha pasado con aquellas instituciones donde niñas, niños y adolescentes gozaban de bienestar y comodidades básicas? Se ha podido observar que las condiciones edilicias del hogar tomado como referencia en el presente trabajo –si bien en el periodo presenciado se encontraban algunas áreas en refacción– no advierten características similares a una “institución lujosa”, sino por el contrario, en muchos aspectos fueron evidenciadas determinadas insuficiencias (ejemplo de ello son el estado de algunas aberturas, de los artefactos sanitarios, los juegos y juguetes que disponen en la institución, entre otros). No se trata de lujos ni privilegios “distantes” de las

realidades de muchos de quienes se encuentran institucionalizados; por el contrario, brindar y garantizar el bienestar cotidiano debe ser una política de Estado, un horizonte constante, el cual no debe perderse de vista, ya que cuando se trata de garantizar derechos, nada debería interpretarse como “demasiado”.

Capítulo 6: El Trabajo Social en el campo de los derechos de niñas, niños y adolescentes

A diferencia de aquellos posicionamientos que conciben al Trabajo Social como profesionalización de la caridad y de la filantropía, acordamos que su constitución e institucionalización como profesión, se corresponde con la necesidad del Estado de llevar a cabo acciones que se enfoquen y direccionen hacia la regulación, sostenimiento y reproducción del sistema. En este sentido, Marilda Iamamoto (2003: 36) refiere que el surgimiento de la profesión “depende de una progresiva acción del Estado en la regulación de la vida social, cuando pasa a administrar el conflicto de clase que en nuestra sociedad presupone la relación capital/trabajo constituida por medio del proceso de industrialización y urbanización.” Asimismo la autora continúa indicando que “cuando el Estado se “amplía” y pasa a tratar la cuestión social no solo a través del uso de la coerción sino también buscando consenso en la sociedad, son creadas las bases históricas de nuestra demanda profesional” (Iamamoto, 2003:36).

He aquí entonces algunos de los puntos trascendentales. Por un lado que el Trabajo Social encuentra su base y fundamento en la cuestión social, es decir el conjunto de expresiones de desigualdad surgidas al momento de la constitución de la sociedad capitalista, que se expresa en problemas económicos, sociales y políticos. Es ello mismo lo que pone de manifiesto que al tiempo que existe una globalización de la producción y los mercados, se aumenta a igual ritmo la distancia existente entre la acumulación y concentración del capital por un lado y la producción creciente de la miseria y pauperización de gran parte de la población, por otro; es decir, se evidencia la contradicción fundamental de la sociedad capitalista. Esta contradicción es el escenario cotidiano que se nos presenta y convoca a los trabajadores sociales.

Continuando con Iamamoto (2003: 41-42) afirmamos que “los asistentes sociales trabajan con la cuestión social en sus más variadas expresiones cotidianas, tal como son vividas por los individuos en el trabajo, en la familia, en el área de vivienda, en la salud, en la asistencia social pública, etc. Cuestión social que, siendo desigualdad también es rebeldía, por involucrar sujetos que viven las desigualdades, que las resisten y a ellas se oponen. En esta tensión (...) trabajan los asistentes sociales situados en ese terreno movidos por intereses sociales distintos. (...) descifrar las nuevas mediaciones

por medio de las cuales se expresa la cuestión social hoy es de fundamental importancia para el Servicio Social en un doble sentido: para que se puedan aprehender las varias expresiones que asumen en la actualidad las desigualdades sociales –su producción y reproducción ampliada– y también para poder proyectar y forjar formas de resistencia y de defensa de la vida.”

“Se trata de descifrar las múltiples expresiones de la cuestión social, su génesis y las nuevas características que asume en la contemporaneidad, atribuyendo transparencia a las iniciativas que buscan revertirla y/o enfrentarla inmediatamente” (Iamamoto, 2003: 42).

Es en este escenario en el cual la profesión queda situada como mediadora entre el Estado y la sociedad civil. Será a través de la capacidad de los profesionales de realizar lecturas que permitan problematizar la realidad, así como también proponer ante ello prácticas que apunten a la defensa de los derechos, direccionando las intervenciones de modo tal que los trabajadores sociales no se encuentren en un “callejón sin salida” actuando de acuerdo a las demandas instaladas “desde arriba”, donde será posible la puesta en escena de intervenciones que logren interpretar las demandas de la población, a la luz de los procesos históricos (económicos, sociales, culturales, políticos).

Como mencionamos en el recorrido de esta tesina, en los diferentes momentos históricos en nuestro país han ido determinándose las diversas expresiones de la cuestión social así como también las “poblaciones objetivo” de la intervención del Estado en los distintos periodos y las acciones llevadas a cabo en ellos. En este sentido, y tomando en cuenta lo que a niñez y adolescencia refiere, las prácticas han sido implementadas con heterogéneos objetivos: por momentos se hacía completamente explícito el interés por mantener el orden social deseado, en otros las intervenciones buscaban romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza y, desde hace algunas décadas planteadas en pos de garantizar derechos. Allí se encontraba interviniendo el Estado, en aquellas expresiones fruto de las desigualdades sociales, entendiendo al Trabajo Social como profesión participe en dichos procesos –con mayor o menor injerencia–, tal como en la actualidad.

Ahora bien, en cuanto a la presencia de profesionales del Trabajo Social como parte integrante de equipos interdisciplinarios al interior de una institución de alojamiento transitorio para niñas, niños y adolescentes, y teniendo en cuenta lo

planteado por los Estándares de Calidad respecto a la idoneidad de los profesionales de las instituciones de niñez y adolescencia –entendiendo imprescindible la presencia de profesionales idóneos, capaces de planificar, formular, ejecutar y realizar seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones tendientes al desarrollo individual y a la integración social de cada sujeto, promoviendo la convivencia favorable, así como también asistiendo ante la detección de oportunidades y necesidades, y la cogestión de las relaciones interpersonales e interinstitucionales; profesionales con capacidad de escucha, contención, empatía, comprensión, y demás aptitudes que deben poseer los trabajadores en un espacio de alojamiento para niñas, niños y adolescentes–; consideramos que en gran medida son los trabajadores sociales quienes, a través de su formación, la presencia de componentes ético-políticos en su ejercicio profesional, las bases teórico-metodológicas con las que cuentan, quienes se hallan en condiciones de pensarse –junto a otros profesionales– como idóneos para desempeñarse en estos espacios. Entendemos que son capaces –los trabajadores sociales– de realizar una lectura de la realidad en la que niñas, niños y adolescentes se encuentran, descifrando sus intereses y necesidades, fundamentando y guiando las intervenciones en la constante defensa por los Derechos Humanos.

A nuestro entender, en lo que respecta a la situación de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados, existen determinadas situaciones que exceden las posibilidades de acción de los profesionales de la institución debido a que se trata de aspectos que corresponden a decisiones de otras áreas u organismos (ya sea de aplicación directa de la Ley como por ejemplo los equipos de profesionales que ejecutan las medidas como así también aquellas áreas de las cuales dependen las políticas y decisiones de nivel macro), no obstante ello, consideramos que igualmente existen posibilidades que permiten otorgar a las intervenciones sentidos que se encuentren en consonancia con el respeto, la garantía y la promoción del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La escucha, el acompañamiento, la contención, la espera, la comprensión, las relaciones respetuosas de las libertades, las individualidades, las decisiones y fundamentalmente el respeto y fortalecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran separados de sus familias de origen e institucionalizados de manera transitoria (donde muchas veces esa transitoriedad se vuelve permanente), son parte de las acciones que permiten a los profesionales del Trabajo Social llevar a cabo intervenciones que se constituyan como constructoras de

ciudadanía a través del trabajo constante junto a los sujetos, en pos del desarrollo y fortalecimiento de su autonomía, de su empoderamiento, permitiendo que la lucha por los Derechos Humanos sea lo que guíe día a día el accionar profesional.

Asimismo, es también por fuera de los ámbitos exclusivos de las instituciones de alojamiento transitorio donde los trabajadores sociales cuentan con la posibilidad de llevar a cabo acciones que tengan como norte la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Profesionales que intervienen desde distintas áreas, trabajadores sociales que apuestan a la formación y especialización en el campo de la niñez y la adolescencia, aquellos dedicados principalmente a la investigación, profesionales que se desempeñan en el diseño, implementación y evaluación de políticas, trabajadores sociales que ejercen la docencia, entre tantos otros, son quienes día a día pueden desde cada una de esas diversas áreas generar aportes en lo que respecta a la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Capítulo 7: La caja de herramientas

La lectura y el recorrido bibliográfico y de diferentes fuentes documentales nos permitieron conocer aspectos fundamentales a tener en cuenta para el presente trabajo. Legislaciones provinciales y nacionales, diversos Tratados Internacionales de derechos así como también el poder recorrer el estado del arte en la temática fueron fuentes significativas para esta tesina, sin embargo, aquel acercamiento al conocimiento debía completarse con la perspectiva propia de quienes se constituyen como sujetos de estudio. Ahora bien, ¿cómo se accede a esa perspectiva? ¿Cómo comprender la cotidianidad de esos sujetos, sus sentires, sus miradas, palabras y silencios?

Para ello fue apropiado desarrollar la investigación desde una metodología etnográfica cualitativa, entendiendo que es a través de esta como se obtiene determinado acercamiento al conocimiento de los fenómenos sociales a partir de la perspectiva propia de sus miembros, permitiendo asimismo que aquel acercamiento no considere los hechos como hechos aislados sino que éstos puedan ser interpretados, es decir, atribuyéndole sentidos a las acciones, los gestos, las palabras. (Guber, 2006)

De este modo, ante el interés por conocer y comprender cómo es vivenciada por niñas, niños y adolescentes la cotidianidad encontrándose albergados en instituciones destinadas a su cuidado y protección debido a la interrupción de los cuidados parentales, así como también la necesidad de indagar respecto al cumplimiento en estas instituciones en lo que concierne a las legislaciones y tratados de derechos que rigen y brindan un marco a las intervenciones para con niñas, niños y adolescentes, es que se propone el desarrollo de un trabajo de campo que permita la obtención de información a través diferentes procedimientos.

De acuerdo a Guber (2005), cuando hablamos de trabajo de campo hacemos referencia a la presencia directa de quien investiga en el lugar donde se encuentran quienes se constituyen como los actores principales de aquello que se desea analizar; forma parte esencial de dicho trabajo la presencia del investigador en la “porción de lo real que se desea conocer, el mundo natural y social en el cual se desenvuelven los grupos humanos que lo construyen. Se compone, en principio, de todo aquello con lo que se relaciona el investigador, pues el campo es una cierta conjunción entre un ámbito

físico, actores y actividades. Es un recorte de lo real (...) construido activamente en la relación entre el investigador y los informantes” (Guber, 2005: 47). Lo real, sostiene la autora “se compone de fenómenos observables y de la significación que los actores le asignan a su entorno y a la trama de acciones que los involucra; en él se integran prácticas y nociones, conductas y representaciones. El investigador accede, pues, a dos dominios diferenciales, aunque indisolublemente unidos: uno es el de las acciones y las prácticas; otro, el de las nociones y representaciones” (Guber, 2005: 47).

En este sentido dicha inserción por parte de quien pretendía investigar, conocer y analizar fue realizada en una primera instancia por fuera de la institución donde niñas, niños y adolescentes son alojados. Los primeros encuentros se mantuvieron en un espacio de recreación –colonia de verano– destinado a adolescentes de los barrios del sector norte de la ciudad, entre los cuales se incluía a los y las adolescentes alojados en el hogar. Esta primera instancia permitió un acercamiento semanal (con adolescentes en general y con aquellos residentes en la institución en particular) a partir del cual conocernos unos a otros, intercambiar conversaciones, juegos y demás actividades. Posteriormente a ello, una vez finalizado aquel espacio recreativo de verano, fue la presencia también durante determinados días en la semana al interior de la institución lo que permitió darle continuidad a aquel vínculo iniciado, manteniéndose contacto no solo con los y las adolescentes sino también con el resto de las niñas y los niños alojados en el hogar durante el período en el que se desarrolló el trabajo de campo.

En cuanto al objetivo de la presencia de una persona externa a la institución, este era desconocido por niñas, niños y adolescentes, la misma era asociada generalmente a la figura de acompañante personalizado o simplemente como una persona que se acercaba a compartir momentos con ellos. Durante las primeras observaciones participantes dentro de la institución en muchas ocasiones han interrogado buscando saber si ello se debía a un acompañamiento personalizado; cabe mencionar que algunos de ellos –no todos– disponían de la participación de un acompañante (dispuesto por los equipos profesionales de referencia), por lo cual se pudo inferir que quienes no contaban con una persona que se desempeñe como tal, muchas veces solicitaban que me constituyera como “su” acompañante.³¹

³¹ Fue considerado apropiado transmitir en aquellas ocasiones que mi presencia sería para todos por igual, compartiendo tiempo, juegos y actividades varias con ellos y ellas si así lo deseaban.

Ahora bien, ¿para qué “estar”? Aquello que a simple vista era compartir juegos, meriendas, charlas en la plaza, momentos de estudio, entre otras actividades realizadas, permitieron día a día ese acercamiento. Observar y participar, de eso se trata. Esta observación participante forma parte de una de las “técnicas” que sirven para la obtención de datos en una investigación. Como sostiene Guber (2005) se trata de dos actividades que se desarrollan de manera conjunta y simultánea: observar lo que acontece en torno de quien investiga y tomar parte en aquellas actividades que son realizadas; “la observación participante permite recordar, en todo momento, que se participa para observar y se observa para participar, esto es, que involucramiento e investigación no son opuestos sino partes de un mismo proceso de conocimiento social.” (Guber, 2006: 62)

Esas niñas, niños y adolescentes que indagaban respecto a la presencia de una persona ajena en aquel lugar donde se desarrollaba parte de su cotidianidad son quienes se constituyeron como el referente empírico de este trabajo, como los sujetos informantes, sujetos de estudio. Asimismo también el resto de los actores – profesionales, personal, acompañantes personalizados– se han constituidos como sujetos informantes ya que el contacto y acercamiento a ellos, si bien fue menor, permitieron conocer aspectos importantes en relación a la cotidianidad de las niñas, niños y adolescentes residentes en la institución.

Interesa centrarnos en este momento en la entrevista realizada a la profesional de trabajo social que se desempeña laboralmente en la institución quien se constituyó también como un sujeto informante. La entrevista, en tanto técnica de investigación durante el trabajo de campo es una estrategia utilizada para “hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree (...), una situación en la cual una persona (el investigador-entrevistador) obtiene información sobre algo interrogando a otra persona (entrevistado, respondente, informante)” (Guber: 2006: 75). Cabe aclarar que se trató de una entrevista abierta para la cual se tuvieron en cuenta determinados ejes pero que, al brindar un amplio margen para que la profesional entrevistada pudiera explayarse, permitió la asociación libre del informante, introduciendo temáticas así como también aquello que resulta prioritario para la persona entrevistada, dando surgimiento así a interrogantes que no estaban pensados en un inicio.

7.1. Aprendizajes

Es preciso hacer mención en esta instancia acerca de determinadas cuestiones vinculadas al trabajo de campo realizado y los aprendizajes a los que ha sido posible arribar.

Por un lado, cabe indicar que durante los meses en los que el mismo transcurrió se pudo observar predisposición por parte de todos los actores institucionales, las niñas, niños y adolescentes, así como también por parte de aquellas personas que se desempeñaban como acompañantes personalizados, con quienes en determinadas ocasiones se compartió momentos en el hogar. Asimismo, fue fundamentalmente con las niñas, niños y adolescentes alojados en la institución con quienes se compartió la mayor cantidad de tiempo, y quienes sin inconvenientes han permitido y propiciado mi inclusión en su cotidianidad.

En lo que respecta a los profesionales, el buen trato y predisposición también se ha hecho evidente. En ocasión de realizar la entrevista a la trabajadora social de la institución se pudo advertir la voluntad para pautar un encuentro y realizar la misma. Fue a través de la realización de la entrevista que se logró acceder a determinados datos que no habían surgido durante las otras instancias del trabajo de campo y que tampoco se encontraban previstas al momento de tener en cuenta los ejes específicos sobre los cuales basar la entrevista. Es posible evidenciar cómo son instalados determinados aspectos durante la misma por parte de la profesional entrevistada.

En cuanto a las niñas, niños y adolescentes, no han sido realizadas entrevistas con ellas y ellos. Fue evidenciado desde un primer momento que en las diferentes actividades compartidas, en las conversaciones entre pares en las que incluían mi presencia, y en diferentes situaciones, muchos de los intereses o interrogantes que se encontraban presentes a lo largo del trabajo eran respondidos, sin la necesidad de plantear de manera explícita determinadas preguntas sino que muchas veces la información se obtenía de esa sola observación participante, del poder comprender sus gestos, sus silencios, o “simplemente” aquello que tenían para contar o preguntar, direccionando muchas veces ellos mismos los diálogos de acuerdo a sus intereses.

Ejemplo de ello puede mencionarse que, en ocasión de estar acompañando a una de las adolescentes en la realización de tareas escolares, donde la temática correspondía a los derechos humanos, bastó solo dialogar sobre ello en el marco de dicha actividad escolar para que comenzara a hablar nada más y nada menos que acerca del “derecho a la familia”, afirmando que “todos tenemos derecho a vivir con nuestra familia” (registro de campo), comentando luego algunos recuerdos de sus hermanos y su madre.

De este modo, queda de manifiesto la importancia que reviste el trabajo de campo, esa presencia constante, los aprendizajes a los que es posible arribar mediante el mismo, y fundamentalmente el sentido a la investigación que otorga el poder conocer, escuchar y respetar la voz de los sujetos.

Reflexiones finales

Al iniciar el recorrido para esta tesina, en la cual se partió de un diseño de investigación etnográfica, siendo el objetivo obtener conocimiento acerca de la manera en que es llevada a cabo en la actualidad la institucionalización de niñas, niños y adolescentes a partir de la instauración del paradigma de la Protección Integral, respecto a los modos en que ello se realizaba al encontrarse vigente el Patronato de Menores, es posible mencionar que hemos evidenciado avances importantes en la materia así como también todo aquello que consideramos que aún queda por construir en lo que concierne a la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las acciones emprendidas en pos del acercamiento al conocimiento que se propuso alcanzar, es decir, el transitar por cada una de las temáticas planteadas y constituyentes del presente trabajo, permitió conocer cuál fue la situación anterior en lo que a niñas, niños y adolescentes respecta así como también cómo se desarrolla en la actualidad, posibilitándonos de este modo cumplir con el objetivo propuesto en un principio.

El cambio más significativo en lo que respecta a la niñez y adolescencia tiene relación inmediata con los procesos legislativos de los que somos parte desde hace más de dos décadas, desde la aprobación de la CIDN, su posterior incorporación junto a otros Tratados Internacionales a la Constitución Nacional y las legislaciones Nacional y Provincial referidas a la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; pero sostenemos que ello realmente implica una transformación cuando sus postulados pueden plasmarse en prácticas concretas y reales, que permitan de manera efectiva dar cumplimiento a todos y cada uno de los derechos de los cuales niñas, niños y adolescentes deberían ser titulares.

El alojamiento en una institución transitoria –atento a que ante situaciones que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, es una de las alternativas para la reparación y restitución de derechos– se constituye para muchos no como la última alternativa sino como la única opción. Niñas, niños y adolescentes no siempre cuentan con la posibilidad de ser alojados en ámbitos familiares, motivo por el cual es

imprescindible recurrir a la institucionalización. Si bien se sostiene que esta debe ser llevada a cabo por el menor tiempo posible, en lo concreto ello no siempre sucede.

Existen determinadas circunstancias que generan que el lugar de alojamiento para una niña, niño o adolescente no sea un ámbito familiar sino que una institución se constituye como la única opción al momento de ser separado de su centro de vida a causa de situaciones de vulneración de sus derechos. La ausencia de familiares o de miembros de la comunidad con quienes existan vínculos o lazos afectivos que puedan responder a las necesidades de alojamiento, cuidado y protección, la inexistencia frecuente de familias solidarias que ofrezcan acogimiento transitorio a adolescentes o niñas y niños que superen una edad determinada, como así también las dificultades para que niñas, niños y adolescentes con discapacidades sean alojados en un contexto familiar, la necesidad de preservar la convivencia de grupos de hermanos, entre otros, son algunos de los factores que influyen y determinan que en ocasiones para algunas niñas, niños y adolescentes solo exista la posibilidad de una institución.

A nuestro parecer, tanto las instituciones que han sido parte del Patronato como así también las actuales, no se constituyen en el espacio adecuado para el alojamiento de niñas, niños y adolescentes, para su desarrollo integral y su bienestar; por el contrario, el alojamiento en ámbitos institucionales vulnera desde un principio el derecho fundamental a la convivencia familiar –y en ocasiones también el derecho a la convivencia comunitaria–.

En este sentido cabe recordar que fue posible conocer que gran parte de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban institucionalizados al momento de realización del trabajo de campo no eran oriundos de la localidad en la que se ubica el hogar como así tampoco de sitios cercanos, es decir, niñas, niños y adolescentes que residían en la institución no solo se encontraban distanciados geográficamente de sus grupos familiares sino también de la comunidad a la cual pertenecían, de las instituciones en las cuales seguramente se encontraban participando y de los profesionales intervinientes en las situaciones de cada uno de ellos. Respecto a ello, independientemente de las decisiones que los equipos profesionales intervinientes de las Direcciones Provinciales o Delegaciones Regionales tomen al momento de designar el lugar de alojamiento a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, consideramos que se ha puesto en evidencia que muchos de ellos se encontraban a

grandes distancias de sus referentes familiares, afectivos, comunitarios y profesionales, lo cual podemos traducir en una mayor dificultad, incluso vulneración, al no estar siendo respetado y/o promovido lo que concierne a la preservación de las niñas, niños y adolescentes en sus lugares de origen, junto a su comunidad, amistades y lazos afectivos, presentándose así dificultades para el sostenimiento de aquellos vínculos previos con los que hayan podido contar.

Las instituciones de alojamiento transitorio para niñas, niños y adolescentes deben erigirse en base a los preceptos tendientes a la restitución y reparación de derechos vulnerados, la promoción del bienestar físico y psíquico de quienes allí se encuentren residiendo y todos aquellos derechos que se entienden, deben ser respetados, promovidos y protegidos. Es fundamental por ello que las instituciones no solo cuenten con profesionales y trabajadores en general que se nombren adeptos al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes sino también que ello sea realmente llevado a cabo, que sus prácticas cotidianas lo demuestren, que los cuerpos y las subjetividades de niñas, niños y adolescentes den cuenta que efectivamente sus derechos se encuentran garantizados; que hablar de derechos no sea una utopía ni solo para “otros niños”. Es imprescindible que quienes se constituyan como responsables de que las instituciones recorran el camino que debe andarse para verdaderamente lograr un cambio respecto a las prácticas para con niñas, niños y adolescentes institucionalizados, es de completa importancia que se lleven adelante acciones que impliquen que aquello tan pronunciado se concrete.

Es necesario, además de la voluntad de los profesionales y del colectivo de trabajadores en su conjunto que se desempeñan dentro de las instituciones de alojamiento, la voluntad política para generar dichos cambios. La escucha, la contención, el acompañamiento, entre otras, no deberían ser acciones realizadas solo por algunos sino que debería tratarse de la línea a seguir por todos quienes se encuentren siendo parte de la cotidianidad de niñas, niños y adolescentes.

Se ha iniciado un recorrido en el cual se observan nuevas prácticas, nuevos modos de vincularse con quienes se encuentran transitoriamente (incluso a veces de manera permanente) en instituciones de alojamiento, diferentes cotidianidades han comenzado a evidenciarse dentro de estas, pero aun así es imperioso buscar mayores cambios. De igual modo nos permitimos aseverar que es de trascendental importancia

darle continuidad al fortalecimiento de este Sistema Provincial de Protección de Derechos ya que, incluso con el paso de los años desde su implementación, siguen siendo notorias algunas falencias que influyen y cargan consecuencias en la cotidianidad de niñas, niños y adolescentes de nuestra provincia.

Es imprescindible, asimismo, que los organismos del Estado brinden las herramientas, medios y recursos necesarios y oportunos para que aquellas familias que se encuentran atravesando una instancia de separación puedan trabajar en pos de revertir las situaciones que dieron origen a la aplicación de dicha medida. Respecto a las niñas, niños y adolescentes apartados de su medio familiar, debe asegurárseles que donde se encuentren alojados transitoriamente gocen efectivamente de sus derechos, les sean estos restituidos, respetados y reparados.

Finalizando, resulta esencial retomar un punto que hemos planteado con anterioridad y que nos resulta fundamental a la hora de pensar los derechos de niñas, niños y adolescentes: el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado. Muchas son las familias que no cuentan con una vivienda en condiciones dignas para habitar, donde la ausencia de servicios esenciales como la energía eléctrica o el agua potable son parte de la cotidianidad. Familias y comunidades en las cuales los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la recreación, entre tantos otros, se ven dificultados por las condiciones económicas que las atraviesan. Niñas, niños y adolescentes para los cuales el trabajo infantil –en las calles, en sus casas, con sus familias o solos– resulta más redituable que la asistencia a un establecimiento educativo; niñas, niños y adolescentes que día a día ven más lejos sus derechos.

Es mucho lo que resta por realizarse en materia de derechos y garantías, siendo fundamental el poder revertir las situaciones que atañen a los recursos como la vivienda digna y el acceso cotidiano a servicios básicos para el bienestar, y es el Estado –en cualquiera de sus niveles– quien debe responsabilizarse de ello. El pleno goce de los derechos para amplios sectores no está completamente garantizado. Indudablemente es ardua la tarea para lograr disminuir aquellos porcentajes referidos a las paupérrimas condiciones en las que viven cotidianamente niñas, niños y adolescentes y sus familias, pero revertir esta situación es sumamente necesario; y no solo necesario sino que es una responsabilidad que corresponde al Estado y por lo tanto debe ser cumplida ya que se trata, nada más y nada menos, de garantizar derechos humanos.

Si bien presenciamos a un avance en lo que respecta a la separación de niñas, niños y adolescentes, la cual no tiene su fundamento ya en las condiciones económicas en las que se encuentre el grupo familiar, es decir, ya no sería una causa asistencial la que motivaría la separación de un niño de su familia, sostenemos que ello –aunque de manera encubierta– sigue estando presente en muchas de las intervenciones llevadas a cabo. Cuando existen condiciones de existencia que nada se condicen con la salud, el bienestar, la integridad psicofísica; cuando existen condiciones económicas deficientes; mientras continúen las condiciones de desigualdad de género, entre otras manifestaciones sociales que dan cuenta de la inequidad y deficiente goce de los derechos humanos, no podremos hablar de derechos de la niñez y adolescencia para el conjunto de niñas, niños y adolescentes por igual. Disfrutar de condiciones de vida dignas y humanas no debería ser un privilegio para algunos; se trata de derechos de cada uno de quienes nos constituimos como seres humanos, y por tal es imprescindible que sean garantizados, porque no hay nada más violento que la violación de los derechos humanos.

Es imperioso que desde un primer momento todos y cada uno de quienes forman parte del entramado de aplicación de la Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como también los órganos de aplicación de la Ley Nacional, logren comprender que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, donde todos deberían gozar y disfrutar de ellos por igual y que es el Estado responsable de velar por el cumplimiento efectivo de los mismos.

Es el Estado quien presenta la obligación y responsabilidad de bregar para evitar o disminuir la incidencia de situaciones que impliquen que una niña, un niño o adolescente deba ser separado de su centro de vida. Es por ello que consideramos necesaria la implementación de políticas que apunten al fortalecimiento de las familias y la comunidad, la participación permanente de estas en aquellos ámbitos que promuevan su bienestar, las mejoras en las condiciones de existencia, la propulsión de espacios de contención para la comunidad en general, etc., lo cual implica la generación de políticas vinculadas al fomento y mejora de las condiciones laborales, la posibilidad de acceso al mercado laboral para los sectores que históricamente se han encontrado excluidos, políticas que abarquen la inclusión respecto a vivienda, educación, salud, acceso a condiciones de vida digna, educación sexual integral, políticas que apunten a la efectiva

erradicación del trabajo infantil, a la trata de personas, entre otras acciones que se direccionen al cumplimiento y goce de derechos.

Es necesaria la puesta en escena de políticas, actores, acciones y cuanto recurso sea necesario a los fines de generar y propiciar posibilidades reales de cambio que efectivamente signifiquen para las familias y para niñas, niños y adolescentes un avance en lo que respecta a sus condiciones de existencia y al cumplimiento efectivo de sus derechos.

Las situaciones de exclusión que atraviesan cotidianamente a muchas familias así como también niñas, niños y adolescentes son fruto de la desigual distribución de la riqueza que forma parte del escenario de la sociedad capitalista actual, por este motivo consideramos imperioso que nuestras prácticas apunten siempre hacia la defensa constante por los Derechos Humanos.

Anexos

Anexo I

Ley Provincial n° 12.967, de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- ADHESIÓN. OBJETO. La provincia de Santa Fe adhiere a la ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La presente ley tiene por objeto la promoción y protección integral de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la Provincia. Los derechos y garantías que enumera la presente deben entenderse como complementarios e interdependientes de los derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento jurídico provincial, nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

ARTÍCULO 2°.- SUJETOS COMPRENDIDOS. A los efectos de esta ley quedan comprendidas todas las personas hasta los dieciocho (18) años de edad. Sus derechos y garantías son de orden público, irrenunciables e interdependientes.

ARTÍCULO 3°.- APLICACIÓN OBLIGATORIA. En las medidas concernientes a las niñas, niños y adolescentes que promueven las instituciones públicas o privadas, los órganos judiciales, administrativos o legislativos, debe primar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Los organismos administrativos provinciales, municipales y locales deben revisar la normativa que regula, afecta el acceso o el ejercicio de derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes, adecuándola a los postulados contenidos en esta ley.

ARTÍCULO 4°.- INTERÉS SUPERIOR. Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos y los que en el futuro pudieren reconocérsele. La determinación del interés superior debe respetar: a) Su condición de sujeto de derecho. b) Su derecho a ser oído cualquiera sea la forma en que se manifieste y a que su opinión sea tenida en cuenta. c) El respeto al pleno desarrollo de sus derechos en su medio familiar, social y cultural. d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. e) El equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y las exigencias del bien común. f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar asimilable a su residencia habitual donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecen los primeros.

ARTÍCULO 5°.- POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES. OBJETIVOS. Son aquellas conformadas por el conjunto de lineamientos y formulaciones explícitas que, emanadas del Gobierno de la Provincia, incluyan propósitos, finalidades, estrategias y recursos para la concreción de los derechos que esta ley consagra. Para ello, se deberán implementar políticas universales y específicas que garanticen las condiciones básicas para el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la Provincia. Estas políticas son desarrolladas por el Poder Ejecutivo en su conjunto. En la formulación y seguimiento de estas políticas públicas integrales, se promoverá la participación de la sociedad civil. A los fines de la presente ley, la política pública provincial tiene como principal objetivo el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en su medio familiar, social y cultural. La política pública en materia de niñez se elabora conforme

las siguientes pautas: a) La promoción y protección de los derechos reconocidos y el respeto a la condición de sujeto de derechos de sus destinatarios. b) La inclusión de la dimensión de género en la planificación de las políticas públicas de modo que las mismas garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. c) El fortalecimiento del rol del grupo familiar en el cumplimiento de los derechos reconocidos. d) La promoción de una transformación en los roles familiares socialmente asignados que refuerce la autonomía de las mujeres y una mayor participación de los varones en las responsabilidades familiares. e) La coordinación con las políticas implementadas en el ámbito nacional, municipal y comunal. f) La articulación transversal de las acciones públicas en la elaboración, ejecución y evaluación de planes y programas. g) La descentralización de planes y programas y de los organismos de aplicación y ejecución. h) La participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y control de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas. i) La promoción de la participación activa de las niñas, niños y adolescentes en los ámbitos en que se efectivicen las políticas públicas.

ARTÍCULO 6°.- RESPONSABILIDAD ESTATAL. El Estado provincial promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, entorpezcan el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes y su efectiva participación en la comunidad. Los organismos del Estado provincial tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas especialmente en relación a la asignación de recursos hasta el máximo de los que se disponga y los que se obtengan mediante la cooperación y la asistencia internacionales.

TÍTULO II PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS

ARTÍCULO 7°.- PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. Las disposiciones de esta ley se aplican por igual a todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, género, orientación sexual, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, capacidades especiales, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus representantes legales.

ARTÍCULO 8°.- PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD. Los Organismos del Estado deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en esta ley y en todo el ordenamiento jurídico nacional, provincial, municipal y comunal.

ARTÍCULO 9°.- DERECHO A LA VIDA. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

ARTÍCULO 10.- DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, trabajo infantil, torturas, abusos o negligencias, prostitución, explotación sexual, secuestros, condición cruel, inhumana o degradante o al tráfico de personas para cualquier fin.

ARTÍCULO 11.- DERECHO A LA IDENTIDAD. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quienes son su padre y su madre, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a

su cultura, a su orientación sexual y a preservar su identidad e idiosincrasia. El Estado Provincial debe colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información del padre, la madre u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a su padre y madre biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con su padre y con su madre, aun cuando estos estuvieran separados o divorciados, o privados de libertad, salvo que dicho vínculo amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley.

ARTÍCULO 12.- DERECHO A LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y desarrollarse dentro de su grupo familiar de origen y con sus vínculos afectivos y comunitarios. Sólo excepcionalmente, y para los casos en que ello sea imposible, tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo, de conformidad con la ley. Se entiende por grupos familiares alternativos, la familia en todas sus modalidades, la adopción, las familias de la comunidad donde la niña, niño y adolescente reside habitualmente u otras familias. En toda situación de institucionalización del padre o la madre, los Organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquellos, siempre que no contraríe el interés superior del niño.

ARTÍCULO 13.- DERECHO A LA SALUD. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud. Los Organismos del Estado deben garantizar el acceso universal e igualitario a los servicios de salud. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser informados y educados en salud sexual y reproductiva de acuerdo a su desarrollo, teniendo como base la igualdad del hombre y la mujer.

ARTÍCULO 14.- DERECHO A LA EDUCACIÓN. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública, gratuita y laica que, basada en la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, atienda a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales, fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, identidad cultural y conservación del ambiente. En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los debe inscribir provisoriamente, debiendo los Organismos del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente de este documento. Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo entregar la certificación o diploma correspondiente.

ARTÍCULO 15.- El Estado Provincial debe asegurar respecto del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes que vivan en su territorio en todos los niveles de escolaridad obligatoria: a) El acceso y permanencia en la escuela pública gratuita y laica cercana al lugar de su residencia habitual. b) La igualdad de condiciones en el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo. c) El derecho a ser respetado por los integrantes de la comunidad educativa. d) El derecho a conocer e informarse de los procedimientos y participar en la construcción de las normativas de convivencia. e) El derecho a ser escuchado previamente a decidirse cualquier medida o sanción, las que únicamente deberán tomarse mediante procedimientos y normativas claras y justas y establecidas con anterioridad a la conducta reprochable. f) El derecho a ser

evaluado por su desempeño y logros conforme a normas acordadas previamente y a conocer u objetar criterios de evaluación pudiendo recurrir a instancias escolares superiores. g) El derecho a recurrir a instancias educativas superiores o extraeducativas en caso de medidas que se dispongan relacionadas con sanciones disciplinarias. h) El derecho de organización y de participación en entidades estudiantiles. i) El conocimiento de sus derechos y de los mecanismos para su ejercicio y defensa. j) La prohibición de imponer por causa de embarazo, maternidad o paternidad, medidas correctivas o sanciones disciplinarias, desarrollando un sistema conducente a asegurar la continuidad y finalización de las diferentes etapas escolares. Asegurar a la madre y al padre adolescente que se encuentren cursando estudios los adecuados permisos por lactancia o atención del hijo o hija enfermo o enferma, discapacitado o discapacitada, sin que ello afecte la regularidad del cursado. k) Que en el proceso educativo se respeten los valores culturales, étnicos, artísticos e históricos de la comunidad en que se desarrolla la niña, el niño o el adolescente. l) La adopción de lineamientos curriculares acordes a sus necesidades culturales que faciliten la integración social y fomenten el respeto por la diversidad. m) Que en las reglamentaciones, programas, materiales de estudio y actividades escolares se garantice la igualdad de trato entre varones y mujeres.

ARTÍCULO 16.- EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES DIFERENTES. Las niñas, niños y adolescentes con necesidades diferentes gozan de todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su singularidad. El Estado debe garantizar el proceso de integración al sistema educativo en todos los niveles de escolaridad obligatoria, a través de programas acordes para cada nivel contemplando el tipo y grado de necesidad. Garantizando además en razón de las singularidades del niño, niña o adolescente modalidades, regímenes, planes y programas de educación específicos.

ARTÍCULO 17.- DERECHO A LA LIBERTAD. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad. Este derecho comprende: a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades. b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en el grupo familiar, la comunidad y la escuela. c) Su libertad personal, sin más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente. d) En los casos de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal su ubicación en establecimientos cerrados debe llevarse a cabo de conformidad con la ley y los tratados internacionales específicos en la materia y se utilizará sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda. Los establecimientos cerrados referidos en el párrafo precedente deben ser destinados exclusivamente a niñas, niños y adolescentes y distintos a los correspondientes a mayores de edad. Toda niña, niño o adolescente privado de libertad debe ser tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, toda niña, niño o adolescente privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo circunstancias excepcionales.

ARTÍCULO 18.- DERECHO AL DESCANSO, RECREACIÓN, DEPORTE Y JUEGO. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, recreación, deporte y juego. El ejercicio de estos derechos debe estar dirigido a garantizarles el descanso integral. Los Organismos del Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, juegos recreativos -en especial

aquellos que tengan carácter cooperativo- y deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquellos con necesidades diferentes.

ARTÍCULO 19.- DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Cuando la exposición, difusión o divulgación de los datos a que hace referencia el párrafo anterior resulte manifiestamente contraria al interés superior del niño, no podrán desarrollarse aunque medie el consentimiento de los sujetos de esta ley o de sus representantes legales.

ARTÍCULO 20.- DERECHO DE LIBRE ASOCIACIÓN, REUNIÓN y TRÁNSITO. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole de conformidad a la legislación vigente. En ejercicio de este derecho podrán: a) Propiciar su participación en asociaciones. b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños, adolescentes o ambos. Tienen derecho a usar, transitar y permanecer en los espacios públicos a reunirse en forma privada o públicamente de conformidad con la ley sin necesidad de permiso previo de las autoridades públicas y sin que ninguna de ellas puedan obstaculizarlos en el ejercicio.

ARTÍCULO 21.- DERECHO A OPINAR Y A SER OIDO. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho en todos los ámbitos en que se desenvuelven: a) A participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés. b) A recibir la información necesaria y oportuna para formar su opinión. c) A que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.

ARTÍCULO 22.- DERECHO AL TRABAJO DE LOS ADOLESCENTES. Los organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que impone la legislación vigente y los convenios internacionales en la materia, debiendo ejercer la inspección del trabajo a fin de evitar la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes a través de medidas concretas y procesos administrativos rápidos, ágiles y expeditos, tendientes a hacer cesar de inmediato el trabajo prohibido. Este derecho debe limitarse cuando la actividad laboral importe riesgo o peligro para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes. El Estado, la sociedad y las organizaciones sindicales coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten el proceso evolutivo de niña, niño o adolescente.

ARTÍCULO 23.- DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la protección contra toda explotación económica. Se prohíbe el desempeño de niñas, niños y adolescentes en cualquier actividad laboral que pueda ser peligrosa, nociva para su salud o para su desarrollo integral y el desempeño de cualquier actividad laboral con anterioridad a la edad mínima establecida por ley. El Estado debe adoptar las medidas conducentes a prevenir, sancionar y erradicar el trabajo infantil, garantizando que las niñas, niños y adolescentes cumplan con los años establecidos

para la escolaridad obligatoria. Debe implementar programas de asistencia y apoyo al grupo familiar de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en las situaciones descriptas en el párrafo precedente. Dentro de estas actividades quedan comprendidas las de asumir responsabilidades en tareas domésticas o el cuidado de personas mayores o de niños pequeños que alteren, entorpezcan, modifiquen o impidan su desarrollo, escolaridad o descanso.

ARTÍCULO 24.- DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social. El Estado Provincial debe establecer en coordinación con el Estado Nacional, políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento.

ARTÍCULO 25.- GARANTÍAS MÍNIMAS DE PROCEDIMIENTO. GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS. Los organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes, en cualquier procedimiento judicial o administrativo en que sean parte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: a) Ser considerado inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. b) Ser oído por la autoridad competente cada vez que así lo solicite. c) Al pleno y formal conocimiento en forma adecuada al nivel cultural y madurez del niño, niña o adolescente del acto que se le atribuye y de las garantías procesales que le corresponden. d) Participar activamente en todo el procedimiento. e) Ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia, en forma privada y confidencial desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. En caso de carecer de medios económicos, el Estado debe designarle un letrado de la lista de abogados de oficio. f) A solicitar la presencia de los padres, representantes legales o personas encargadas. g) En los casos de privación de libertad a que sus padres, representante legal, persona encargada o con la que el niño, niña o adolescente sostenga vínculos afectivos, sean informados de inmediato del lugar donde se encuentra y organismo de prevención interviniente. Asimismo, tienen derecho a comunicarse privadamente en un plazo no mayor a una hora con sus padres, representante legal, persona encargada o con la que sostenga vínculos afectivos. h) A recurrir ante el Superior cualquier decisión que lo afecte.

ARTÍCULO 26.- GARANTÍA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. Los Organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en las leyes nacionales N° 24.540, N° 26.061, en la ley provincial N° 11.132 modificatorias y decretos reglamentarios. a) Si al momento de efectuarse los controles prenatales o de ingreso al centro de salud se detectare que la madre o el padre del niño por nacer carecen de documentos de identidad, el agente que tome conocimiento debe informar a los organismos competentes a fin de garantizar el acceso a la tramitación y expedición de la documentación requerida de acuerdo a la normativa vigente. b) Si la indocumentación de la madre o el padre continuara al momento del parto, debe consignarse nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, edad, huellas dactilares y nacionalidad de los mismos, en el certificado de Constatación de Parto que expida la unidad sanitaria pertinente. c) A los fines de esta garantía, el Estado Provincial debe

habilitar oficinas del Registro Civil en todos los establecimientos públicos que atienden nacimientos.

ARTÍCULO 27.- DEBER DE COMUNICAR. Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público de cualquiera de los tres poderes que tuviere conocimiento de la amenaza o vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes en razón del desempeño de su cargo, debe comunicar dicha circunstancia a la autoridad administrativa o judicial de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión. El procedimiento de comunicación deberá ser tal que garantice la integridad física del denunciante y su grupo familiar. Toda persona que tenga conocimiento de la vulneración de derechos que afecten la vida o la integridad física y psíquica de una niña, niño o adolescente tiene el deber de comunicarlo a la autoridad administrativa o judicial de protección de derechos en el ámbito local o a otra autoridad competente.

ARTÍCULO 28.- DEBER DEL FUNCIONARIO DE RECEPCIONAR DENUNCIAS. El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de amenaza o vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar la denuncia, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los Deberes del Funcionario Público. En caso de que la denuncia fuese formulada por la niña, niño o adolescente la ausencia de sus padres o representantes legales nunca podrá obstaculizar la recepción de la misma.

TÍTULO III SISTEMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ARTÍCULO 29.- CONFORMACIÓN. El Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por los organismos públicos que integran el presente Título y las organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia. El Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de Derechos se organiza en niveles local, regional y provincial de conformidad con su ámbito de actuación territorial. La distribución de competencias no puede ser obstáculo para la asistencia inmediata en situaciones de riesgo para la vida o la integridad personal de la niña, niño o adolescente y la tramitación ante la Autoridad que corresponda.

CAPÍTULO I DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 30.- AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ÁMBITO LOCAL. Las Autoridades Administrativas de Promoción y Protección de Derechos del Ámbito Local son las áreas responsables de desarrollar planes y programas de promoción y protección de derechos de la Niñez, en el ámbito territorial de los Municipios y Comunas de la Provincia. Se propenderá a que en cada municipio o comuna la Autoridad de Aplicación establezca órganos descentralizados denominados Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos los cuales pueden depender de la provincia o de gestiones conjuntas a partir de la celebración de convenios con municipalidades o comunas. Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos son unidades técnico operativas con una o más sedes, desempeñando las funciones de facilitar que las niñas, niños y adolescentes que tengan amenazados o violados sus derechos, puedan acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad. Corresponde a este nivel intervenir en las situaciones de urgencia

y en todas las situaciones de amenaza o vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes, así como desarrollar programas y actividades de promoción de derechos. Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos deben contar con equipos profesionales interdisciplinarios, los que se encargan de adoptar y aplicar las medidas de protección integral con la asistencia técnico - financiera de la Nación de acuerdo a lo establecido por la Ley 26.061 y la asistencia técnico-financiera y supervisión de la Provincia. Asimismo, estos equipos pueden aplicar medidas de protección excepcionales adoptadas por las Delegaciones Regionales o por la Autoridad de Aplicación provincial conforme a lo establecido en el Título IV de la presente, en coordinación con las Delegaciones Regionales. En este primer nivel de intervención actuarán los Centros de Acción Familiar constituidos como Centros de promoción y protección de derechos, o los organismos que los reemplacen dependientes de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, los que actuarán en articulación con los efectores de salud y educación.

ARTÍCULO 31.- AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ÁMBITO REGIONAL - DELEGACIONES REGIONALES. Las Delegaciones Regionales brindan asistencia técnico - jurídica a los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos para la intervención concreta y para el diseño de programas. Intervienen, mediante la adopción y aplicación de medidas de protección integral y medidas de protección excepcional. Actúan en coordinación con los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, en la aplicación de medidas excepcionales. Para garantizar los objetivos enunciados en esta ley en cada Delegación Regional, la Subsecretaría debe garantizar programas e instituciones con la modalidad de puertas abiertas como centros de día, centros de atención inmediata, paradores nocturnos, albergues temporarios u otros con especificidad para el abordaje de situaciones de calle, de abandono real o simbólico, consumo de sustancias, maltrato, violencia familiar, abuso sexual, crisis subjetivas graves y situaciones de riesgo penal, entre otras. Los programas e instituciones con la modalidad de puertas abiertas a ejecutar pueden ser gestionados por la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia o Direcciones Provinciales de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia o sus Delegaciones o en convenio con Municipios y Comunas u organizaciones de la sociedad civil. En cada nivel del sistema la autoridad administrativa es responsable de coordinar con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la niñez, las acciones y los programas con el fin de potenciar los recursos existentes.

ARTÍCULO 32.- AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ÁMBITO PROVINCIAL- SUBSECRETARÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. La SUBSECRETARÍA de los DERECHOS de la NIÑEZ, ADOLESCENCIA y FAMILIA, o el organismo que en el futuro la reemplace, es la autoridad de aplicación del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Está a cargo de un Subsecretario designado por el Poder Ejecutivo de la Provincia. Tiene a su cargo el diseño, instrumentación, ejecución y control de políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

ARTÍCULO 33.- FUNCIONES. Son funciones de la Subsecretaría: a) Coordinar el sistema Provincial en los ámbitos local, regional y provincial. b) Diseñar las políticas públicas integrales destinadas a las niñas, niños, adolescentes y sus grupos familiares. c) Elaborar, con la participación del Consejo Provincial, un Plan Provincial de Promoción y Protección de Derechos, donde se fijen los lineamientos de acuerdo a los principios establecidos en la presente ley, las acciones prioritarias a desarrollar, las áreas gubernamentales responsables, los plazos

previstos y los recursos necesarios. En la elaboración de este Plan deben participar y colaborar los organismos que sean requeridos y es refrendado por el Poder Ejecutivo Provincial. d) Ejecutar descentralizadamente políticas de promoción y protección de derechos para lo cual deben contar con una estructura que posibilite dar respuesta a las distintas regiones, departamentos y localidades agrupándolas de acuerdo a las características de cada una de ellas. e) Promover la creación de Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con Municipios y Comunas. f) Brindar a las niñas, niños, adolescentes y sus grupos familiares, servicios especializados en la atención de situaciones de calle, maltrato, abuso, explotación, prostitución, consumo de sustancias, situación de riesgo penal y cualquier otra que implique vulneración de sus derechos. g) Ejercer la representación del Estado Provincial en las áreas de su competencia. h) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y familia. i) Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deben cumplir las instituciones públicas o privadas de promoción, asistencia y protección de derechos de los sujetos de esta ley. j) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes y la prevención de su institucionalización. k) Promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y sus grupos familiares. l) Interactuar con todos los poderes del Estado a fin de lograr la implementación transversal de las políticas de promoción y protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. m) Coordinar acciones consensuadas y realizar convenios con los poderes del Estado, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación activa de las niñas, niños y adolescentes. n) Brindar asistencia técnica y capacitación a organismos de la Provincia, Municipios, Comunas y Organizaciones de la Sociedad Civil que participen en Programas o en servicios de atención directa a los sujetos que esta ley protege. o) Gestionar la obtención y transferencia de los fondos que desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia corresponda remitir para la efectivización de las políticas públicas destinadas a las niñas, niños y adolescentes. p) Organizar un sistema de información único, descentralizado, discriminado por sexo y edad, y que incluya indicadores para el monitoreo, evaluación y control de las políticas y programas de Niñez, Adolescencia y Familia. q) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos. r) Asignar los recursos públicos para la formulación y ejecución de las políticas previstas en el Plan Provincial de Acción. s) Establecer en coordinación con el Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

ARTÍCULO 34.- COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

Créase la Comisión Interministerial de la Niñez y Adolescencia en el ámbito de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia integrada por: a) un Secretario o Subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. b) un Secretario o un Subsecretario del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. c) un Secretario o un Subsecretario del Ministerio de Salud. d) un Secretario o un Subsecretario del Ministerio de Educación. e) un Secretario o un Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. f) un Secretario o un Subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. g) un Secretario o un Subsecretario del Ministerio de Seguridad. h) un Secretario o un Subsecretario del Ministerio de Innovación y Cultura. i) un Secretario o un Subsecretario del Ministerio de la Producción. j) un Secretario o un Subsecretario del Ministerio de Economía.

ARTÍCULO 35.- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. La Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia es un Organismo descentralizado de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia con sede en las ciudades de Santa Fe y Rosario. La Dirección ejerce funciones de coordinación directa de las delegaciones regionales de la zona y asistencia técnica jurídica.

ARTÍCULO 36.- CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. Créase el Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes con carácter consultivo y de asesoramiento en materia de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Este Consejo es presidido por un Subsecretario de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia y está conformado por representantes de los Ministerios y reparticiones del Ejecutivo Provincial vinculados a la temática y representantes de ambas Cámaras Legislativas. Asimismo, la Autoridad de Aplicación debe convocar para su integración a representantes del poder judicial, representantes de Municipios y Comunas, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, a representantes de Organizaciones infantiles y juveniles, Universidades, y Colegios Profesionales con sede en el territorio de la Provincia, así como de otros ámbitos académicos y comunicadores sociales. Este Consejo se reúne al menos trimestralmente y fija en su primera reunión un reglamento interno de funcionamiento. Los miembros de este Consejo serán ad-honorem.

ARTÍCULO 37.- FUNCIONES. Son funciones del Consejo Provincial, entre otras: a) Participar en la elaboración en coordinación con la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Plan Provincial Anual de Promoción y Protección de Derechos, para fijar los lineamientos de acuerdo a los principios establecidos en la presente ley, las acciones prioritarias a desarrollar, las áreas gubernamentales responsables, los plazos previstos y los recursos necesarios. b) Proponer e impulsar las reformas legislativas o de procedimientos destinadas a dar cumplimiento a los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y en la ley nacional N° 26.061. c) Participar en campañas públicas que incrementen entre la población el conocimiento de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. d) Recibir y solicitar información acerca de la distribución de recursos, el funcionamiento de servicios y programas, y toda otra acción desarrollada por el Estado destinada a los sujetos de esta ley. e) Recibir anualmente el informe del Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes y solicitar la información que se encuentre en el ámbito de su Defensoría.

ARTÍCULO 38.- DEFENSORIA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. Créase en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, la figura del Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes quien tiene a su cargo, velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, las leyes nacionales y provinciales y el resto del ordenamiento jurídico. Debe asumir la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito de la Provincia.

ARTÍCULO 39.- ADECUACIÓN. Modifícase el artículo 16 de la ley 10.396, el que quedará redactado del siguiente modo: La Defensoría del Pueblo cuenta con un funcionario denominado Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, quien depende en forma directa del Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo cuenta además con dos funcionarios denominados Defensores

del Pueblo Adjuntos, actuando uno en la ciudad de Santa Fe y otro en la ciudad de Rosario. El titular de la Defensoría del Pueblo o el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes pueden delegar en ellos sus funciones y éstos los sustituyen en los supuestos de imposibilidad temporal o definitiva y en los casos de recusación y excusación.

ARTÍCULO 40.- DESIGNACION. El Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes es propuesto, designado o removido del mismo modo que el Defensor del Pueblo de la Provincia. El Defensor debe ser elegido dentro de los noventa (90) días de sancionada esta ley y asumirá sus funciones ante la Asamblea Legislativa. Dura cinco (5) años en el cargo pudiendo ser reelegido por una sola vez. El Defensor debe reunir los mismos requisitos exigidos al Defensor del Pueblo de la Provincia, debiendo acreditar además idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y sus familias. Percibe la retribución que establezca la Legislatura Provincial por resolución de ambas Cámaras.

ARTÍCULO 41.- FUNCIONES. Son funciones de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes: a) Las previstas para el Defensor del Pueblo cuando la queja presentada signifique una vulneración de derechos de los sujetos de esta ley. b) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías asegurados a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas que estime más adecuadas para cada situación. c) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las niñas, niños o adolescentes, debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos de las niñas, niños y adolescentes. d) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a sus grupos familiares, informando acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios adonde puedan recurrir para la solución de su problemática. e) Recibir todo tipo de reclamo o denuncia formulado por las niñas, niños y adolescentes en forma personal o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente, debiéndose dar curso inmediato al requerimiento de que se trate, canalizándolo a través del organismo competente.

ARTÍCULO 42.- GRATUIDAD. El Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes determina fundadamente la procedencia o no de su intervención. Las presentaciones serán gratuitas quedando prohibida la participación de gestores e intermediarios.

ARTÍCULO 43.- CESE.- Cesa en sus funciones por las mismas causales que el Defensor del Pueblo.

ARTÍCULO 44.- OBLIGACIÓN DE COLABORAR. Todas las entidades y organismos públicos, están obligados a prestar colaboración a los requerimientos de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes con carácter preferente y expedito. La defensoría podrá requerir el uso de la fuerza pública en sus funciones. La obstaculización al ejercicio de las funciones del Defensor, importan resistencia a la autoridad conforme artículo 239 del Código Penal.

ARTÍCULO 45.- DEBERES. Declarada admisible la queja el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes debe: a) Promover y proteger los derechos de los sujetos de esta ley mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas competentes a fin de garantizar el goce y el ejercicio de los mismos. b) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes. Formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos o privados respecto de cuestiones objeto de requerimientos. c) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones y acciones realizadas.

CAPÍTULO II DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

ARTÍCULO 46.- OBJETO. A los fines de esta ley se consideran organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia a aquellas que, con Personería Jurídica y en cumplimiento de su misión institucional, desarrollen programas o servicios de información, difusión, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

ARTÍCULO 47.- OBLIGACIONES. Deben cumplir con los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos en los que nuestro país sea parte, y observar los siguientes principios y obligaciones: a) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente de respeto, dignidad y no discriminación. b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de las niñas, niños y adolescentes y velar por su permanencia en el seno familiar. c) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión judicial. d) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernan como sujetos de derechos. e) Mantener constantemente informado a la niña, niño o adolescente sobre su situación legal, en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte sus intereses y notificarle, en forma personal y a su representante legal, toda novedad que se produzca en forma comprensible cada vez que la niña, el niño o el adolescente lo requiera. f) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en pequeños grupos. g) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de aplicación respecto de las condiciones edilicias, salubridad, higiene, seguridad y confort. h) Rendir cuentas de los fondos recibidos del Estado de acuerdo a lo establecido por el organismo estatal del cual haya recibido el financiamiento. i) Sostener activamente una conducta institucional frente a la sociedad basada en los derechos y principios establecidos por esta ley.

ARTÍCULO 48.- INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento de las obligaciones a que se hallan sujetas las organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia mencionadas por esta ley, la delegación regional debe promover ante los organismos competentes, la implementación de las medidas que correspondan.

ARTÍCULO 49.- REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES. Créase en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia el Registro de las Organizaciones No Gubernamentales con Personería Jurídica con el objeto de controlar y velar en cada departamento, por el fiel cumplimiento de los principios que establece esta ley, con comunicación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con miras a la creación del Registro Nacional de estas Organizaciones.

TÍTULO IV MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y EXCEPCIONALES. PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO I MEDIDAS DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO 50.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL. Son aquellas que deben ser adoptadas y aplicadas por la autoridad administrativa de promoción y protección competente ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de una o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, para preservar o restituir a los mismos el goce y ejercicio de los derechos amenazados o vulnerados o la reparación de sus consecuencias. La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la Sociedad, los particulares, los padres, el grupo familiar, representantes legales o

responsables, o de la propia conducta de la niña, niño o adolescente. En ningún caso estas medidas pueden consistir en la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, a excepción de aquellas situaciones en que la permanencia en su medio familiar implique una amenaza o vulneración de sus derechos; debiendo en esta circunstancia adoptarse medidas de protección excepcional. Las medidas de protección integral nunca pueden consistir en la privación de la libertad. Estas medidas pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento por acto de la autoridad administrativa competente que las haya dispuesto y cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen.

ARTÍCULO 51.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXCEPCIONAL. Las medidas de protección excepcional son aquellas medidas subsidiarias y temporales que importan la privación de la niña, niño o adolescente del medio familiar o de su centro de vida en el que se encuentra cuando el interés superior de éstos así lo requiera. Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del pleno ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias y solo proceden cuando la aplicación de las medidas de protección integral resulten insuficientes o inadecuadas para su situación particular. Estas medidas son limitadas en el tiempo, no pudiendo exceder de noventa días, plazo que debe quedar claramente consignado al adoptarse la medida y se pueden prolongar con el debido control de legalidad, mientras persistan las causas que les dieron origen. Cumplido el plazo de un año y seis meses contado desde que quede firme la resolución administrativa por la que se adoptara originariamente la medida excepcional, la autoridad que ordenara la misma deberá resolverla definitivamente. En el pedido de control de legalidad deberá informarse y acreditarse al Juez la fecha en que quedó firme administrativamente la resolución adoptada. El Juez consignará la fecha de inicio de la medida excepcional, de sus eventuales prórrogas y el plazo máximo de vigencia al momento de resolver el control de legalidad. En aquellos casos donde no se observe un lapso prudencial entre la fecha en que quede firme el acto administrativo y la efectiva separación del niño de su grupo familiar el Juez determinará excepcionalmente la fecha de inicio. La Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, y las Delegaciones Regionales, son los organismos facultados para adoptar medidas de protección excepcionales con la debida fundamentación legal y posterior control de legalidad por la autoridad judicial competente en materia de familia. Art. Modificado por Ley N° 13237

ARTÍCULO 52.- APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES. Las medidas establecidas en el artículo anterior, se aplican conforme a los siguientes criterios: a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las medidas consisten en la búsqueda e individualización de las personas vinculadas a ellos a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes. b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al considerar las soluciones se debe prestar especial atención a la continuidad en la educación de las niñas, niños y adolescentes, y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. c) Permanencia temporal en centros terapéuticos de salud mental o adicciones. d) Las medidas se implementan bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo familiar de origen, con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes. e) Las medidas de protección excepcional que se

tomen con relación a grupos de hermanos deben preservar la convivencia de los mismos. f) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir en privación de la libertad. g) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional la falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas de la autoridad administrativa. La aplicación de las medidas deberá ser supervisada por la autoridad administrativa que las dictó.

ARTÍCULO 53.- INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL. La intervención de las autoridades administrativas y judiciales puede ser requerida por: a) la propia niña, niño o adolescente, no siendo necesario que concurra con la asistencia de sus padres o representantes legales. b) los representantes legales de las niñas, niños y adolescentes, o miembros de su familia o centro de vida. La Autoridad Administrativa o Judicial requerida evaluará si es necesario proteger la identidad de la persona requirente. c) integrantes de los equipos técnicos que se desempeñen en los organismos creados por la presente ley. d) cualquier agente del Estado nacional, provincial municipal o comunal. e) por miembros de la comunidad.

CAPÍTULO II MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL- PROCEDIMIENTOS

ARTÍCULO 54.- DENUNCIA. La niña, niño o adolescente, la persona física o jurídica, pública o privada, gubernamental o no gubernamental que haya por cualquier medio tomado conocimiento de un hecho o acto que vulnere, impida o afecte de cualquier modo la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, puede formular denuncia ante el Servicio de Promoción y Protección de Derechos Local o ante la Autoridad administrativa del ámbito regional o de la Autoridad de Aplicación provincial o ante cualquier agente público. Éste último deberá inmediatamente derivar al Servicio de Promoción y Protección de Derechos Local o a la Autoridad administrativa del ámbito regional o a la Autoridad de Aplicación provincial.

ARTÍCULO 55.- INFORMACIÓN - PROHIBICIÓN. La información recepcionada en los términos del artículo anterior, debe ser documentada en el formulario que prevea la reglamentación, en el que deben asentarse todos los datos aportados o colectados al tiempo de la denuncia o noticia, sin incursionar en otros detalles que no se hallen especificados. Se debe derivar de modo inmediato la comunicación y de ser necesario a la persona que hace conocer la noticia, al Servicio de Promoción y Protección de Derechos Local o a la Autoridad administrativa del ámbito regional o a la Autoridad de Aplicación provincial a los fines de su intervención. Debe evitarse toda intromisión o exposición al relato voluntario o provocado de la niña, niño o adolescente o de la persona que hace conocer las circunstancias que determinan la intervención. De requerirse atención médica, se debe dar intervención al servicio de salud estatal más próximo, con información concreta que se trata de un caso de protección de derechos de una niña, niño o adolescente, además de dar intervención al Servicio de Promoción y Protección de Derechos Local o a la Autoridad administrativa del ámbito regional o a la Autoridad de Aplicación provincial.

ARTÍCULO 56.- INTERVENCIÓN - ENTREVISTA. Una vez que el Servicio de Promoción y Protección de Derechos tome conocimiento de la situación de vulneración de derechos se debe dar intervención a los equipos interdisciplinarios, de actuación en ese ámbito territorial a los fines de relevar la situación y diseñar la estrategia de abordaje de la problemática. El equipo interdisciplinario del Servicio debe mantener con la niña, niño o adolescente una entrevista personalizada en un ámbito adecuado a la edad y etapa evolutiva de la niña, niño o adolescente, respetando al máximo los derechos previstos en la presente ley. Debe citar a los familiares,

representantes, responsables o allegados involucrados de la niña, niño o adolescente, a una entrevista con el equipo interdisciplinario del Servicio. En dicha entrevista se debe poner en conocimiento de los familiares o responsables la petición efectuada, la forma de funcionamiento del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, los programas existentes para dar solución a la problemática planteada y su forma de ejecución, los resultados esperados, los derechos de los que goza la niña, niño o adolescente, el plan de seguimiento y el carácter consensuado de la decisión que se adopte. El Decreto Reglamentario debe establecer los protocolos y pautas de intervención, como así también otras formalidades a cumplir por el Servicio de Promoción y Protección de Derechos local, por la Autoridad administrativa del ámbito regional y por la Autoridad de Aplicación provincial en cada jurisdicción administrativa.

ARTÍCULO 57.- ADOPCIÓN DE LA MEDIDA. Con el dictamen del equipo interdisciplinario, el Servicio de Promoción y Protección de Derechos local o la autoridad administrativa del ámbito regional o la Autoridad de Aplicación provincial adoptan todas las medidas de protección que dispone la presente ley, lo que debe ser debidamente documentado por los organismos intervinientes, constituyéndose así en prueba necesaria para la probable adopción de medidas de protección excepcionales. El procedimiento es escrito y breve, con participación activa de la niña, niño o adolescente, su familia nuclear o ampliada o sus representantes o responsables.

CAPÍTULO III MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXCEPCIONAL- PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 58.- PROCEDENCIA. Una vez que el Servicio de Promoción y Protección de Derechos local, a través de sus equipos interdisciplinarios, determine que se han agotado o notablemente reducido sus posibilidades de intervención, a través de la aplicación de medidas de protección integral, y persista la situación de amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, puede solicitar fundadamente a la Autoridad administrativa del ámbito regional o a la Autoridad de Aplicación provincial la aplicación de una medida de protección excepcional. En el pedido fundado debe constar un detalle circunstanciado de las medidas de protección adoptadas, una evaluación de las razones de su fracaso y una sugerencia fundada de la medida de protección excepcional que se estima conveniente adoptar. El pedido fundado debe acompañarse de los informes de los profesionales del equipo interdisciplinario interviniente. Art. Modificado por Ley N° 13237

ARTÍCULO 58 BIS.- MEDIDA DE PROTECCIÓN EXCEPCIONAL DE URGENCIA. Los trámites administrativos que demande la adopción de la medida de protección excepcional no obstan la aplicación urgente e inmediata de la medida, cuando el Servicio evalúe que la no aplicación urgente e inmediata de la medida implique un grave riesgo para la vida e integridad psicofísica de la niña, niño o adolescente. Se deberá solicitar fundadamente la medida por cualquier medio. La Autoridad Administrativa indicada en el artículo precedente emitirá la orden respectiva consignando los motivos que justifican la urgencia. En caso de ser necesario se requerirá a la autoridad judicial correspondiente el empleo de la fuerza pública para efectivizar la medida acompañando la orden emitida. Se deberá formalizar el pedido en forma escrita y fundada cumplimentando todos los requisitos para confeccionar el expediente o legajo administrativo y reunir todos los medios de prueba e informes necesarios que fundamenten el pedido, en el plazo de cinco días hábiles desde que se ordenó la medida. Art. Modificado por Ley N° 13237

ARTÍCULO 59.- INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL ÁMBITO REGIONAL Y DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN PROVINCIAL. A partir de la solicitud de la aplicación de una medida de protección excepcional, la Autoridad Administrativa del ámbito regional o la Autoridad de Aplicación provincial interviene a través de sus equipos interdisciplinarios con la finalidad de evaluar la situación y la conveniencia y procedencia de la medida de protección excepcional cuya adopción se solicita, pudiendo resolver la adopción de la medida de protección excepcional que se solicita u otra medida excepcional o bien una medida de protección integral. El equipo interdisciplinario puede mantener con la niña, niño o adolescente una entrevista personalizada en un ámbito adecuado a la edad y etapa evolutiva de la niña, niño o adolescente, respetando al máximo los derechos previstos en la presente ley. Separadamente el equipo interdisciplinario debe citar a una entrevista a los familiares, representantes, responsables o allegados involucrados de la niña, niño o adolescente, a los que se debe poner en conocimiento de los derechos de la niña, niño o adolescente que se encuentran vulnerados, la medida de protección excepcional solicitada, los cursos de acción propuestos y los resultados esperados. El Decreto Reglamentario debe establecer los protocolos y pautas de intervención como así también otras formalidades a cumplir por los equipos interdisciplinarios de la Autoridad administrativa del ámbito regional y de la Autoridad de Aplicación provincial en cada jurisdicción administrativa.

ARTÍCULO 60.- RESOLUCIÓN. La Autoridad administrativa del ámbito regional y la Autoridad de Aplicación provincial son los únicos funcionarios con competencia para dirigir el procedimiento y para declarar y disponer por resolución administrativa debidamente fundada alguna medida de protección excepcional. Las medidas de protección excepcional son de aplicación restrictiva.

ARTÍCULO 61.- NOTIFICACIÓN. La resolución administrativa por la que se adopta una medida de protección excepcional debe notificarse debidamente a los representantes legales, familiares o responsables de la niña, niño o adolescente.

ARTÍCULO 62.- RECURSOS. Contra la resolución de la Autoridad administrativa del ámbito regional o la Autoridad de Aplicación provincial que decide la aplicación de una medida de protección excepcional puede deducirse recurso de revocatoria en audiencia oral y actuada producida dentro del plazo de doce (12) horas de interpuesto el recurso. Este no tiene efecto suspensivo de la medida recurrida. Finalizada la sustanciación del recurso éste debe ser resuelto en un plazo de tres (3) horas, sin apelación administrativa y con notificación a las partes.

ARTÍCULO 63.- REMISIÓN. Las actuaciones administrativas deben ser puestas a disposición del Juez o Tribunal Colegiado con competencia en materia de Familia a los fines de la realización del control de legalidad en el día siguiente hábil de adoptada la medida excepcional o de agotado el procedimiento recursivo, si se hubiese planteado. La Autoridad Administrativa en el marco de su competencia no requerirá patrocinio letrado a tal fin. Los trámites judiciales que demande el control de legalidad no obstan la aplicación urgente e inmediata de la medida, cuando la autoridad administrativa evalúe que la no aplicación urgente e inmediata implique un grave riesgo para la vida e integridad psicofísica de la niña, niño o adolescente. De resultar necesario recurrir al empleo de la fuerza pública para el cumplimiento de la medida de protección excepcional, la Autoridad administrativa del ámbito regional o la Autoridad de Aplicación provincial requerirán a la autoridad judicial competente las órdenes respectivas. El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de las sanciones previstas en el Capítulo IV del Código Penal. El incumplimiento de las medidas excepcionales

por parte de la niña, niño o adolescente no pueden suponerle sanción alguna. Art. Modificado por Ley N° 13237

ARTÍCULO 64.- VÍCTIMAS DE DELITOS. Al equipo interdisciplinario de los Servicios de Promoción y Protección de Derechos Locales y de la Autoridad administrativa del ámbito regional y de la Autoridad de Aplicación provincial les corresponde intervenir en los supuestos en que Niñas, Niños o Adolescentes sean víctimas de delitos de acción pública o dependientes de instancia privada. El equipo interdisciplinario debe citar en el término de dos horas de puesta la denuncia o noticia en su conocimiento a una entrevista personalizada a la niña, niño o adolescente víctima de tales delitos en un ámbito adecuado a la edad y etapa evolutiva de la niña, niño o adolescente, garantizando especialmente los derechos descriptos en la presente ley. Previo al abordaje, debe poner en conocimiento al Tribunal, Juez o Instrucción Fiscal que disponga el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. Se debe evitar en toda circunstancia, la exposición a relatos repetidos o audiencias, entrevistas o comparecencias innecesarias de la niña, niño o adolescente.

CAPÍTULO IV ETAPA JURISDICCIONAL

ARTÍCULO 65.- CONTROL DE LEGALIDAD. Recibidas las actuaciones por el Tribunal o Juzgado competente en materia de Familia, el Juez deberá en el término de tres días efectuar el control de legalidad de las medidas excepcionales establecidas en esta ley y sus prórrogas, adoptadas por la Autoridad administrativa del ámbito regional o por la Autoridad de Aplicación provincial, ratificándolas o rechazándolas por auto fundado en el que se ponderarán, tanto el cumplimiento de los requisitos formales de las mismas, como la razonabilidad de las medidas dispuestas. Si se hallare vencido el plazo máximo de vigencia de la medida, el juez podrá fijar a la autoridad de aplicación un plazo máximo de diez días para el dictado de la resolución definitiva. El Secretario Social de los Juzgados de Menores, llevará adelante la tarea que establece el artículo 176 de la ley 10160 vinculada a la actividad regulada por la ley 12967, bajo la dependencia de los Juzgados o Tribunales de Familia, quedando el resto de las atribuciones fijadas por dicha norma a cargo del Secretario Penal de los Juzgados de Menores. Art. Modificado por Ley N° 13237

ARTÍCULO 66.- RESOLUCIÓN. Resuelta la ratificación de la medida, el Tribunal o Juez competente debe oficiar a la Autoridad administrativa del ámbito regional o a la Autoridad de Aplicación provincial que solicitó el control de legalidad, para que se apliquen las medidas continuando con el procedimiento administrativo. Rechazada la medida por el Tribunal o Juez competente, éste debe oficiar a la Autoridad administrativa del ámbito regional o a la Autoridad de Aplicación provincial que solicitó el control de legalidad. En el curso del procedimiento la niña, niño o adolescente es reintegrado a la familia o centro de vida de donde fue retirado con motivo de las medidas de protección excepcionales. La resolución adoptada debe ser notificada a la niña, niño o adolescente, su defensor privado si hubiera intervenido, el Defensor de Menores de Edad, los representantes legales, familiares o responsables del niño o la niña y sus defensores y demás partes del proceso. La resolución es recurrible. Art. Modificado por Ley N° 13237

ARTÍCULO 66 BIS.- La resolución definitiva de la medida excepcional deberá ser comunicada al Juez interviniente para efectuar el control de legalidad previsto en el artículo 65 dentro del término de tres días contados desde que quede firme. La resolución administrativa deberá consignar específicamente las medidas definitivas que la autoridad de aplicación propone sean

adoptadas por el órgano jurisdiccional. El Juez podrá, por decisión fundada, ordenar la continuación de la medida excepcional debiendo en dicho caso fijar un plazo que no podrá exceder de los seis meses. Si el Juez ratificara la finalización de la medida excepcional, citará a los padres, tutores, guardadores o responsables de los niños a comparecer a estar a derecho, expedirse sobre las medidas definitivas propuestas por la autoridad de aplicación y ofrecer prueba en el término de diez días, bajo apercibimiento de resolver sin más en caso de falta de contestación. Asimismo, dará intervención al Defensor General y adoptará todas las medidas que considere pertinentes en orden a proteger el superior interés de los niños comprendidos. Art. Modificado por Ley N° 13237

ARTÍCULO 66 TER.- En caso de oposición de los padres, tutores, guardadores o responsables de los niños a las medidas propuestas por la autoridad administrativa, el Juez nombrará un tutor especial para el o los niños y, previa aceptación del cargo, le correrá traslado tanto de la medida propuesta como de la oposición formulada, quien deberá evacuarlo y ofrecer prueba en el término de diez días. Si no hubiere oferta probatoria se dictará sentencia en el plazo de cinco días, caso contrario se proveerá la prueba ofrecida y designará audiencia de vista de causa en un plazo no mayor de treinta días, conforme lo establecido en el artículo 413 del Código Procesal Civil y Comercial. Evacuado el traslado o producida la audiencia de vista de causa el Juez dictará sentencia en el plazo de cinco días, debiendo previamente haber tomado contacto personal con los niños y oírlos conforme a su edad. Durante la tramitación del juicio de oposición se considerarán prorrogadas las medidas excepcionales adoptadas por la autoridad administrativa quien deberá continuar interviniendo hasta tanto se dicte sentencia definitiva o el Juez atribuya cautelarmente la guarda de los niños. Art. Modificado por Ley N° 13237

ARTÍCULO 66 QUATER.- Si el o los niños fueren declarados en estado de adoptabilidad se procederá conforme lo previsto en la ley 13093 a los fines del otorgamiento de guarda preadoptiva. Art. Modificado por Ley N° 13237

TÍTULO V PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

ARTICULO 67.- El presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos debe identificar las partidas presupuestarias cuyos beneficiarios directos sean los sujetos de esta ley. Las partidas presupuestarias asignadas a la promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben incrementarse de acuerdo a los indicadores e información surgida de registros de datos estadísticos provinciales que deben incluir la variable niñez. El presupuesto asignado a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia debe constar desagregado en Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos.

TÍTULO VI DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 68.- Modifíquese el Título IV - Capítulo II, el artículo 68 de la ley 10160 (t.o.) el que quedará redactado de la siguiente forma: "ARTÍCULO 68: Originaria y exclusivamente les compete conocer: 1) Por la vía del juicio oral, de los litigios que versan sobre divorcio contencioso, filiación y pretensión autónoma de alimentos y litis expensas; 2) Por la vía del juicio ordinario, de los litigios que versan sobre nulidad de matrimonio, tenencia y régimen autónomos de visita de hijos, adopción, impugnación de paternidad y disolución de sociedad conyugal no precedido de juicio de divorcio. 3) Por la vía del juicio sumario, de los litigios que versan sobre liquidación de sociedad conyugal, insanía, inhabilitación judicial y pérdida de patria potestad. 4) Por la vía del juicio sumarísimo, de los litigios que versan sobre tenencia incidental de hijos, guarda, suspensión y limitación de la patria potestad y sobre tutela y

curatela. 5) Por la vía del juicio verbal y no actuado, de los litigios que versan sobre venia para contraer matrimonio y divorcio no contencioso. 6) En los asuntos de violencia familiar, por el procedimiento especial creado por ley. 7) En los asuntos relacionados con el control de legalidad de las medidas de protección excepcionales por el procedimiento especial establecido en la ley Provincial de Promoción y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 8) En aquellas situaciones que impliquen violación de intereses difusos reconocidos constitucionalmente y en los que se encuentren vinculados niñas, niños y adolescentes y en cualquier otra cuestión principal, conexa o accesorio, referida al derecho de familia y de las niñas, niños y adolescentes con excepción del derecho sucesorio. A los fines dispuestos en el artículo 66, competen al Tribunal Colegiado los litigios enunciados en el inciso 1. A los fines en el artículo 67, competen al juez de trámite los litigios enunciados en los incisos 2, 3, 4, 5, 7 y 8."

ARTÍCULO 69.- Modifícase en el TÍTULO V, Capítulo XI - apartado c) Competencia Material - el artículo 102 de la ley 10160 (t.o.) Orgánica del Poder Judicial el que quedará redactado de la siguiente forma: "ARTÍCULO 102: Los Jueces de Menores ejercen su competencia en materia de menores de conformidad y con las limitaciones dispuestas en la ley provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes."

ARTÍCULO 70.- Modifícase en el Libro I - Título Único, el artículo 1º de la ley N° 11.452 - Código Procesal de Menores, el que quedará redactado de la siguiente forma: "ARTÍCULO 1º: El poder jurisdiccional, en el orden penal, en materia de menores será ejercido exclusivamente por los jueces que integran el fuero de menores."

ARTÍCULO 71.- Deróganse en el Libro I - Título Único, el artículo 2; en el Libro II - Título I - Capítulo I, el inciso 1) del artículo 5; en el Capítulo IV, el artículo 9; el inciso 1) del artículo 14 y en el Título II, el Capítulo II de la ley Provincial N° 11.452 y toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 72.- Autorízase al Poder Ejecutivo a modificar las partidas presupuestarias que requieran la aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 73.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo de noventa (90) días.

ARTÍCULO 74.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

Firmado: Eduardo Alfredo Di Pollina - Presidente Cámara de Diputados Griselda Tessio - Presidenta Cámara de Senadores Lisandro Rudy Enrico - Secretario Parlamentario Cámara de Diputados Diego A. Giuliano - Secretario Legislativo Cámara de Senadores

SANTA FE, 17 de Abril de 2009 De conformidad a lo prescripto en el Artículo 57 de la Constitución Provincial, téngasela como ley del Estado, insértese en el Registro General de Leyes con el sello oficial y publíquese en el Boletín Oficial.

Firmado: Antonio Juan Bonfatti – Ministro de Gobierno y Reforma del Estado.

Anexo II

Transcripción de la entrevista realizada en fecha 27/10/2015 a profesional de Trabajo Social del Hogar de alojamiento transitorio perteneciente al Sistema Provincial de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que ha sido tomado como referencia para la realización del presente trabajo.

Trascripción de la entrevista

Referencias: (E) Entrevistador, (P) Profesional

E-¿Cuál es el trabajo que realizás dentro de la institución?

P- Mi trabajo es con los chicos. Antes podíamos trabajar más con las familias, ahora es como que son más chicos de afuera y lo trabajan los equipos, entonces trabajamos específicamente con los chicos. Yo los escucho, realizo los trámites que se necesiten, las coordinaciones con las instituciones del barrio o de otros lugares para que ellos puedan participar, eh... el objetivo es que no siempre estén acá en el hogar, que se vinculen en otros espacios. Pero el contacto con las familias ya no lo tengo como antes. Antes ese trabajo lo realizábamos nosotros, hacíamos entrevistas a las familias, visitas, ahora cuando las familias vienen, los sábados o domingo, tratamos de estar cuando se puede para poder tener una conversación, escuchar a la familia, observar el vínculo entre los chicos y los familiares que se acerquen, que nos sirva también para poder evaluar.

E-¿Cuántas horas semanales estás en el hogar?

P- Seis horas por día, de lunes a viernes. Pero siempre que se necesite la presencia del equipo en la institución nos acercamos; si es necesario cubrir durante algunas horas la ausencia de un personal, también lo hacemos.

E-¿Cuánto hace que trabajás en el hogar?

P- Veinte años aproximadamente hace que entré a trabajar.

E-¿Cómo se encuentra conformado el equipo, los trabajadores de la institución?

P- En la actualidad, Directora, equipo profesional conformado por la psicóloga, que antes no teníamos dentro de la institución y yo. Administradora, ecónoma y acompañantes convivenciales que son quienes hacen trabajo de preceptores, llamándose acompañantes convivenciales en la actualidad.

E- ¿Cuántos acompañantes convivenciales trabajan en el hogar?

P- Son nueve en total, los acompañantes, y hay dos personas que se encargan de servicios generales, una de cocina y otra de limpieza. De las acompañantes convivenciales contamos con turnos de 6 y de 8 horas.

E-Te encontrás en el hogar desde antes de la aplicación de las legislaciones actuales, ¿qué podés decir con respecto al pasado de la institución?

P- Anteriormente todas las situaciones eran ingresadas directamente por el Juzgado, eran situaciones judicializadas; la diferencia que hay con el presente es que antes ingresaban chicos por falta de recursos económicos, también por otras situaciones, de abuso, relaciones familiares conflictivas, agresividad... pero mucho era por falta de recursos económicos.

E- Y en ese contexto, ¿cómo se llevaba a cabo el ingreso?

P- En algunas situaciones eran las mismas familias las que se presentaban al Juzgado y el Juez podía autorizar el ingreso al hogar. Y las mamás que venían con sus hijos, las mamás menores de edad que ingresaban, también lo hacían por intervención del Juzgado. Tenían 13, 15 años, al estar muchas veces en la calle los vecinos hacían denuncias, porque estaba tal vez la nena pidiendo, embarazada o con su bebé, que tal vez no tenían para comer, entonces desde el Juzgado se decidía la internación.

E-¿Cuáles eran las prácticas e intervenciones de aquel momento al interior de la institución?

P- Yo entré a trabajar con un posicionamiento acorde al paradigma actual, fue muy difícil porque el personal se encontraba acostumbrado al Patronato, era muy difícil trabajar. La Directora de aquel entonces y yo veníamos con ideas nuevas, pero se hacía difícil ser dos contra mucha gente acostumbrada a viejas prácticas... Se empezó a lograr una relación de diálogo con el Juzgado, nos acercábamos para hablar por algunas situaciones, escuchaban lo que teníamos para decirles, pero en general los chicos eran tratados como objetos. El problema radicaba con los adultos, con el personal, eso era lo que más complicaciones nos traía, nosotras queríamos que las chicas salieran, y a veces lo que se pretendía era que cuiden a sus hijos, que cumplan su rol de madres. Parecía que no estaba bien que salieran o se divirtieran. Se priorizaba que se ocupen de sus hijos y no se tenían en cuenta otras cuestiones. Eran nenas, más allá de ser madres ya, de 13 o 15 años.

E-El hogar al ser una institución provincial, ¿contaba con algún tipo de protocolo o indicación acerca del modo de trabajar con los niños, o las adolescentes que se encontraban en la institución que haya hecho referencia al paradigma actual, teniendo en cuenta que ya en nuestro país justamente la Convención había tomado rango constitucional?

P- A ver, acá junto con quien era la Directora intentábamos llevar adelante prácticas de acuerdo a este paradigma, el problema como te mencioné era que se trataba de prácticas que estaban muy arraigadas. No sabría decirte si las preceptoras de aquel entonces conocían a cada uno de los chicos por su nombre. Muchas veces lo que primaba era que las chicas hicieran las tareas de limpieza, que cuidaran a sus hijos, se prestaba más atención a esas cosas que a alguna situación de mayor importancia, por ejemplo muchas veces se anotaba en el cuaderno si limpió o no en lugar de indicar otros aspectos como por ejemplo cómo estuvo durante el día uno de los chicos, si estuvo triste, si lloró...

E-¿En ese momento existía un equipo de profesionales como en la actualidad?

P- Cuando yo ingresé estaba la directora, también trabajadora social. Yo empecé trabajando ad honorem. Entre nosotras acordamos poder empezar a tener entrevista con las nenas, tener espacios en los que podamos conversar y que pudieran expresarse. Utilizábamos por ahí alguna

de las oficinas o bien en alguna habitación, dependiendo de las situaciones o las necesidades de cada una de ellas y nos reuníamos juntas o en espacios más individuales.

E- Procuraban tener con quienes residían en el hogar ciertas prácticas que apuntaran al nuevo paradigma...

P- Sí, se hablaba con ellas acerca de sus derechos, se buscaba movilizar esas cuestiones, por ahí íbamos a la dirección todas las chicas, y junto con la directora, mientras tomábamos mates charlábamos, buscábamos tener espacios de diálogo y escucharlas, y era como que el personal veía mal todo eso, porque estaban en dirección tomando mates con nosotras, pero era una manera de que podamos escucharlas.

E- ¿Cómo podés describir...?

Se interrumpe durante segundos la entrevista debido a la llegada de una de las niñas, quien golpea la puerta de la oficina y dialoga brevemente con la profesional.

P- Disculpá...

E- No hay problema... Me estabas comentando acerca de las acciones que desarrollaban en conjunto con quien era la Directora en aquel entonces y también algunas dificultades que se presentaban, lo que me interesaría saber es cómo podés describir lo cotidiano en aquel entonces.

P- Sí, bien temprano se levantaban, se les preparaba la leche a las chicas, había que controlar que cada tres horas les den de comer a sus bebés, las que tenían bebés recién nacidos, las preceptoras se encargaban de eso... eran chicas, algunas de ellas tenían 13 años, no sabían cómo se hacía, algunas no querían, se ocupaban de la limpieza, bañarlos, siempre se buscaba generar esos hábitos en relación a las chicas con su bebé. A las chicas se les ofrecían talleres de estimulación, para que pudieran ir y conocer algunos modos de relacionarse con sus hijos, cómo cuidarlos...

E- Jugaba un papel muy importante lo relacionado a la maternidad...

P- Sí, se buscaba fomentar eso, igualmente en situaciones donde las chicas eran madres por una situación de abuso por ejemplo, se las acompañaba, muchas veces sentían rechazo, pero se buscaba acompañarlas, no presionarlas.

E- Respecto a los niños que ingresaban por intervención del Juzgado, es decir niños o niñas que no eran "menores madres", ¿cómo se desarrollaba su cotidianidad?

P- También, parecido, el personal generalmente buscaba que los chicos, al igual que las chicas que ingresaban por menores madres, se dedicaran a tareas cotidianas o apuntaban generalmente a cuestiones de higiene. De todas formas se intentaba siempre promover también que asistan a actividades recreativas, no solamente estar dentro del hogar.

E- ¿Cómo fue vivido el proceso de cambio a partir de la sanción de las leyes tanto nacional como provincial?

P- El mayor cambio en ese momento fue la implementación de los equipos que toman las medidas de separación, o sea las Direcciones y las Delegaciones, cuando se crea la Subsecretaría. Antes desde la institución nos manejábamos directamente con el Juzgado, cuando comienzan a funcionar de esta nueva manera fue también diferente el lugar que comenzamos a

ocupar nosotros desde la institución. Muchas decisiones pasaban a ser tomadas por la dirección del hogar y no dependíamos directamente del Juzgado. Y eso nos generaba ciertos temores también, hubo un tiempo en el que estuvimos sin directora, y ahí fuimos aprendiendo mucho. Antes todo lo autorizaba o firmaba el Juzgado directamente, por mínimo que haya sido, después comenzamos desde el hogar a tener mayor posibilidad de tomar decisiones en algunos aspectos como por ejemplo las salidas, que antes siempre las autorizaba el Juzgado.

E-Durante este tiempo que estuve compartiendo en el hogar momentos con los chicos pude observar que a veces salen, sobre todo los más grandes, incluso ocasiones en donde se van y no regresan enseguida, ¿cómo se actuaba antes cuando un chico se iba, o se escapaba?

P- Antes la preceptora iba a la policía, hacia la denuncia de fuga, así se decía, la policía lo buscaba.

E-¿Y en la actualidad actúan de la misma manera?

P- Los chicos salen... se hace de todas formas el aviso a la policía si se van, pero los chicos vuelven. Hubo situaciones donde se fueron y los fuimos a buscar nosotros porque sabíamos dónde podían estar. Generalmente les decimos un horario en el que tienen que volver, nos comunicamos con quienes están, al ser chicos que no tienen muchos contactos por fuera del hogar porque la mayoría no son de acá, sabemos con quiénes se relacionan y dónde podemos encontrarlos si se van... respetan dentro de todo los horarios. Pasa a veces que no vuelven pero podemos darles un margen. Antes eran chicos de acá, entonces si salían tenían más conocidos, más lugares a dónde ir, ahora como en su mayoría son chicos de afuera, cuando crean un vínculo lo conocemos y sabemos con quiénes pueden estar.

E- Esto a lo que hacés referencia respecto a la procedencia de los chicos, ¿a qué se debe que en su mayoría no sean de esta ciudad o de lugares cercanos?

P- Ahora muchos de los chicos no son de acá, hay muy pocos que corresponden al equipo de este nodo. Muchas veces los equipos consideran que es mejor que no continúen en ese contexto en el cual se encontraban, entonces se los aloja acá, que no es su ciudad de origen... Creo que esto complica el poder trabajar con la familia de manera conjunta, antes desde acá teníamos más intervención con la familia, teníamos más participación, ahora eso lo hacen los equipos, nosotros sí a veces estamos presentes en las vinculaciones y así podemos conocer a la mamá o al papá, pero las distancias muchas veces hacen que el contacto no sea frecuente.

E-Esto también tiene que ver con las modificaciones que surgen a partir de la implementación de la ley provincial, qué equipos intervienen y en qué aspectos. Además de ello, ¿qué modificaciones podés mencionar?

P- Desde mi lugar, intenté siempre trabajar de la misma forma, quien era directora cuando entré a trabajar, también. Hoy muchos de los conflictos de trabajo en dirección a lo que se propone desde la ley tiene que ver con la no aceptación por parte del personal, hay dificultades para que acceda a trabajar de esta forma. Los chicos hoy son diferentes, son otro tipo de chicos, que saben de sus derechos, se imponen, ellos reclaman, están más abiertos; y con el personal hay que trabajar todo lo que tiene que ver con el nuevo paradigma. Si bien no todo se lleva a la práctica, porque les resulta más fácil o más cómodo pareciera seguir trabajando desde el viejo. Hoy lo que se propone es poder comprender, contener a los chicos, estar con ellos, y eso implica

generar vínculos, son cambios positivos. Que salgan, que participen en otros espacios, que no estén uniformados...

E-¿Antes usaban uniformes?

P- Sí, pero se pudo cambiar, antes tenían que identificarse en todos lados con el hogar... tenían un logo. Yo voy a la escuela y no me identifico como el chico del hogar, ese tipo de referencia yo siempre les digo que no hace falta que la digan, si ellos quieren, si quieren decirlo por supuesto que lo hacen y está bien, pero la idea es no ir directamente con eso, con una etiqueta... además el nombre tampoco los identifica, no son menores madres, son chicos y chicas... Pero sí hay cambios, ahora los chicos van a todas partes, van a fútbol, a telas, van a lo que podemos conseguir teniendo en cuenta qué es lo que les gusta, intentamos que estén integrados, que salgan. Actividades, talleres en el hogar, no, no, que tengan actividades acá pero que salgan, como sale cualquier chico. Antes los talleres estaban acá adentro, todo el día los chicos estaban acá. No! Por qué el hogar también el lugar donde se dan los talleres, antes venían maestras entonces tenían todas las chicas costura, ahora dejamos que elijan, que participen en una actividad que sea pedida por ellos, no impuesta.

E-¿Y pensás que existen puntos en común con lo que era antes?

P- Sí, hay gente que todavía los trata como objetos, que sigue desvalorizando, siguen tratándolos como si no tuviesen derechos, nos los escuchan... El problema se tiene con el personal, no con los chicos. De los años que estoy acá... Hubo capacitaciones, hay momentos donde nos reunimos desde el equipo con el personal, hablamos acerca de esto pero muchas acciones te muestran que no siempre se actúa desde el nuevo paradigma. Es tema de reuniones continuamente, que se pueda trabajar en conjunto, en la misma dirección.

E- Anteriormente comentabas que la mayoría de las situaciones por las cuales ingresaban niños a la institución se debían a cuestiones económicas, a la ausencia de recursos, ¿cómo ves eso hoy? ¿Cuáles considerás que son las principales situaciones que dan origen a la separación y un ingreso al hogar?

P-Y, por violencia, abusos, abandono, ausencia de cuidados. La cuestión económica hoy no es el motivo central por el que se separa a un chico, si bien muchas de las familias tienen un trasfondo económico complejo, las situaciones trascienden eso, son situaciones complejas, hay chicos acá que hace más de un año que están.

E-¿Cuál es la capacidad de alojamiento del hogar?

P- El hogar tiene capacidad para quince chicos, en este momento hay nueve. En realidad, por las condiciones edilicias, viste cómo está, por ejemplo ahora tenemos un solo baño, tendríamos que estar alojando solo esta cantidad en este momento.

E-¿Cuál es la situación, en lo que respecta a lo legal, de los niños que se encuentran aquí?

P- Muchos ya están en definitiva. Hay grupos de hermanos que están en definitiva, hace ya un año que están acá... algunas situaciones se resuelven, hubo hace poco un grupo de hermanitas que volvió con su familia... ojalá se pudieran resolver, pero hay situaciones que no se resuelven en el grupo familiar... pero a mí personalmente me interesaría que se puedan lograr cambios en el personal, sería muy importante que el personal pudiera trabajar desde el nuevo paradigma, se han brindado capacitaciones, se comenzaron a trabajar los estándares de calidad, pero cuesta.

Con la directora y la psicóloga buscamos promover esos cambios, que también genera sentimientos de frustración el no poder lograrlos.

E-¿Se realizan en la institución supervisiones por parte de la Defensoría del Niño, para evaluar los aspectos relativos al bienestar y protección dentro de la institución?

P- De la Cámara de Apelaciones vienen, registran cuántos chicos hay, la capacidad del hogar, las cuestiones edilicias, pero hay cosas que no se ven, es una visita rápida.

E-Pude observar a partir de mi participación en el hogar cómo es tu relación con los chicos...

P- Sí (risas). Los chicos tienen mucha confianza conmigo, me permiten que los escuche, profesionalmente procuro no generar nunca presiones en los chicos, no apurarlos, no pretender que cuenten enseguida qué les pasó o qué les pasa, respetar sus tiempos, generar espacios de diálogo, confianza y poco a poco ellos van pudiendo expresarse. Generalmente ingresan con miedo, tienen miedo que uno les quiera sacar información... es la confianza la que hay que fortalecer, es lo que ellos necesitan.

E-¿Cómo es llevado a cabo el trabajo de reparación o restitución de derechos con los niños o adolescentes?

P- Y... tratamos de fortalecer a los chicos desde el primer momento. Las situaciones son complejas, buscamos su fortalecimiento pero es un trabajo muy largo, es generar en ellos confianza, que sepan que su palabra vale, que se cree en su palabra, que ellos son valiosos. Llegan con mucho miedo. Es un trabajo largo que a veces pareciera que nunca acaba. Además hay otros aspectos, que egresen de la institución, que haya un traslado y sigan alojados en otra institución. Pero se busca eso, poder generar confianza, seguridad, que comprendan que lo que tengan para decir vale, que sus vidas valen, que sus derechos valen. También hay dificultades con los horarios en los que nos encontramos los profesionales acá, ellos también tienen actividades, y como ya dije, también el problema de que no todos dentro de este lugar tenemos el mismo criterio...

E-En lo que respecta a lo que plantea la ley en cuanto a mantener el vínculo entre hermanos, sé que en este momento hay niños que forman parte del mismo grupo familiar, son hermanos ¿se busca preservar sus vínculos cuando se decide el alojamiento en una institución?

P- Sí, se busca sostener los vínculos, ingresan grupos de hermanos, comparten las habitaciones, que estén juntos, que se acompañen, se potencien. A veces están peleados, acusan a uno de ellos por estar acá, tratamos de trabajar con ellos en ese sentido, en conjunto, lo que tiene que ver con sus derechos y por qué están viviendo en un hogar.

E-En las situaciones donde se declaran las condiciones de adoptabilidad en adolescentes, que como es sabido, muchas veces son quienes transitan hasta la mayoría de edad en instituciones de niñez debido a las escasas posibilidades de adopción por la edad, ¿qué implica el trabajar con ellos este proceso?

P- Sí, tuvimos esas situaciones. Se ponen muy mal, los angustia, pero se trabaja desde la verdad, se les comenta acerca de los procesos que tienen que ver con lo judicial. También pasa que con el transcurso del tiempo, los chicos hay cosas que solos empiezan a notar, la ausencia de familiares por ejemplo. También los equipos de referencia de los chicos hablan con ellos y les comentan sobre la situación...ellos preguntan si los adoptarían, si adoptarían a sus hermanos y a

ellos también. Hemos tenido chicos que cumplen la mayoría de edad estando acá, y se los acompañó, se han quedado acá hasta conseguir un trabajo, un lugar donde estar.

E- Por más que haya cumplido la mayoría de edad eso no necesariamente implica que de un momento al otro no va a contar más con este lugar...

P- Por más que cumpla los dieciocho años, si no están dadas las condiciones de egreso continúa teniendo el lugar acá.

E-¿Y quién evalúa esas condiciones de egreso?

P- Lo trabajamos en conjunto con el equipo y el adolescente, y es algo que se busca trabajar desde tiempo antes.

E-¿Las Direcciones o Delegaciones pierden intervención cuando cumplen la mayoría de edad?

P- Sí, pero igualmente hemos tenido situaciones en las que llegan a la mayoría de edad pero se sigue articulando con los equipos, no se deja al adolescente en la calle. Y en caso de que sea necesario existe la posibilidad de articular con otros ámbitos institucionales. Muchas veces los chicos encuentran otras familias. Por ejemplo a veces algunas chicas empiezan una relación y llega un momento en el que se van, forman una pareja, por ejemplo.

E- Algo más que me gustaría que me cuentes es acerca de tu opinión sobre los Estándares de Calidad, si bien de alguna forma estamos hablando de muchos de los aspectos que se resaltan en los estándares, ¿Considerás que se llevan a cabo?

P- Es una ayuda más para todos nosotros, tanto para profesionales como para el resto del personal, es muy positivo. El problema surge que no siempre se implementa como se debe, por ejemplo las funciones de cada uno de quienes trabajamos acá. No están dadas las condiciones para decir que se cumplen. La falta de voluntades, las condiciones edilicias del hogar... falta también lo que tiene que ver con lo afectivo, falta... hay gente que trabaja apuntando a eso pero no es la mayoría. Tratamos de generar espacios para promover la implementación, pero cuesta... el “por algo estarás acá” todavía se escucha...

E-¿Qué es lo que pensás acerca de la institucionalización de niños y adolescentes?

P- No estoy de acuerdo. Sí considero que tiene que ser como última instancia, pero creo que se debe promover otro trabajo. Los mismos chicos te dicen “si el que me hizo el daño es ... ¿por qué tengo que estar yo acá adentro?”. Es necesario el compromiso desde todas las áreas. Hay situaciones ajenas al hogar y ajenas a la familia de los chicos que dificultan y prolongan la estadía en el hogar...

E-Durante la observación tuve la posibilidad de presenciar el egreso de un grupo de hermanos y cómo los despedían los otros chicos, ¿cómo repercuten esos hechos en los que se quedan?

P- Y sí, cuando alguno de los chicos se va, los que siguen acá se ponen rebeldes, lloran, se angustian, muchas veces al día siguiente se los ve tristes, no quieren ir a la escuela, los moviliza... A veces también pasa que llega el momento de egreso y también se ve en quien se va estos sentimientos, se ven confundidos... los que se quedan quisieran irse y los que se van, en ese momento están como en duda, y no podemos creer que en ese momento se quieran quedar en vez de irse! pero sí, siempre genera sentimientos, se comparan entre ellos, siempre hay que trabajarlo.

E- Para finalizar, ¿qué podés decir respecto a la presencia de la figura del trabajo social dentro de una institución de alojamiento como ésta?

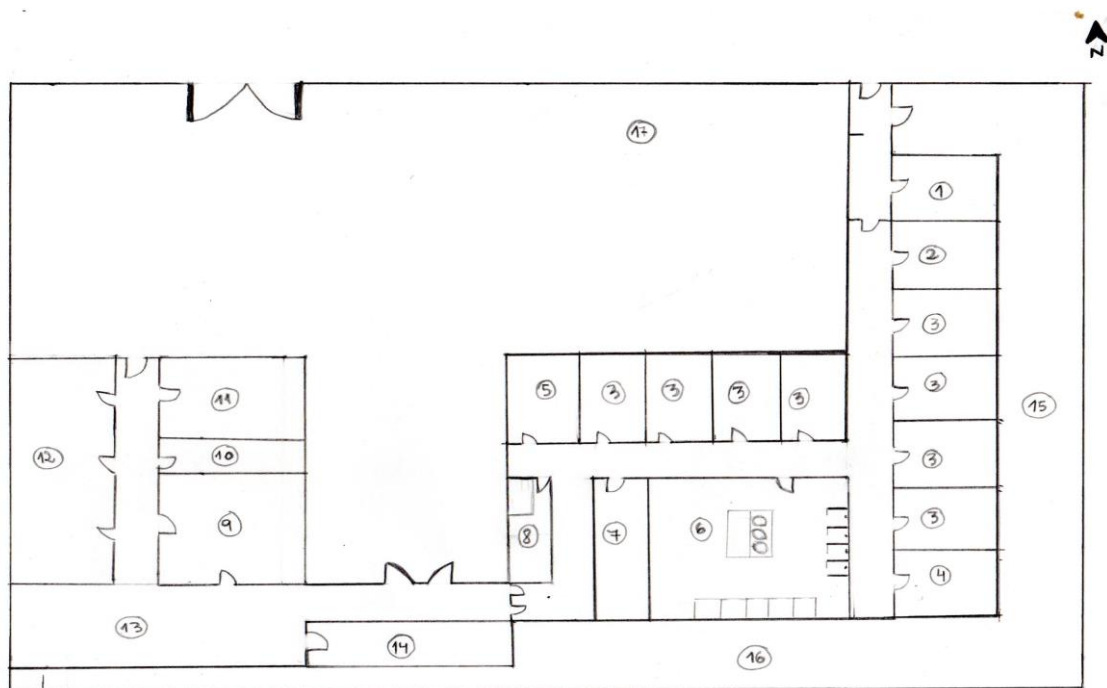
P-(risas) Creo que es muy importante, desde mi experiencia soy quien me ocupo de realizar las articulaciones que sean necesarias con diferentes equipos con los que se referencian ellos, realizo trámites, gestiones, y además el brindarles la posibilidad de escucharlos, que muchas veces los chicos marcan la diferencia entre hablar con la psicóloga o la trabajadora social, acompañarlos a ellos, hablar con ellos, conocerlos, saber qué quieren. De todas maneras lo fundamental también tiene que ver con el poder trabajar interdisciplinariamente dentro de la institución, las diferentes miradas.

Anexo III

Plano de la institución

Referencias:

1-Dirección, 2-Oficina Equipo Técnico, 3- Habitaciones, 4-Ropería, 5- Sala de Usos Múltiples (comedor), 6-Baños, 7- Preceptoría, 8- Baño de Personal, 9-Cocina (en refacción), 10- Lavadero nuevo (en refacción), 11- Sala de Lavadero anterior (en refacción), 12- Despensa, Economato (en refacción), 13- Comedor, 14- Patio interno, 15- Patio Lateral, 16-Patio trasero, 17- Patio delantero.



Bibliografía

- Alayón, Norberto. 2012. *Asistencia y Asistencialismo ¿pobres controlados o erradicación de la pobreza?* Buenos Aires-México. Editorial Lumen.
- Andrenacci, Luciano y Repetto, Fabián. 2006. *Universalismo, ciudadanía y Estado en la Política Social Latinoamericana*. Ciesu. Disponible en [http://www.ciesu.edu.uy/universalismo/\(04\)_andrenacci-repetto.pdf](http://www.ciesu.edu.uy/universalismo/(04)_andrenacci-repetto.pdf)
- Argentina. *Constitución de la Nación Argentina*. Agosto de 1994.
- Argentina. *Ley de Patronato de Menores*. Registrada bajo el número 10.903. Promulgada el 21/10/1919. Publicada en B.O. del 27/10/1919.
- Argentina. *Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes*. Registrada bajo el número 26.061. Sancionada el 28/09/2005, promulgada el 21/10/2005, B.O. del 26/10/2005.
- Argentina. Provincia de Santa Fe. *Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes*. Registrada bajo el número 12.967. B.O. del 22/04/2009.
- Ariès, Philippe. 1986. La infancia. En *Revista de Educación*. Madrid.
- Ariès, Philippe. 1987. *El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen*. Taurus Ediciones.
- Aversa, María Marta. 2008. Primer Congreso de Estudios sobre el Peronismo, primera década. La política asistencial hacia la infancia popular: modelando el futuro peronista (1946-1955). Buenos Aires.
- Bastús, Luís. Los chicos fuera de las instituciones. Diario *Página/12*. Publicado en fecha 9 de octubre de 2011. Disponible en <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-30770-2011-10-09.html>
Fecha de captura: 12/05/2015
- Bustelo Graffigna, Eduardo. 2012. Notas sobre infancia y teoría: un enfoque latinoamericano. En *Salud Colectiva*. Vol. 8. N° 3. Buenos Aires.
- Bustos, Romina. 2015. *¿Jóvenes en conflicto con la Ley o Ley en conflicto con los jóvenes?* Buenos Aires. Espacio Editorial.
- Campana, Guillermo. 2014. Pibxs en Emergencia. Revista *Cátedra Paralela*. N° 11. Rosario.

- Campana, Melisa y Garma, María Eugenia. 2006. Los caminos conceptuales para dar cuenta del <<sobre qué>> en la Formación Profesional de Trabajador@s Sociales en la UNR. Revista *Cátedra Paralela*. N° 3. Rosario.
- Carli, Sandra. 2000. *Niñez, Pedagogía y Política. Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina*. Buenos Aires. Editorial Miño y Dávila.
- Casas, Ferrán. 2006. Infancia y Representaciones Sociales. Revista *Política y Sociedad*. Vol. 43 Núm. 1. España.
- Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. 2015. *Nunca más: informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eudeba.
- *Convención Internacional sobre los Derechos del Niño*. Aprobada por la República Argentina según la ley 23.849, sancionada el 27/09/1990, promulgada de hecho el 16/10/1990, publicada en el B.O. el 22/10/1990.
- Daroqui, Alicia y Guemureman, Silvia. 1999. Los <<menores>> de hoy, de ayer y de siempre. Un recorrido histórico desde una perspectiva crítica. En *Delito y Sociedad*. N° 13. Buenos Aires.
- *Declaración de Ginebra*. Adoptada por la Sociedad de Naciones el 26/12/1924.
- Defensoría del Niño. 2013. *Observatorio de los derechos de la niñez y la adolescencia. Informe 2013*. Santa Fe.
- El Año Internacional del Niño. Revista *Latinoamericana de Psicología*. Vol. 11. N° 1. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80501115>
- Eroles, Carlos. 2002. Los Derechos del Niño son Derechos Humanos. En Eroles, C., Fazzio, A., Scandizzo, G. *Políticas Públicas de Infancia. Una Mirada desde los Derechos*. Buenos Aires. Espacio Editorial.
- Eroles, Carlos. 2002. Paradigmas, actores sociales y políticas públicas. En Eroles, C., Fazzio, A., Scandizzo, G. *Políticas Públicas de Infancia. Una Mirada desde los Derechos*. Buenos Aires. Espacio Editorial.
- Firpo, Isela y Salazar, Laura. 2011. Estado, Política y Niñez. Universidad Nacional de Entre Ríos, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Paraná. Argentina.
- García Méndez, Emilio. 1994. La Convención Internacional de los Derechos del Niño: del menor como objeto de la compasión-represión a la infancia-

adolescencia como sujeto de derechos. En *Derecho de la infancia/adolescencia en América Latina: de la situación irregular a la protección integral*. Disponible en http://www.iin.oea.org/La_convencion_internacional.pdf

- Giménez, Paola. 2009. Estado, Cuestión Social e Infancia: el Patronato Nacional de Menores (1931-1944). En *Segundas Jornadas Nacionales de Historia Social*. Córdoba.
- Goffman Erving. 2001. *Internados. Ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales*. Buenos Aires. Amorrortu.
- Golbet, Laura. 2010. *De la Sociedad de Beneficencia a los Derechos Sociales*. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Buenos Aires. Disponible en <http://www.trabajo.gov.ar/downloads/seguridadSoc/delasociedaddebeneficenciaalosderechosociales.pdf>
- Guber, Rosana. 2005. *El Salvaje Metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo*. Buenos Aires. Paidós.
- Guber, Rosana. 2006. *La etnografía: método, campo y reflexividad*. Buenos Aires. Editorial Norma.
- Iamamoto, Marilda. 2003. *El Servicio Social en la contemporaneidad. Trabajo y formación profesional*. San Pablo. Cortez.
- Jiménez García, Joel Francisco. 2000. *Derechos de los niños*. Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, Universidad Nacional Autónoma de México. México.
- Kuhn, Thomas S. 2004. *La estructura de las revoluciones científicas*. 8va reimpresión. Argentina. Fondo de la Cultura Económica.
- López, Néstor... [et ál.]. 2012. *La Situación de la Primera Infancia en la Argentina: a dos décadas de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño*. Fundación Arcor. Córdoba.
- Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de Santa Fe. 2013. *Estándares de Calidad, prácticas y condiciones de alojamiento en los ámbitos de cuidados alternativos residenciales para niñas, niños y adolescentes*. Santa Fe.
- Murga, María Eleonora y Anzola, María Griselda. 2011. *Desarrollo de Sistemas de Protección Integral de Derechos en el Ámbito Local*. Universidad Nacional

de Entre Ríos, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Paraná. Argentina.

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado en fecha 16/12/1966. Disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>
- Panzerini, Lorena. El desafío de valerse por sí mismos. Diario *Página/12*. Publicado en fecha 02 de marzo de 2015. Disponible en <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-48195-2015-03-02.html>
Fecha de captura: 12/05/2015.
- Parra, Gustavo. 1999. *Antimodernidad y Trabajo Social. Orígenes y Expansión del Trabajo Social Argentino*. Buenos Aires. Espacio Editorial.
- Perón, Eva. 1951. *La Razón de mi Vida*. Buenos Aires. Ediciones Peuser. Disponible en <http://www.elortiba.org/larazon.html>
- Rodríguez Sala-Gómezgil, Ma. Luisa. 1983. El lenguaje como elemento cultural de identidad social en la zona fronteriza del norte de México. *Estudios Fronterizos*. N° 2.
Disponible en <http://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref/article/view/365/589>
- Roigé, Mariana. 2010. *Niñez, Marginalidad y Políticas Públicas. Análisis de un dispositivo estatal*. Buenos Aires. Libros de la Araucaria.
- Romero, Luís Alberto. 1994. *Breve historia contemporánea de la Argentina*. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.
- Salvia, Agustín (Editor). 2016. *Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social*. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Educa.
- Torre, Juan Carlos y Pastoriza, Elisa. 2002. La democratización del Bienestar. *Nueva Historia Argentina*. Buenos Aires. Editorial Sudamericana.
- UNICEF. 2013. *Superando el Adultocentrismo*. Santiago de Chile.
- UNICEF–SENAF. 2012. *Situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en la República Argentina*. Relevamiento nacional y propuestas para la promoción y el fortalecimiento del derecho a la convivencia familiar y comunitaria. Argentina.

- Veyne, Paul. 1987. El Imperio Romano. En Ariès, P. y Duby, G. *Historia de la Vida Privada*. Tomo I. Imperio Romano y Antigüedad tardía. Taurus Ediciones.